



COLOMBIA

entre la y la **rebeldía** **esperanza**

Reflexiones en torno a la
Movilización Social
28 de abril de 2021

ISBN: 978-958-56924-9-7

Editorial Kavilando - Redipaz - Desde Abajo

COLOMBIA: ENTRE LA REBELDÍA Y LA ESPERANZA

Reflexiones en torno a la Movilización Social 28 abril de 2021

Autores/as

Raúl Zibechi / Alfonso Insuasty Rodríguez / Andrés Felipe Martínez Ángel / Yani Vallejo Duque /
José Fernando Valencia / Daniela Barrera Machado / Jairo Montoya / Edison Villa Holguín / Hector
Alejandro Zuluaga Cometa / José Alonso Andrade Salazar

**GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y EDITORIAL KAVILANDO / DESDE ABAJO /
RED INTERUNIVERSITARIA POR LA PAZ - REDIPAZ**

2021

Título: COLOMBIA: ENTRE LA REBELDÍA Y LA ESPERANZA. Reflexiones en torno a la Movilización Social 28 de abril de 2021. ISBN: 978-958-56924-9-7 Autores.as: Raúl Zibechi / Alfonso Insuasty Rodríguez / Andrés Felipe Martínez Ángel / Yani Vallejo Duque / José Fernando Valencia / Daniela Barrera Machado / Jairo Montoya / Edison Villa Holguín / Hector Alejandro Zuluaga Cometa / Jose Alonso Andrade Salazar. Grupo de Investigación y Editorial Kavilando (958-59647), Desde Abajo, Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ. 156 p. Sello Editorial: Grupo de Investigación y Editorial Kavilando (958-59647). Kavilando: www.kavilando.org Web-Editorial Kavilando: info@kavilando.org Medellín–Colombia. 2021

Colombia: entre la rebeldía y la esperanza.

Reflexiones en torno a la Movilización Social 28 de abril de 2021.

ISBN Obra Independiente: 978-958-56924-9-7

Sello Editorial: Grupo de Investigación y Editorial Kavilando (958-59647). Kavilando: www.kavilando.org Web-Editorial Kavilando: info@kavilando.org Medellín–Colombia. 2021

Grupos de investigación: Grupo de Investigación y Editorial Kavilando (958-59647), Grupo de investigación GIDPAD Universidad de San Buenaventura Medellín, Grupo de Investigación en derecho constitucional crítico y género UNAULA. Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ y Editorial Desde Abajo

Fotos internas: Eliecer Escobar. Contacto: escobaro709@gmail.com

Corrección de estilo: Juliana Jurado

Imagen de portada: Cristian David Salazar Berrio, Comunicador audiovisual. salazarcristiand@gmail.com

Diseño y diagramación: Yon Leider Restrepo, Piermont SAS

Primera edición: 2021

Aviso legal: Los autores son responsables del contenido de la presente obra.

Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CCBY-NC-ND 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>

DEPÓSITO LEGAL: Se da cumplimiento a lo estipulado en la ley 44 de 1993, decreto 460 de 1995 y decreto 358 de 2000.

Impreso en Colombia - Printed in Colombia.

Autores/as.

Raúl Zibechi: escritor y pensador-activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina.

Alfonso Insuasty Rodríguez: Licenciado en Filosofía, Especialista en Ciencias Políticas, Magíster y Doctor en Conocimiento y Cultura en América Latina Ipecal (Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, A.C.). Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, director del grupo de investigación Gidpad, Editor de la Revista Académica El Ágora USB, integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz (Redipaz-Colombia), integrante del Grupo de Investigación Kavilando. Medellín (Colombia).

Andrés Felipe Martínez Ángel: Sociólogo y periodista popular, integrante del colectivo Loma Sur y del medio de comunicación alternativa Desde Abajo.

Yani Vallejo Duque: Abogado, especialista y magíster en derecho procesal penal. Investigador del Grupo de Investigación Kavilando

José Fernando Valencia Grajales: Docente investigador Universidad Autónoma Latinoamericana, Director del Centro de Investigaciones Socio jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Contacto: jose.valenciagr@unaula.edu.co

Daniela Barrera Machado: Feminista, Psicóloga, especialista psicología social aplicada; Magister en Psicología Social Docente investigadora del CIDEH, Universidad de San Buenaventura. Investigadora grupo de investigación Kavilando

Jairo Montoya: Ingeniero de sistemas e investigador del grupo de investigación y Kavilando

Edison Villa Holguín: Magíster en Educación, educador popular, activista social, cursa estudios Doctorales en el Ipecal (México). Docente investigador, Coordinador de investigaciones Academia Superior de Artes. (CORPOASA).

Hector Alejandro Zuluaga Cometa: Politólogo, Especialista en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, Magíster en Educación y derechos humanos Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, Investigador grupo de investigación Kavilando.

José Alonso Andrade Salazar: Psicólogo. Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín extensión Armenia. PhD. Pensamiento complejo. Magíster Investigación integrativa.

Contenido

Introducción.....	8
Ruta metodológica.....	10
1. La construcción de una rabia colectiva.....	13
Del modelo de sustitución de importaciones (ISI) al neoliberalismo	20
Menos Estado, mayor mercado, más deuda y precarización social	26
Constitución de 1991 y neoliberalismo	32
Y llega la pandemia.....	40
2. De la desesperanza a la potencia de lo posible.....	43
Minga Nacional, Congreso de Los Pueblos, Tribunal Permanente de los Pueblos y Marcha Patriótica	45
La revolución de las ruanas.....	48
¡El pueblo no se rinde, carajo!.....	54
La defensa del medio ambiente	55
Paro del 21 de noviembre de 2019 – 21N.....	56
Pandemia, hambre y trapos rojos.....	58
La tragedia del 9 de septiembre de 2020 - 9S	62
3. Un pueblo humillado y excluido se levanta.	
Paro Nacional del 28 de abril de 2021 – 28A.....	64
Entre violencia estatal, negacionismo y la clara voluntad de no negociar.....	70
Del bloqueo social a las convergencias desde las movilizaciones populares	77
¿Quiénes y cómo se movilizan?	78
El pueblo cuida al pueblo: Primeras Líneas - APH - DDHH	83

Mujeres.....	88
Las nuevas formas de comunicar.....	90
4. El Suroccidente colombiano, ejemplo de resistencia.....	96
Gobierno y “gente de bien” en contra de la Minga indígena	104
Cali, “sucursal del cielo”	106
Juventud precarizada.....	108
Corazones latiendo de imaginación y resistencia	109
Primeras Líneas	114
Puerto Resistencia, escenario de libertad.....	115
“Barrio adentro”	118
5. Reflexiones finales, a modo de conclusiones abiertas.....	122
Algunas características que marcan este momento histórico de 2021	123
Referencias bibliográficas.....	132

Introducción y metodología



Introducción

El presente texto busca considerar las condiciones contextuales en las que emerge el fenómeno de la movilización de una gran parte de la población colombiana que, según la manifestación de inconformidad acontecida entre abril y julio de 2021, se siente en descontento social, por condiciones de exclusión social, segregación clasista y precarización de condiciones de vida en dignidad y justicia. Esta reflexión analítica y etnográfica trata de entender como esas diversas iniciativas y expresiones de organización social, popular y comunitaria emergen generando un nuevo ámbito político, que desborda la cultura de la representatividad, potenciado por nuevas subjetividades y colectivos sociales, que avanzan en términos de conciencia colectiva de bien común y en cultura política confrontativa como clase precarizada, hacia la transformación de la oficialidad opresiva secuestrada por las agremiaciones económicas de beneficio privado, bajo el modelo neoliberal.

Este ejercicio de caracterización de la experiencia de la presente movilización colombiana, fue propuesto y articulado por personas dedicadas a la investigación social y por integrantes de colectividades y medios de comunicación alternativa y popular, que han estado haciendo seguimiento a las dinámicas y procesos de la “población movilizada” a nivel regional y nacional en los últimos tiempos. Se retoma dentro de este material a modo testimonial y documental, un enfoque de problematización de los hechos, a partir de los espacios de escucha y reflexión colectiva, logrando visualizar el reclamo social, pero sobre todo el reconocimiento de las situaciones de dificultad y posibilidad que se han tenido en la vivencia movilizadora del trabajo organizativo comunitario directo, desde lo territorial, que sortea las situaciones económicas de

subsistencia, además del opresivo trámite de sobrevivencia con las instancias de la oficialidad y los grupos armados que hacen presencia en las zonas donde viven.

El texto tiene como hilo conductor, las búsquedas de los momentos en los que liderazgos organizativos populares desbordaron el llamado a paro nacional hecho por las centrales obreras, subiendo el tono político, hacia un perfil confrontativo desde las dinámicas de resistencia que las comunidades han construido, para ocuparse colectivamente de las situaciones problemáticas con las que se vive dentro de los territorios en perspectiva desde abajo, en su búsqueda legítima como sujetos políticos desde el accionar organizativo, haciendo uso del derecho a la protesta promulgado en la constitución colombiana, logrando fortalecer desde allí, herramientas de acción directa y de defensa popular, que favorece una subjetividad política, para incidir desde espacios de movilización, en el genuino ejercicio de participación directa como comunidad.

Se logra concretar este texto, a partir del acercamiento a las múltiples formas de movilización, y en interacción constante con los participantes de los diversos grupos y colectividades manifestantes, desde sus espacios de diálogo y concertación asamblearia como comunidad, en los barrios, comunas populares, veredas y pueblos en su extraordinario intento por la transformación social. Esta compilación del accionar popular consolidado desde el acercamiento investigativo y reflexivo, nos permite metodológicamente hacer algunas consideraciones sobre las preguntas por ¿cómo es y en qué condiciones emerge el protagonismo organizativo comunitario movilizado en 2021 en aras de resistir a los embates de las reformas neoliberales? ¿Como estas contingencias históricas hacen que las comunidades y colectividades movilizadas consoliden acciones organizativas de defensa popular en un marco histórico de deslegitimación oficial?

Como ejercicio investigativo de consolidación de una memoria histórica del proceso, se enfatiza en la necesidad de la propia recuperación y configuración de la acción movilizadora como sujetos y colectivos

de transformación. Relatos y testimonios que se van posicionando, en el intento de interpelación a la injusticia estatal, generando pistas en camino de construcción de propuestas alternativas de defensa social, territorial y política desde las comunidades.

Desde la investigación participante, este tipo de procesos reflexivos implica tener presente los desafíos sociales que se traducen en la consolidación de las propias posturas ético-criticas como sujetos sociales y políticos. Al pensar los escenarios históricos de la movilización en Colombia, se fue posicionando cualitativamente el sujeto orgánico comunitario, que además de reflexionar sus necesidades y problemáticas, avanza en la construcción de una agenda política emergente a partir del reconocimiento de la potencia de lo común y lo procomún

Ruta metodológica

Como estrategia metodológica el presente texto se construyó a modo de sistematización a partir de conversatorios, talleres y entrevistas con la población movilizada como fuente primaria, según la información que fue emergiendo en las conversaciones y que ameritaba profundizar, además se accedió a otro tipo de fuentes desde la revisión documental, artículos de prensa y diversas publicaciones institucionales y alternativas. Las consideraciones de dichos conversatorios fueron la base para la búsqueda de preguntas e interpretaciones que fueron consolidándose como reflexión de la praxis de las experiencias situadas desde la organización emergente de la población manifestante.

En la dinámica de encuentro como equipo de trabajo y con las organizaciones en la calle y en los sitios de resistencia se fue configurando y consolidando información desde la observación participante, con la cual se construyeron y confrontaron datos de ese sujeto social movilizado. Al realizar este seguimiento testimonial a los procesos, como ejercicio de reconocimiento a la población participante en las multitudinarias manifestaciones de reivindicación popular, se llegó con preguntas iniciales como: ¿Quiénes se movilizan y cómo han logrado

coordinar la acción conjunta?, estas se fueron contestando en la medida en que la apuesta sistematizadora logra interactuar de manera directa las personas participantes del proceso, propiciando conjuntamente visualizar algunos aspectos y consideraciones sobre lo que sucede con el contexto inmediato como población en descontento social.

Se propone una ruta de construcción del presente texto buscando compilar y validar información desde la perspectiva de la población participante, desde los ejercicios de socialización en los plenarios de la asamblea nacional popular y los diversos tipos de expresión organizativa, como las concentraciones, las velaciones, las marchas carnavalescas y demás acciones en las que se ha apoyado la organización social, para sus propósitos movilizados. De esa manera surgen en las interlocuciones, variados aportes en la consolidación de posturas críticas frente a los diseños y las proyecciones de la mentalidad neoliberal oficial, que, a partir del poder hegemonizado, propone seguir condicionando la construcción comunitaria de la vida en el territorio.

Dichos ejercicios de sistematización buscaron metodológicamente propiciar un escenario de reflexión participativa, permitió al equipo de trabajo avanzar en el mapeo de actores y problemáticas a partir de la elaboración de cartografías sociales, donde se proyectan de acuerdo a los contextos, las identidades y los rasgos comunes que permiten nombrar al sujeto social, en términos de lo que les convoca y les impulsa frente a las situaciones de las que hay que ocuparse tratando de avanzar desde lo colectivo, dimensionando los modos en los que se construye movilización logrando llegar a la incidencia en las dinámicas políticas y económicas, y socio-culturales en términos del desmejoramiento de la calidad de vida, la desestabilización económica de los hogares y la pauperización de sus condiciones materiales, afectaciones que se busquen asumidas como móviles de lo organizativos comunitarios en defensa de su construcción política y de identidad territorial.

La observación participante favoreció la identificación de situaciones contextuales, como condiciones de posibilidad para potenciar la

movilización. De allí en medio del proceso de indagación se logró plantear cuestiones relativas a la historia de la organización movilizadora desde la construcción de lo identitario, local y nacional. En tales escenarios, de dialogo con y desde la dinámica social y con las instancias organizativas del propio contexto, logrando establecer una panorámica reflexiva de categorías a partir de reagrupar las reflexiones y relatos recogidos desde los espacios asamblearios donde la decodificación contextual y conceptual desde el trabajo con la memoria histórica a partir de la valoración de la participación que se ha tenido en con lo organizativo comunitario. De allí se focalizaron algunas luchas y sus acumulados en las últimas dos décadas, con casos emblemáticos en términos de las problemáticas, de hechos, comportamientos, posturas y percepciones y la diversidad de formas de manifestación generadas que va develando líneas de acción en términos de intervención política neoliberal vía oficialidad versus enfoques de lucha y resistencia de los procesos populares acontecidos a partir de las situaciones de despojo, desalojo, desarraigo y fractura del tejido social. Asuntos que se logran recuperar y consolidar a partir del presente guion de sistematización, basados en lo contextual, coyuntural enfrentadas por dichos sujetos sociales.

1. La construcción de una rabia colectiva



Podemos retroceder en el ADN de la historia de Colombia para ubicar elementos constantes que sustentan un incesante escenario de luchas desde abajo, desde los pueblos, una pulsión de crisis aunada a un flujo pendular de violencia y paz. Podríamos así, remitirnos a la gran masacre cometida por los Invasores españoles al llegar a estas tierras que -para ellos- eran nuevas y muy ricas en recursos, esa cruel aplicación de una lógica de exterminio, de domesticación por medio del uso de fuerza y la barbarie, la pedagogía del terror, y todo por la acumulación ramplona de riqueza, un pillaje enmascarado de honor y bondadosa evangelización, toda una justificación de la inhumanidad total, avalada por los poderes político, religioso y militar de la época.

Con la llegada de los invasores también llegaron sus prácticas execrables, como el tráfico de seres humanos: los esclavos eran hombres y mujeres quienes perdían su libertad, que no poseían derechos políticos y que, por ende, quedaban a merced de un amo que determinaba todo a su alrededor: recuérdese cómo millones de personas fueron secuestradas y esclavizadas en el continente africano y luego fueron llevadas en cautiverio a servir en casas, minas o cultivos rurales de las colonias de los países europeos, donde América no fue la excepción (Oliveros, 2011).

Sin embargo, desde estas primeras épocas es posible identificar las primeras luchas por la libertad (Melo, 2017). Una de las figuras representativas puede ser Domingo Benkos Biohó, quien hace aproximadamente 400 años lideró la lucha antiesclavista en Cartagena de Indias y sus alrededores. Benkos se fugó, junto con otros hombres y mujeres esclavos, hacia el interior de las sabanas y montes que rodeaban Cartagena de Indias; en estos lugares, los palenqueros o cimarrones crearon comunidades compuestas de redes culturales y sociales que les permitieron volver a vivir libremente, resistiendo al sistema esclavista en el interior de la Costa Caribe y otras regiones del

Nuevo Reino de Granada. Habitualmente las autoridades españolas organizaban expediciones armadas contra ellos, con el fin de recapturarlos y destruir sus palenques pero nunca lograron terminar con esta forma de organización (Oliveros, 2011).

Pero en vista de la aguerrida resistencia y constantes ataques de los cimarrones para liberar esclavos, en 1603 se firma la capitulación de paz entre cimarrones y españoles. Ya para el año de 1713 la Corona de España emitió el Decreto Real declarando aquel palenque libre de esclavitud (San Basilio de Palenque, primer pueblo de africanos libre en América, s.f.).

Las comunidades indígenas también, de manera valerosa, se opusieron a la penetración hispana: los tairona y los quimbaya fueron de los más activos. Durante la segunda mitad del siglo XVI, se sucedieron las rebeliones y los ataques a los poblados de Santa Marta y Bonda, que tuvieron que ser reconstruidos en muchas ocasiones. Las principales ofensivas taironas se registraron en 1555 y entre los años 1571 y 1575. La respuesta de los gobernadores no fue otra sino enviar diferentes expediciones para tratar de castigar a estos seres sin alma, según su creencia. Comunidades más pequeñas, como los chimilas y los tupés, fueron excelentes y audaces flecheros de dardos envenenados, y también colocaron en aprietos a los asentamientos españoles con su práctica de ataques nocturnos. Es así como el ADN de la resistencia siempre ha estado, desde nuestros hermanos mayores.

Otro de los hechos de resistencia a resaltar es la lucha de la aguerrida Cacica de Timaná en los Andes, conocida entre los colonizadores como “La Gaitana”. Resulta simbólico que para 1853, el hoy derribado Sebastián de Belalcázar enviara a Pedro de Añazco a crear una villa en Timaná y éste, al llegar, solicitó una reunión con todos los caciques negándose a hablar con La Gaitana, por ser mujer, convocando al segundo al mando, quien era su hijo y al negarse a asistir, envió a que lo buscaran en la noche y frente a su madre lo quemaron vivo.

Así, lo narró Fray Pedro Simón:

una india viuda llamada La Gaitana (no sé si por nombre propio o puesto por los nuestros, desde los primeros que pisaron aquellas tierras). Era esta una gran señora a quien obedecían con gran puntualidad gran número de vasallos, emparentada con los más principales de ellos, que tenía sólo un hijo mancebo, de buena edad, obedecido de todos como a ella (Simón, 1981).

Su rabia y ansias de venganza la llevaron a congregar más de seis mil indígenas con los que atacó al invasor Pedro de Añazco, que con tan solo 20 hombres fue de inmediato reducido y entregado a La Gaitana quien también lo asesinó. La resistencia continuó en alianza con el cacique Pigoanza de los yalcones, pero también se unieron los paeces, los aviramas y los guanacas; al juntar una fuerza de 15.000 guerreros, atacaron Timaná y a causa de la caballería española debieron retirarse, pero esto no los contuvo y, por el contrario, se unieron luego a la Gaitana los pijaos y los panaes o pamaos. Si bien no se logró una derrota definitiva sobre los invasores, estos abandonaron la región por un tiempo y se demostró cómo la lucha del pueblo está por encima de sus opresores (Acosta, 2004).

Damos otro salto en la historia y nos encontramos con la revuelta comunera, un grito insurreccional ante la acumulación de medidas opresivas de la Colonia. La gota que rebosó la taza fue la implementación de reformas fiscales y económicas que implican una mayor carga fiscal sobre la población, pero como contracara mayores privilegios y exenciones para pequeños grupos sociales privilegiados y protegidos por el Virreinato o por la Corona Española. Muchas restricciones, por ejemplo, al cultivo de tabaco y al aguardiente local para favorecer la producción en España. Una insurrección provocada por un descontento generalizado, que se apuntaló contra gobiernos locales. Una revuelta que costó muchos muertos y persecución, pero que concluyó con una

negociación: la firma de un acuerdo que la Corona Española y el Virreinato no cumplieron, generando otro período de protestas aplacadas por medio del uso de la fuerza, concluyendo con el apresamiento y cruel asesinato de sus más visibles líderes.

Sigue la historia y nos encontramos con figuras que siempre se han presentado como los verdaderos protagonistas de la gesta independentista: es este el caso de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, pasando por Antonio Nariño, Jose María Carbonell, Camilo Torres. Todas estas personas, claramente, jugaron roles de importancia en la lucha. Sin embargo, se invisibilizó en los libros de historia el liderazgo de las mujeres, como se pasó de largo por el papel que desempeñó Policarpa Salavarrieta y su rol clave en el grito del 20 de julio de 1810, quien a sus 22 años muere fusilada por el ejército español, convirtiéndose en un ejemplo de dignidad para la resistencia de la época (Canal Institucional, 2020).

Los rostros de Juana Bejar, mujer pionera en ejercer cargos de liderazgo dentro del Ejército Patriota, al ser la primera Sargento Mayor de Caballería; o la gallardía de Juana Velasco de Gallo, quien dio una ayuda vital en la Batalla de Boyacá, apoyando al Ejército del Libertador Simón Bolívar. Cómo no nombrar a María Antonia Ruiz, la heroína negra, quien quemó el edificio donde los realistas almacenaban las armas y se enfrentó a la infantería sin un ápice de temor. O figuras más reconocidas como Manuela Sáenz de Santamaría, la mujer sabia de la colonia, estimulando las ideas revolucionarias. Era políglota, científica e ilustrada; grandes sus aportes para la independencia. O la misma Manuela Beltrán, otra de los grandes referentes de la historia de Colombia, entre otras cosas, por su frase “Viva el rey y muera el mal gobierno” (Canal Institucional, 2020). Todo esto muestra que siempre se oculta o invisibiliza el rostro de las mujeres que apoyaron la gesta de la independencia.

Si bien los ejércitos eran comandados en su mayoría por criollos, surge entonces la pregunta sobre quiénes eran los miles de soldados

combatientes. No es otra la respuesta: se trataba de mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas, generalmente gentes pobres, escasas de alimentos y vestidos, llamados por las autoridades españolas “insurgentes”. Hombres y mujeres en el total anonimato, pero sin los que no estaríamos hoy en las calles, luchando por una segunda y definitiva independencia.

Otro de los hitos de la lucha obrera que de nuevo muestra lo aguerrido del pueblo colombiano es lo que se conoció tristemente como la Masacre de las Bananeras. Los hechos se remontan al 12 de noviembre de 1928, cuando estalla una gran huelga en toda la región bananera del Magdalena. Se dice que la huelga contó con alrededor de 25.000 trabajadores de las plantaciones de banano, quienes se negaban a cortar la fruta hasta que fueran mejoradas sus condiciones laborales (Elías Caro, 2011). Lo ocurrido entre el 5 y 6 de diciembre de 1928 es hasta hoy el evento con más disputa en términos de memoria histórica y colectiva. La “gente de bien”, desde la misma época, ha negado los muertos y reducido el hecho a una mera revuelta de comunistas. Pero los mismo sobrevivientes –Alberto Castrillón y Raúl Eduardo Mahecha–, hablaron de cientos de víctimas desarmadas, pero el joven Gaitán denunció el hecho en el congreso reportando los muertos en mil. Lo cierto es que la noche del 5 de diciembre corrió el rumor de que el gobernador iría a entrevistarse con los trabajadores para buscar solución al paro, pero nunca llegó. En vista de la huelga el gobierno central expidió el Decreto Legislativo número 1, que declaraba el estado de sitio en la zona por turbación del orden público y designaba al militar Cortés Vargas jefe civil y militar de la misma.

Es asombrosa la similitud con las movilizaciones actuales. Como era de esperar, el militar llegó y lo primero que ordenó fue disolver “toda reunión mayor de tres individuos” y amenazó con disparar “sobre la multitud si fuera el caso”. Siendo la 1:30 am del 6 de diciembre, formó a la tropa delante de los concentrados en Ciénaga. Procedió con la lectura de los decretos y luego de conminar a la multitud a retirarse, dio un plazo

de cinco minutos que prolongó por uno más. Según Cortés Vargas “era menester cumplir la ley, y se cumplió”. Corrieron ríos de sangre de los obreros que vieron cómo los militares, sin la menor noción de lealtad y orgullo militar, apuntaron y dispararon contra una “multitud inerme y pacífica” (Archila, 2008).

Un salto en la historia para encontrar otro hito en la década de 1940, que además dará un giro a la historia reciente de Colombia. El líder que abanderó la propuesta bajo la que se recoge el sentir y el reclamo de un pueblo, Jorge Eliécer Gaitán, es asesinado el 9 de abril de 1948, eliminando así una esperanza popular. El Bogotazo inicia una espiral de violencia que marcará la historia del país. Esta lamentable violencia de un pueblo asesinándose entre sí, guiado por el fervor de una bandera o el sentimiento irracional de pertenencia a un partido, concluyó con una negociación entre élites de los dos partidos tradicionales en el famoso Frente Nacional, la alternancia en el poder entre conservadores y liberales, una negociación excluyente y clasista. Una clara negación de la diversidad, de la democracia real, el desconocimiento de la diversidad organizativa popular, campesina, étnica. Todas estas expresiones de las élites generaron el caldo de cultivo para innumerables levantamientos populares, de corte ciudadano o armados; muchos concluyeron sus proyectos con la firma de acuerdos de paz, que permitieron la entrada a la vida civil de quienes tomaron las armas, pero una vez firmada la paz, sufrieron la negación violenta, la eliminación física, la negación por vía normativa o por cooptación de sus proyectos y reclamos.

Lo que queremos resaltar a través de este salto por la historia es el constante levantamiento popular ante su constante negación, ese ejercicio del poder hegemónico de exclusión, segregación, invisibilización de pueblos en lucha por parte de una élite anclada al poder, que se transmite casi por líneas de sangre, generación tras generación, por una élite política y económica que afianza sus prebendas, privilegios y lujos, haciendo del Estado su bastión de clase.

Es así cómo las revueltas populares han marcado la dinámica histórica en Colombia: levantamientos contra la opresión, unos más organizados que otros, levantamientos armados o ciudadanos, han jalonado la historia del país, pero todos han sufrido y enfrentan un fin similar: la cooptación, una falsa negociación, la eliminación física, la eliminación del proyecto y hasta la eliminación del relato histórico.

Otra conclusión que va quedando, es que las élites enquistadas en el poder se han movido bajo intereses extranjeros y a beneficio propio, buscando una mejor posición en los negocios pactados, asunto que ha redundado, como contracara, en una instituida miseria para pueblos enteros, entrega de territorios y un violento reordenamiento de regiones para el desarrollo de esa planeación venida del exterior.

Del modelo de sustitución de importaciones (ISI) al neoliberalismo

Luego de la Segunda Guerra Mundial, gracias a los acuerdos de Bretton Woods, convención realizada en julio de 1944 y que reunió a 44 países con el fin de establecer un nuevo modelo económico mundial de posguerra, se fijarían las reglas de las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados y la forma en que se relacionarán con los países dependientes no desarrollados (Jiménez Bermejo, 2016). Se crea, así, una arquitectura internacional que trazará la historia y el orden regional del mundo occidental. Nacen en este período las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus pares regionales, y además se define que el patrón del mundo capitalista ya no será el oro sino el dólar.

Para América Latina, de 1930 a 1970, se le impuso como ruta implementar el modelo de “sustitución de importaciones” (ISI), trazado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), institución creada bajo la Resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social de la ONU, el 25 de febrero de 1948, que bajo la Resolución 1984/67 del 27 de julio de 1984 decidió llamarla Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1998). La instancia fue creada para estudiar y trazar las

rutas de la economía, desde la mirada de los países “desarrollados”, para América Latina y el Caribe, instancia que juega aún un papel estratégico.

Este modelo sostenía que el subdesarrollo obedecía a las condiciones internas y estructurales: carreteras, energía, producción industrial propia; y hablaba de un desarrollo hacia adentro buscando delegar esa tarea al Estado, generando las condiciones de protección hacia la industria nacional como base fundamental para alcanzar un esperado nivel de “desarrollo”. En esta etapa será el Estado el motor y protector directo de la economía. Vale decir que este modelo se impone en tanto los países del Norte se encontraban en recuperación después de dos devastadoras guerras mundiales, de modo que temporalmente no podían generar la producción que requerían sus países dependientes.

Esta época registra, como consecuencia, un fuerte proceso de modernización, pero a costa de un alto grado de dependencia por medio del endeudamiento internacional, que inyectaba el capital que se requería para gestar estas obras de infraestructura. Es precisamente este alto costo de inversión el que exigía que fuese el Estado el garante de esta gestión, delegándosele la tarea central de desarrollar la costosa infraestructura de base, gestando así una suerte de capitalismo de Estado en América Latina.

Puede decirse que la industrialización se inicia en Colombia bajo los efectos de las crisis mundiales, de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929, ya que éstas suponían condiciones comerciales y económicas particulares, incluyendo políticas estatales para frenar la ola de la crisis mundial, que favorecieron el surgimiento de la industria nacional (León Palacios, 2002). Por ello, para caracterizar una burguesía industrial y, por consiguiente, unos obreros industriales, debemos hablar de las relaciones entre los cafeteros y los industriales, pues su constitución como fracciones de clase va implicando ciertas distancias entre los intereses de una y otra. Lo primero que se forma en el país, derivado de una agricultura capitalista cafetera fue, precisamente, una burguesía cafetera, cuya formación se dio como clase dominante por la

expansión del cultivo de café entre los años 1900 y 1925 (Kalmanovitz, 1977). En 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros, con amplia influencia en el Estado y en los gobiernos que asumieron su representación internacional, incluso como si fueran un ente del Estado. Para 1944, la industrialización hace necesaria, para la burguesía industrial, la fundación de la ANDI –antes estaban representados en la Federación Nacional de Industriales– pero también por las crecientes y continuas disputas con la burguesía agro-exportadora, dado el relativo dominio de la política económica que mantenían los cafeteros por el control de las divisas y el grado de devaluación. Eran luchas en las que el Estado -recordemos- no era más que “el lugar de disputa” en términos del historiador Daniel Pécaut.

Desde este momento podemos hablar de una burguesía industrial caracterizada como clase, con dos rasgos identitarios: su creciente poder económico y político que ya empieza a colocarle condiciones al Estado, y su pragmatismo particularista. En contraposición a esta formación también se crea, en las tres primeras décadas del siglo *XX*, una creciente clase obrera urbana que proviene de zonas rurales, principalmente derivada del proceso de metropolización nacional y de la ya mencionada bonanza cafetera (León Palacios, 2002). Si bien se habla de clase, los historiadores económicos solo reconocen a los obreros como clase constituida hacia los años sesenta.

En Bogotá y Medellín aparecieron fábricas dedicadas a la producción de bienes de consumo como cervezas, chocolate, fósforos, jabones, textiles, etc. Pero existía una clara relación entre el poder político y económico, lo que llevó a una diferenciación en el crecimiento económico de las regiones. Puede decirse que los dirigentes provenientes de las prósperas regiones de Antioquia, viejo Caldas y Bogotá manejaron la economía entre 1930 y 1990, mediante su influencia en cargos de poder como el Ministerio de Hacienda, la Junta Directiva del Banco de la República y la dirigencia gremial, entre otros. La presencia dominante de estos dirigentes y políticos explica “el mayor desarrollo relativo de la

zona central del país, en contraposición con las regiones en la periferia colombiana como las costas sobre el mar Caribe y el Pacífico, el sur y la parte oriental de Colombia” (López Rivera, 2018).

Esta dinámica de industrialización nacional muestra cómo las desigualdades entre las regiones también fueron intencionadas por una élite andina que tomaba decisiones sin tener en cuenta al territorio nacional. También se explica porque son éstas las regiones donde se presentaron las organizaciones obreras con mayor fortaleza al momento de luchar por derechos laborales, desconocidos por la burguesía nacional. A la par, se instaure como correlato cultural la idea del gran sueño americano, la vida estándar derivada del desarrollo como crecimiento de producción (industrialización) y el aumento del consumo de bienes y servicios.

Ahora bien, gracias al crecimiento de la industria, se va fortaleciendo una fuerte organización sindical y las organizaciones campesinas siguen un proceso de organización en tanto se enfrentan a un modelo que reordena la economía anclándola a la producción a gran escala (Morales, 2021) Nacen así, las grandes empresas en Colombia, las grandes centrales eléctricas, el ferrocarril, vías de comunicación, puertos. Imponer este modelo económico en la región significó, por un lado, el afianzamiento de unas castas-familias políticas que garantizarán su implementación, que serán los socios serviles del poder global y como tales serán protegidas. Por otra parte, este proceso estará acompañado de una fuerte asistencia militar que garantiza “cuidar” los procesos de transformación, defender los intereses internacionales y, además, “defenderse” del fantasma del comunismo.

La doctrina contrainsurgente fue creada por los Estados Unidos a inicios de los años sesenta con el fin de ejecutar la llamada “guerra de contrainsurgencia”. En el enfoque aquí propuesto, interesa entender la doctrina en su integralidad considerándola no tanto una estrategia de guerra sino un modelo para enfrentar

los conflictos sociales, defendiendo el orden social tradicional o imponiendo un nuevo orden afín a los intereses capitalistas. La aplicación de la doctrina tuvo su origen en la respuesta que realiza el gobierno estadounidense de John Fitzgerald Kennedy, a las revoluciones que acaecieron durante la Guerra Fría en las regiones que para la época fueron denominadas tercermundistas. Dicha respuesta fue de carácter represivo por medio de campañas de contrainsurgencia y de apoyo a golpes militares y a gobiernos de extrema derecha. El accionar represivo e intervencionista estadounidense estuvo interrelacionado con la lectura que esta potencia tenía del fenómeno revolucionario, interpretándolo como la nueva estrategia de la expansión del comunismo liderado por Moscú y, por tanto, como desafío a la pretensión hegemónica estadounidense. Fue en este contexto global en el que se sucedió un cambio en el escenario de confrontación entre las dos potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, pasando de Europa central a la periferia, en la que fueron identificados aliados y enemigos como forma de ampliación de las respectivas zonas de influencia de cada bando. Lo que implicó, para el gobierno de los Estados Unidos, el aumento de ayuda económica y militar a gobiernos o grupos contrainsurgentes alineados a favor de esta potencia (Insuasty Rodríguez, Valencia Grajales, & Agudelo Galeano, 2016).

Esta dependencia en todo orden e histórica en Colombia, no permitió que se diera como tal una revolución industrial ni agraria; por el contrario, a pesar del crecimiento generado, se dio una economía precaria, débil, de bajo impacto, anclada a políticas de alta dependencia e imposición.

A finales de los años 60 y –con mayor fuerza– en los 70, estalla la crisis de este modelo, ya que no fue posible sostener un crecimiento constante. Además, con Estados Unidos como poder hegemónico consolidado y Europa recuperada de la devastación de dos guerras mundiales y en

crecimiento, se gesta una gran crisis marcada por el aumento del precio del petróleo, una creciente contradicción del capitalismo que repercute en recesión, inflación e inestabilidad. Estalla la crisis de la deuda externa, una serie de circunstancias que apuntan hacia un nuevo ciclo marcado por la imposición del modelo neoliberal como ruta de escape de las contradicciones del sistema. A la par, se gestan grandes procesos de liberación de las antiguas colonias, crecientes rebeliones internas, aumenta el descontento de los trabajadores y se producen múltiples guerras regionales:

La denominada crisis del petróleo de 1973 demuestra que el intervencionismo estatal y las políticas de regulación del ciclo económico inspiradas en la teoría keynesiana no han sido capaces de evitar una nueva recesión, y que el modelo de crecimiento económico iniciado tras la Segunda Guerra Mundial está agotado. No se trata, por tanto, de una simple crisis coyuntural, como las de 1952, 1958-59, 1965-67, sino más bien estructural. La realidad demuestra que el modelo keynesiano puede, como mucho, prolongar el ciclo, pero no evitarlo, y que la crisis pervive como mecanismo de regulación inintencional. Cae por tierra así una parte sustancial de las razones que habían justificado el intervencionismo del Estado. Se inicia entonces un período caracterizado por la incertidumbre respecto al papel económico del Estado. Si éste es incapaz de garantizar un crecimiento económico sostenido, tampoco el mercado por sí solo lo asegura. La incertidumbre se adueña de la economía y la duda, cuando no el escepticismo cercano al ocaso de las ideologías, del pensamiento económico. Crisis estructural de la economía y crisis del pensamiento económico vuelven a caminar juntas debido a que la realidad desborda una vez más a la teoría. Los hechos parecen dar la razón en muchos aspectos a los críticos del intervencionismo estatal. El problema es que tampoco sus

fórmulas tienen la efectividad deseada. Esta desorientación se plasma en la política económica, que, oscilando entre recetas nekeynesianas y neoliberales, se convierte en fiel expresión del nuevo espíritu económico de la época (Gonzales y Torres, 1993).

Menos Estado, mayor mercado, más deuda y precarización social

En los años 70 y 80 se atisba en América Latina la llegada paulatina del neoliberalismo ante el desgaste y cierre del modelo ISI. Se impuso a sangre y fuego, bajo la aplicación de una refinada doctrina del terror (Klein, 2007), impulsada por la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, gestada por Estados Unidos e impartida gracias a la Escuela de las Américas, que se encargó –y aún se encarga– de formar los mandos militares (legales e ilegales) en la región. Para América Latina, implicó la imposición de múltiples dictaduras para reordenar la sociedad, el reacomodo de las castas políticas y la destinación económica de los territorios.

En el caso de Colombia, este modelo se fue imponiendo paulatinamente ante las fuertes resistencias civil y armada, lo que implicaba, por un lado, el reacomodo de la clase dominante y sus partidos para mantener su posición de privilegios ante este nuevo cambio de modelo económico; por otro lado, hacer frente por medio del uso de la fuerza legal e ilegal (paramilitarismo) contra toda capacidad organizativa campesina, popular u obrera que se oponía a dichos ajustes, o que hubiese logrado instaurar modelos propios sociales y económicos en los territorios estratégicos, impidiendo o demorando el paulatino rediseño institucional que preparaba el Estado para la entrada de la llamada apertura económica (Insuasty Rodríguez, Valencia Grajales, & Agudelo Galeano, 2016).

En este contexto, por ejemplo, se resalta el famoso Pacto de Chicoral (Tolima) en 1972, gracias al impulso del entonces presidente Misael Pastrana donde las élites liberales y conservadoras (gamonales latifundistas, ganaderos, arroceros y bananeros) acuerdan librar una

guerra contra los campesinos organizados en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), instancia gestada por el presidente Carlos Lleras Restrepo gracias a la Ley 1a. de 1968, con lo cual se buscaba facilitar el acceso de parceleros y campesinos a la tierra (El Tiempo, 1994). Dicho pacto buscaba:

1. Responder a la creciente movilización campesina protagonizada por una radicalizada ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos).
2. Buscar mayor productividad para aumentar la exportación de productos agrícolas, proyecto integrante de “las cuatro estrategias”, el plan económico del gobierno diseñado por el economista canadiense Lauchlin Currie; y
3. Calmar a los empresarios y grandes propietarios de tierra inquietos por la posibilidad de una expropiación motivada por las leyes de reforma agraria aprobadas en el gobierno de Lleras Restrepo (Mantilla, 2013)

Dicho pacto se hizo ley de la República en 1973. La ley cuarta de ese año benefició a los terratenientes y logró obstaculizar la expropiación de los latifundios y redujo los impuestos sobre los predios.

En términos de la unidad de víctimas, refirió la ANUC de la siguiente forma:

Por medio de la resolución 061 de mayo de 1967 se creó la división de Organización Campesina dentro del Ministerio de Agricultura, y del decreto 755 de 1967, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos nació con el objetivo de inscribir a arrendatarios y aparceros para hacerlos propietarios, generar propuestas de crédito supervisado y asociativo, y convertirse en un canal entre los campesinos y el Estado para el fomento y utilización de los servicios que éste brindaba al agro colombiano (Unidad de Víctimas, 2014).

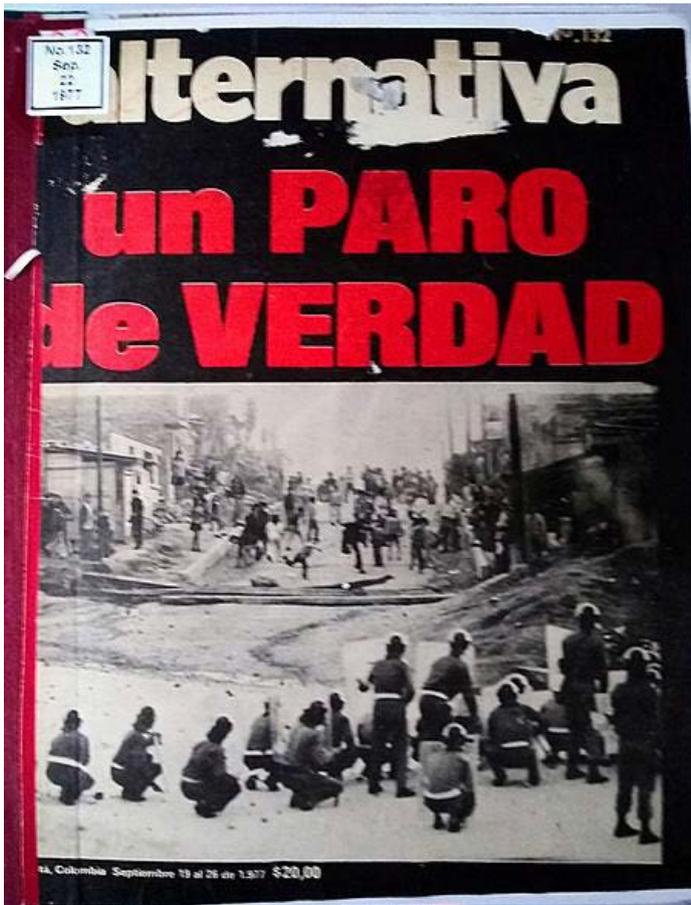
La ANUC fue una asociación sin ánimo de lucro, con carácter de confederación a través de la que se agremiaron campesinos de todo el país. Con un claro alcance nacional, tuvo presencia en más de 850 municipios y 28 departamentos, con una estructura organizada desde los niveles locales (veredales y municipales), departamentales, regionales y nacionales. Por su fuerte presencia rural, pero que tenía incidencia nacional, se desató una persecución a sus líderes y en general a sus afiliados, quienes fueron víctimas de homicidios, desplazamientos forzados y exilio, demostrándose de nuevo que la organización del pueblo por su base le genera terror a la oligarquía nacional que sabe que, si el pueblo se organiza, sus privilegios se ven en peligro.

La ANUC se caracterizó por que sus afiliados eran en su gran mayoría familias campesinas, por su pluralismo político, religioso, étnico y de género, encontrando la unidad en la promoción de su objetivo general que consistía en:

organizar, capacitar y representar a los campesinos de Colombia y actuar como su interlocutor válido, como órgano asesor y consultor ante el gobierno y la sociedad para gestionar, defender y reivindicar sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales asegurando el total respeto y cumplimiento de las garantías que le otorgan la constitución y la ley (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos [ANUC], 2017).

El resumen de su lucha era tan simple como esto: “La lucha por que en Colombia se haga de manera real una reforma agraria que redistribuya la tierra y mejore la calidad de vida para los campesinos” (Flórez, 2015). Pero esta consigna aunada al lema “la tierra para el que la trabaja”, costó tantos muertos que el mismo Estado reconoció a la ANUC como sujeto de reparación colectiva, demostrando que la sola lucha por derechos básicos en Colombia es la peor afrenta que se puede realizar al establecimiento y sus representantes. Ante estas situaciones de

cambio, devenido en una crisis económica que provoca un creciente descontento social y un contexto internacional marcado por la revolución cubana, las revoluciones centroamericanas y la guerra fría, se organiza y gesta un paro nacional sin precedentes para entonces, el Paro Cívico Nacional de 1977.



Portada: Revista Alternativa 1977. Colombia

Una contundente manifestación contra el gobierno de Alfonso López Michelsen, realizada ente el 14 y 15 de septiembre, tuvo su fuerza en las principales ciudades del país. Se afirma que, después del Bogotazo, fue la manifestación más fuerte, de mayor ejercicio de resistencia y capacidad organizativa social, al punto que se llegó incluso a hablar de momento pre-revolucionario en la época.

A pesar de esto, los años 70 y 80—aún en medio de estas condiciones sociales de protestas y fuerte inconformidad— fueron de adecuación permanente para gestar la famosa apertura económica y la imposición paulatina del modelo neoliberal. Se argumentó que el modelo ISI desestimulaba las exportaciones, propiciaba los monopolios y la falta de competencia internacional, reducía la calidad de la producción nacional y conducía, de paso, al estancamiento. Este giro y adaptación se impondrá a sangre y fuego, germinando toda una reingeniería institucional de leyes, acuerdos e instituciones que proceden al paulatino desmonte del Estado, tal como se había constituido como apuesta del modelo ISI. Así mismo, se acompañará de profundas transformaciones culturales, políticas y sociales.

La imposición de este modelo tuvo una gran resistencia social, organizativa, popular, campesina y obrera, a la que se sumaron expresiones insurgentes armadas. A la par, aparecía en Colombia y se iba fortaleciendo el que sería, tal vez, el negocio global de mayor impacto: el tráfico de drogas, que inició con el contrabando de mercancías, pasando al negocio de la marihuana y, posteriormente, al de la cocaína. Este contexto generó una nueva cultura, nuevos clanes emergentes locales, quienes rápidamente incursionaron en la política partidista y electoral, y comenzaron a financiar en momentos de crisis al sector productivo nacional. Eran los nuevos empresarios latifundistas y pronto serían los clanes políticos que, poco a poco, tomaron el control de gobiernos municipales, departamentales y llegarían al Congreso de la República, contando con presidente, en un proyecto de toma del poder que aún hoy pervive (Alvarado, 2007).

Este proyecto contempló el manejo de las fuerzas militares que, sin más, impulsaron todo un proyecto paramilitar de tierra arrasada y terror instaurado, que ya Estados Unidos por medio de su Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) había incrustado en el tuétano mismo de las fuerzas militares. Un monstruo de mil tentáculos como va quedando claro en los diversos informes que ha presentado a la Comisión de la Verdad, creada fruto del acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC-EP] y el Estado en 2016 (FOR Presente por la Paz - FORPP, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas - SOA Watch, 2020). El neoliberalismo y su propuesta de libre mercado y transnacionalización de las economías ha impactado el orden social e institucional durante los últimos 30 años.

Es durante la presidencia del liberal Virgilio Barco (1986 -1990) que este modelo ingresa con fuerza al país, aprobado mediante Documento CONPES 2465-J, el 22 de febrero de 1990, con el fin de modernizar la economía, lo que implicaba la entrada de capital extranjero; además de un Estado mínimo, la estructuración de normas que regirán la apertura económica, y la perspectiva de los derechos en la lógica individualista que serán vistos como servicios regidos por las leyes del mercado: la oferta y la demanda. El presupuesto dirigido hacia el gasto social se traslada, debido a la regla y la sostenibilidad fiscal, al pago de la deuda pública, que crecerá de modo exponencial, lo que gestará una pérdida de soberanía monetaria propiciada por la autonomización del Banco de la República, subordinado a las demandas de las entidades financieras internacionales y la banca privada. Pérdida de soberanía legislativa al restringir las discusiones del presupuesto público, el cual recae en las manos del gobierno y las instituciones técnicas atadas a las directrices de las instituciones financieras internacionales (Orozco Bedoya, 2020).

Este modelo neoliberal, desde su inicio, se presenta con un fuerte y constante paquete de reformas estructurales y ajustes institucionales que logran desregular la protección de la producción y el consumo

interno, facilitando a los capitales privados competir con el Estado en la prestación de servicios, modificando radicalmente la economía y las relaciones políticas entre la institucionalidad y la ciudadanía. Se reduce la labor del Estado a su mínima expresión en materia de garantía de derechos (Sader y Gentili, 2010).

Constitución de 1991 y neoliberalismo

Esta propuesta de reforma y rediseño institucional requería, como puntada final, la reforma de la Constitución como su eslabón más alto y necesario, un interés que coincidía con las propuestas de grupos armados en resistencia y de grupos sociales fuertes: coincidencia de forma, pero no de fondo. Existió toda una estrategia que los neoliberales y seguidores del Consenso de Washington implementaron para garantizar la seguridad jurídica de sus propuestas, instaurándolas de manera estructural en la Constitución de 1991.

La construcción del modelo implica, establecer un orden jurídico económico, el diseño e implementación de las reformas estructurales del Estado, las reformas al mercado de la fuerza laboral, la reforma al mercado de bienes y servicios, al mercado de capitales, a las telecomunicaciones, al sistema económico y a la dirección de la economía, a los límites de intervención del Estado en lo económico, a la desregulación económica y a la concreción de tratados de libre comercio, a la política de privatizaciones, al mercado de capitales y a la organización empresarial, a firmar los acuerdos con la OMC y a reglamentar la inversión extranjera y a darle cuerpo a la denominada disciplina fiscal. Todos estos aspectos, deben tener un respaldo de seguridad jurídica, lo cual naturalmente queda explícito en la Constitución Política de 1991 (Cruz, 2010).

La Constitución de 1991 fue el escenario del cambio político necesario

para la inserción de la mirada neoliberal y, de forma simultánea, para los avances sociales y de derechos que exigían comunidades campesinas, étnicas y obreras organizadas, sumadas a las exigencias de las insurgencias armadas, conformando un complejo enroque. Quedan consagrados en la Carta Constitucional de 1991 una serie de principios que promueven la apertura al mercado, a la globalización y la privatización de los servicios a cargo del Estado, dejando así los derechos a merced de la ley de la oferta y la demanda, al amparo de las lógicas del mercado. Ciudadano ya no será quien tenga derechos, sino aquel que pueda pagar por sus derechos.

Los derechos individuales y colectivos, el libre desarrollo de la personalidad, libre expresión, libertad de opinión y de cultos, etcétera, si bien quedan consagrados, también “queda difusa la vocación del Estado para garantizar a los ciudadanos de Colombia la igualdad de oportunidades para hacer efectivo el ejercicio de derechos económicos y sociales básicos, sin los cuales la proclamación de la libertad civil y política se queda en simple retórica para la gran mayoría de la población” (Cruz, 2010, p 276).

Los principios de autonomía y descentralización terminaron siendo funcionales a la lógica de la privatización, impactando en el detrimento del Estado como garante de estos. Las entidades territoriales, en este contexto, débiles en sus ámbitos político, técnico y financiero, se vieron abocadas a garantizar la prestación de servicios: por ejemplo, acudiendo a concesiones con privados, realidad que, cruzada con el clientelismo y la corrupción, generó un ambiente propicio para el mayor empobrecimiento y deterioro territorial. Sumado a ello, el endeudamiento público territorial creciente va dejando a merced de las apuestas de multinacionales y dinámicas de inversión extranjera a los territorios, que sufrirán este impacto según sea su ventaja comparativa en oferta de recursos primarios, naturales y minerales. La estrategia de competitividad contenida en las leyes 388 de 1997 y 1454 de 2011, permite que los entes territoriales faciliten el ingreso de actividades productivas

ajenas a las características del territorio, poniendo en riesgo la actividad económica local, la sostenibilidad ambiental y las manifestaciones socioculturales de sus habitantes. Un modelo profundizado por la Constitución de 1991. Al respecto, Delgado y Acero (2015), exponen que:

el modelo descentralizador fue introducido en Colombia a mediados de los años 80 y fue profundizado con la Constitución de 1991, donde se desarrolla a fondo con el fin de introducir criterios de mercado a la provisión de bienes públicos. Así, los agentes cuando eligen donde ubicarse expresan sus preferencias al comparar lo que le brinda la localidad frente al precio en impuesto de tales beneficios, tal y como lo hacen en el mercado de bienes privados, de manera que las ciudades menos competitivas expulsarán recursos productivos y las competitivas los atraerán” (Delgado y Acero, 2015: 224).

El proceso de Internacionalización de la economía, que se desarrolla en la rápida negociación y firma de una seguidilla de Tratados de Libre Comercio, generó la entrega de territorios a privados y particulares, y una precarización de la producción y el consumo campesinos. Nunca se atendieron los reclamos campesinos, de comunidades étnicas y del sector productivo nacional, ni se realizó una seria reforma agraria, mucho menos una revolución en este orden, pero se negociaron las condiciones para acabar con el escaso avance en la producción, golpeando además la soberanía alimentaria.

La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) afirma que el problema no está en la demanda sino en la baja oferta. En 2016 se importaron 14 millones de toneladas de alimentos, frente a 11,4 millones registrados en 2015:

Las importaciones de alimentos en Colombia siguen aumentando a pesar de que el país tiene una vocación agrícola con buenas tierras para cultivar. Datos del censo agropecuario indican que Colombia

tiene 110 millones de hectáreas, de las cuales 42,3 millones están destinadas a actividades agropecuarias y de estas solo se cultivan 7,1 millones. Cifras del gremio del agro demuestran que mientras las exportaciones del sector crecieron entre 2000 y 2015 en 4,8%, las importaciones lo hicieron en 107%, lo que representa 11,4 millones de toneladas de importación frente a 4,2 millones de toneladas exportadas (El Heraldo, 2016).

A pesar de contar con ocho clases de suelos para realizar tanto actividades productivas como de conservación ambiental, el uso inadecuado en el territorio nacional coge cada vez más fuerza. La ganadería, presente en más del 30% del país, solo podría implementarse en el 13,3%. El panorama agrícola es opuesto: el 4,7% tiene cultivos, cuando su área potencial es del 19,3%. La alerta fue dada por el Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Juan Antonio Nieto Escalante, en la conmemoración del Día Mundial de la Tierra. (Igac, 2021)

Se prevé que el 90% del crecimiento en la producción agrícola a nivel mundial –80 % en los países en desarrollo– se deba a rendimientos más altos y a la intensificación de cultivos, y el resto a la ampliación de la superficie cultivable, que se incrementaría en unos 70 millones de hectáreas. La mayor parte de este aumento en los países en desarrollo tendría lugar en el África subsahariana y América Latina (FAO, 2009). La FAO estima que en el mundo hay cerca de 2.600 millones de hectáreas aprovechables para la agricultura que no están siendo utilizadas para cultivos. De ellas, 900 millones están ubicadas en siete países: Brasil, República Democrática del Congo, Angola, Sudán, Argentina, Bolivia y Colombia. Un contrasentido, una oportunidad, pero al mismo tiempo una maldición.

Las políticas económicas nacionales han tendido a desproteger la producción y el consumo de bienes, generando dificultades para el desarrollo de un mercado de productos campesinos, que dinamice las

economías familiares y aporte al mejoramiento de la calidad de vida en el campo. El Estado puso en competencia una producción agropecuaria poco tecnificada y competitiva, frente a industrias internacionales que producen masivamente a muy bajos costos, protegidas por las políticas estatales de sus países, mientras que Colombia recibe insumos, maquinaria y tecnología agropecuaria que son costosos y que deben ser adquiridos por los campesinos mediante créditos que, a la postre, se convierten en deudas impagables (Robledo, 2007).

Colombia inició un proceso de desindustrialización que derivó en una constante pérdida de puestos de trabajo, el aumento constante de la informalidad –trabajo precarizado–, una economía del rebusque, de la subsistencia, aumentando aún más la pobreza, sin regulación laboral; mientras que la salud se convirtió en un negocio entregado paulatinamente a privados. Para las pensiones se generó un sistema mixto a favor del capital transnacional. La salud, por ejemplo, a raíz de la Ley 100, pasó de ser un derecho a ser un privilegio; la educación empezó su paulatino proceso de privatización y desmonte de los beneficios laborales, con cambios en los currículos y sus tendencias, como parte de un profundo proceso de reingeniería social.

La economía giró hacia la re-primarización y el extractivismo, generando políticas y normativas que terminarán entregando territorios a multinacionales mineras (Grisales e Insuasty, 2017) que llegaban a explotar oro, plata, platino, cobre, carbón, petróleo, a costa de la expulsión violenta de pueblos enteros de territorios estratégicos. La agroindustria fue impuesta a sangre y fuego: banano, palma de aceite, floricultura, entre otras, mediante transformaciones violentas como el emblemático caso de Antioquia, modelo que se expandió al resto del territorio nacional (Zuluaga e Insuasty, 2018).

A esto se suma la imposición de una estructura tributaria regresiva, que favorece a los grandes inversionistas extranjeros, adelgazando la capacidad de recaudación del país. El Estado terminó dando toda clase de garantías a la inversión extranjera por encima de la nacional, dejando

al país a merced de la volatilidad del mercado global, perdiendo soberanía, aumentando una perjudicial dependencia.

En estas condiciones, el Estado tendrá que enfrentar déficits presupuestales, creciente endeudamiento con poco margen de acción para un fuerte incremento del gasto público.

Además, por tratarse de una economía extractiva, con una normatividad que beneficia la inversión extranjera, el medio ambiente afronta una etapa compleja de crisis, destrucción, deforestación sin límites, entrega de ríos, depósitos, selvas, bosques, a cambio de nada, empeñando no solo el presente, sino el futuro (Román, Valencia, Zuluaga e Insuasty, 2020). Aumenta, como consecuencia directa, una irracional desigualdad. La Revista Forbes (2020) ubicó a Colombia como el país más desigual de América Latina y la nación con mayores desigualdades entre sus territorios (Forbes, 2020). A la compleja situación productiva, se suma el hecho de que este modelo cabalga sobre la violencia armada, el terror, la criminalidad como política; además de la deficiencia en la prestación de servicios básicos y una persistencia de la pobreza.

Las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas sobrevivieron amparadas por economías de autoconsumo que se fundamentaban en la sobreexplotación de la mano de obra familiar, acompañada de una acentuada pobreza, siendo su situación uno de los temas abordados en los acuerdos de Paz firmados entre las FARC-EP y el Estado. Un acuerdo firmado en el 2016 y que a la fecha (2021) sigue sin ser cumplido (Gómez y Martínez, 2020). Como plantea Absalón Machado en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, titulado Colombia Rural (2011), "la preservación del orden social rural, con todas sus inequidades y ataduras al desarrollo", se fundamenta en: (a) estructura de la tenencia de la tierra inamovible para la política pública, (b) jerarquización social que coarta la movilidad de las personas en la estructura de la sociedad, y (c) hegemonía política tradicional que restringe las elecciones libres, limpias y competitivas y que no hace un reconocimiento político del campesinado.

Colombia... construyó un modelo de desarrollo que conlleva el fracaso del mundo rural, rindiéndole más culto al mercado que al Estado, lo cual amplió las brechas entre lo urbano y lo rural, preservando su orden social injusto, que no ha cambiado por falta de decisiones políticas y de una visión de largo alcance sobre lo rural y su papel estratégico en el desarrollo (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2011)

Este reordenamiento se llevó a cabo gracias a una contundente aplicación de fuerza física, así como en el pasado las élites acordaron el Pacto de Chicoral para mantener sus privilegios, a costa de la aplicación de una barbarie homicida contra el pueblo en la década de los 70. Ahora aplica el terror paramilitar para revertir los espacios ganados por las organizaciones sociales, étnicas y campesinas derivados de la Constitución de 1991. La alianza entre élites políticas, empresariales, narcotraficantes y sectores militares legales e ilegales, llegaron incluso a firmar el famoso Pacto de Ralito: documento pactado y firmado con el fin de “refundar la patria”, hecho que ocurrió en el año 2002 (primer gobierno de Uribe), que una vez se hizo público derivó en el escándalo de la parapolítica.



Pacto de Ralito / Tomado del libro 'Para una genealogía del paramilitarismo en Colombia'

Pacto de Ralito (Insuasty Rodríguez, Valencia Grajales, & Restrepo Marín, 2016)

Para el 15 de julio de 2003, se firma un acuerdo que fue dando paso al sometimiento de los paramilitares en Colombia, un proceso muy controvertido pero que permitió un leve descenso de la barbarie. Vale decir que a la fecha el fenómeno del paramilitarismo sigue vivo y se fortalece en todo el país (Insuasty Rodríguez, 2017).

En este contexto los acuerdos de paz significaron, para el poder instituido, la generación de condiciones necesarias para explotar los territorios y sus recursos sin mayores problemas, resistencias sociales o restricciones ambientales, sin mayores contraprestaciones, haciendo uso de una infraestructura financiada por el Estado y, por supuesto, garantizando la seguridad, lo que equivale a minimizar toda resistencia política armada (Libreros Caicedo, Borja Bedoya, & Insuasty Rodríguez, 2016). La paz es una real necesidad para la población, pero al mismo tiempo es un campo de acción para el poder instituido, pues deja claras las líneas rojas para cualquier negociación: no tocar el modelo económico y no tocar a las fuerzas militares.

En este contexto, pero con gran esperanza, el 4 de septiembre de 2012 de manera oficial se inició una nueva mesa de diálogo con las FARC-EP, que concluyó con la firma de un importante acuerdo en 2016, hecho que despertó la ira y reacción de la ultraderecha, quienes emprendieron una campaña para destruir dicho acuerdo, enarbolando una bandera de odio, emprendiendo un ataque constante a los países vecinos (Venezuela, Cuba, Bolivia) y así lograron retomar el poder presidencial, en cabeza de Iván Duque (2018-2022), quien acentuará y profundizará una política neoliberal agresiva, de confrontación, de negación de la creciente crisis social y humanitaria. Ante el aumento de la pobreza y la marginalidad, acentuará la política extractiva en su Plan Nacional de Desarrollo y retornará la lógica de la guerra y la lucha contra un enemigo común, que se irá configurando como el pueblo en lucha por derechos.

En marzo de 2016 se iniciaron las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya agenda pactada giraba en torno a la participación de la población colombiana, enfatizando en la

participación de las comunidades y los pueblos. Una interesante propuesta, aunque compleja en su implementación y metodología. Se lograron realizar unas jornadas de diálogo gracias a las que se pudieron impulsar agendas territoriales, nacionales y sectoriales (Beltrán, 2020). Dicha negociación fue suspendida por el gobierno de Iván Duque, quién optó por la confrontación y el desconocimiento de las normas internacionales que rigen estos procesos de paz en el mundo.

Duque representa la continuidad del uribismo, que completará 20 años en el poder. Se trata de la alianza criminalidad-empresa-Estado enquistada en el poder, un sector mafioso que termina profundizando una rabia creciente en la sociedad, que transitará de la impotencia a la necesidad de exigir en las calles cambios reales y de fondo.

Y llega la pandemia

Cuando las manifestaciones, levantamientos y protestas crecían en América Latina y en Colombia, aterrizó la pandemia del Sars Cov-19, que nos evidenció aún más la existencia un sistema de producción-consumo que debilita la vida, la salud, la alimentación, el medio ambiente, generando sociedades y cuerpos fragilizados, pauperizados, un sistema capaz de dejar morir a la mayoría de sus iguales (Insuasty Rodríguez, 2020).

Las consecuencias las están sufriendo con mayor intensidad las sociedades que carecen de una estructura de cuidados, con sistemas de salud debilitados, con altos índices de informalidad... como es el caso de Colombia. El Estado en Colombia no afrontó la pandemia, sino que permitió que a los más de once millones de colombianos que estaban en la pobreza se sumaran otros 20 millones que perdieron sus empleos o pequeñas empresas, lo que desnudó una situación insostenible.

Los datos son contundentes:

- En 2020 la pobreza monetaria fue 42,5% y la pobreza extrema 15,1% (Departamento Administrativo Nacional de Estadística

[DANE], 2021). Por lo tanto, el 60% de la población vive en situación de indignidad.

- El desempleo crece. En abril de 2021, el país contaba con 20.465.000 personas “ocupadas”, de las que el 48% pertenece al sector de la economía informal, equivalente a la economía del rebusque, de subsistencia, sin seguridad social. En la categoría “desocupados”, personas que siguen buscando trabajo, pero no lo encuentran, se registran 3.626.000 personas. La categoría “inactivos”, personas en edad de trabajar pero que no lo hacen, asciende a 16.151.000 millones de seres humanos (DANE, 2021). Es decir, si sumamos ocupados-informales (ingresos precarios), desocupados e inactivos tenemos un aproximado de 30 millones de personas de un total aproximado de 50 millones de habitantes. Es una situación sumamente compleja.
- Según el programa de alimentación de la ONU, en Colombia 11,3 millones de personas no comen lo suficiente (Noticias Uno, 2021) y 2,7 millones de colombianos sufren de hambre crónica (Infobae, 2020).
- Se registra un aumento en el coeficiente GINI de desigualdad, consecuencia directa de un modelo que no contempla una política diferencial entre la protección de la población y la protección de la rentabilidad de los sectores económicos en el poder, afirmación que se sustenta en las crecientes ganancias del sistema financiero, aún en plena pandemia, que en 2020 fue de 55,5 billones de pesos (Analitik, 2021)
- La situación es aún más compleja para los jóvenes, ya que su futuro es incierto o nulo: el 33% de jóvenes colombianos son población *ninis* (ni estudian, ni trabajan), porcentaje que aumenta aceleradamente en relación con los años anteriores, mientras el desempleo juvenil alcanza el 29,7% en julio de 2020 (360Radio, 2020)

Un Estado mínimo, incapaz de garantizar derechos, asumió el gran reto de enfrentar la pandemia y lo hizo de la misma forma de siempre: apoyo al sector financiero y la gran empresa, pero muy poco o nulo apoyo a la gente, al la micro y pequeña empresa que son las que generan mayor empleo en el país. En medio de la pandemia cerraron 509.370 micronegocios (Acosta Fonseca, 2021). Las micro, pequeñas y medianas empresas (conocidas como MiPyMes) constituyen el 80% de fuente de empleo y representan el 90% del sector productivo nacional (Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas [ACIS], 2019)

El gobierno decidió apoyar a quienes financiaron su campaña presidencial, por eso en 2020 muchas ciudades se vieron agobiadas por el hambre y, como gesto simbólico, las familias colocaron una bandera roja en sus casas. Ciudades llenas de trapos rojos daban una imagen dantesca, en tanto se manifestaron los vendedores informales taponando algunas vías para exigir atención (Oquendo, 2020). Además, aprovechó la pandemia para profundizar su ajuste neoliberal, sobreendeudando al Estado, llegando al 70% del PIB y concentrando más poder al tener el control total del Congreso, de los entes de control, de la Fiscalía (Vallejo Duque & Insuasty Rodríguez, 2020) y de algunas Cortes (Valencia Grajales, 2021).

Los vínculos cada vez más visibles de los carteles del narcotráfico con el poder establecido (Grupo Kavilando, 2021) provocaron la pérdida de más de 50 billones anuales por corrupción (Redacción Portafolio, 2018), mientras la evasión de impuestos del gran capital que suma otros 300 billones que el Estado pierde en ingresos (Razón Pública, 2020).

2. De la desesperanza a la potencia de lo posible



MOLINA MORENO

NOS COESTE

El ambiente que se respiraba en Colombia, fruto de la imposición de un modelo económico nefasto y de una clase política criminal, corrupta, excluyente y cínica, era de desesperanza y resignación. Ante la impunidad, el aumento de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes (904 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC asesinados desde el 1 de diciembre de 2016 a marzo de 2021) sumado al incumplimiento abierto y deliberado del Acuerdo de Paz (DW, 2021), se respiraba un aire de impotencia, de imposibilidad aprendida. Sin embargo, esta realidad fue cambiando gracias a las movilizaciones que se vienen sucediendo en el mundo desde la Primavera Árabe (2010), junto a las llevadas a cabo en Estados Unidos contra el racismo policial (2014 y 2020), las revueltas en Chile y en Ecuador (2019), y en Bolivia (2019) para presionar al gobierno golpista a que convocara elecciones. Manifestaciones, sobre todo urbanas, que fueron ejemplos de lucha y dignidad, y que generaron un sentimiento de posibilidad, provocando, además, una suerte de retadora autocrítica constante.

Paralelamente, en Colombia, también crecían expresiones de protestas emergentes, llenas de aprendizajes de las tradicionales que se iban sumando poco a poco, como muestra del creciente descontento. En medio del conflicto armado y de una era marcada por —aún hoy— por la estigmatización y criminalización de la protesta social, sumado al largo ciclo “uribista” de acciones criminales de la fuerza pública, como el nefasto legado de las ejecuciones extrajudiciales —conocidas como Falsos Positivos (Rojas Bolaños, Insuasty Rodríguez, Mesa Duque, Valencia Grajales, & Zuluaga Cometa, 2020)—, los movimientos sociales avanzaron en su capacidad organizativa.

De 1994 a 2005 se presentó una gran confluencia social en Colombia y en toda América Latina contra los tratados internacionales con Estados Unidos y Europa y contra los Tratados de Libre Comercio (ALCA), lo que permitió darles dinamismo y articulación a las expresiones sociales en

lucha. Se articularon partidos, sindicatos, comunidades campesinas, étnicas, sectores urbanos académicos, en contra de esta etapa de profundización del neoliberalismo y las reformas estructurales que el FMI, el Banco Mundial y la Cepal impulsan en la región, en una etapa de articulación y de agenda de lucha común (Berron, 2007).

La guerra crecía en Colombia, junto a la necesidad de llegar a una salida negociada con las expresiones armadas, proceso en el que las organizaciones sociales, populares, gremiales, étnicas y campesinas lograron ganar en articulación ante esta agenda común (Jiménez Grande & Echeverri González, 2013).

Minga Nacional, Congreso de Los Pueblos, Tribunal Permanente de los Pueblos y Marcha Patriótica

El año 2008 está marcado por la Gran Minga Nacional, movilización fuerte de comunidades indígenas realizada en el mes de octubre, con peticiones claras: no se aceptan los tratados de Libre Comercio y la manera en la que fueron negociados, en tanto promueven el despojo de derechos, tierras, cultura, saberes, y piden tratados entre los pueblos para la vida. Piden la derogatoria de las reformas constitucionales y denuncian la constante imposición de una legislación para el despojo, una cínica entrega de lo nuestro a privados. Entre estas leyes se destacan: el Estatuto Rural, el Código de Minas, la Leyes y Planes de Aguas, la Ley de Bosques, la Ley de Páramos. Exigen el cese del terror derivado de la famosa Seguridad Democrática, la parapolítica que expulsa comunidades de territorios estratégicos para los negocios de extranjeros, el discurso de la “recuperación social”; denuncian el papel de Estados Unidos en implantar la política del terror por medio del Plan Colombia y los Centros de Coordinación Integral con el fin de entregar los territorios a los intereses del mercado. Agregan que, en estas condiciones, protestar no es un delito; así mismo, se exige el cumplimiento de las normas, acuerdos y convenios de la Ley 21 de 1991, el Acuerdo 169 de la OIT, la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y se

suman a los reclamos de los campesinos desplazados, las leyes para legalizar el despojo, de los indígenas, afrodescendientes y campesinos, entregando territorios a las multinacionales; hacen referencia también a los derechos sindicales, los servicios públicos, la protección del medio ambiente, del agua, la energía, el derecho de las mujeres, todos derechos anulados en su esencia, ignorando incluso fallos de la misma Corte Constitucional (Mugarik Gabe, 2008).

El aprendizaje y fortalecimiento organizativo y comunicacional del movimiento indígena del Cauca —sobre todo—, se traduce en un ejemplo de lucha territorial y nacional. La autoprotección a través de guardias se fue extendiendo a otros procesos organizativos, e incluso las discusiones que fueron dándole ruta a las estrategias para hacer valer sus reclamos, la toma de vías, las manifestaciones masivas en las ciudades de Cali y Bogotá, muy bien recibidas y aplaudidas por la población en general, con gran apoyo y solidaridad, legitimando su papel como autoridad territorial. Este mismo año, gracias al empuje de organizaciones sociales y ONGs, se realiza en Colombia la Sesión 33 del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) “Empresas transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia” (2006-2008). En sus sesiones se socializaron casos de la violación flagrante de derechos humanos, el apoyo al paramilitarismo, el despojo y daño ambiental que las multinacionales y grandes empresas venían realizando con el amparo y apoyo del Estado, una muestra real de los reclamos de los pueblos, con evidencias, documentos, informes de investigación como lo demuestra la sentencia final de este tribunal ético internacional. Un importante espacio para dar cuenta de una realidad oculta por los medios, negada en las academias, poco difundida, parte del ejercicio de dominación de gobiernos de derecha y extrema derecha, se convirtió en material de estudio y formación que da cuenta de una compleja realidad (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2008).

Ahora bien, esta Gran Minga Nacional, dio impulso a un proceso organizativo popular nacional, el Congreso de los Pueblos, que se venía

estructurando desde el Mandato Indígena y Popular de 2004, año en que se realiza la “Minga por la Vida, la Justicia, la Alegría, la Autonomía y la Libertad de los pueblos” en la ciudad de Cali, evento al que asistieron cerca de 80.000 personas. Para 2006, se realiza la Cumbre de Organizaciones Sociales, desde los municipios del suroccidente colombiano junto a estudiantes, campesinos, afrodescendientes e indígenas, quienes denunciaran la arremetida de la fuerza pública en sus territorios. En 2008 se organiza la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, espacio amplio de articulación entre comunidades urbano-rurales, campesinas, indígenas, afrodescendientes y mestizas, rememorando el trabajo colectivo y avanzando hacia formas organizativas propias, desde abajo, con capacidad para tomar decisiones territoriales y nacionales, recogiendo una amplia agenda de reivindicaciones de cambio propias, abriendo un escenario que logra generar conciencia e identidad.

Así se llega al 2010 con la instalación del Congreso de los Pueblos, un avance encaminado a la recuperación de la democracia real, con la participación directa de las comunidades y pueblos. Ante un Congreso de la República cooptado por la corrupción y el paramilitarismo, se teje una propuesta alternativa de país-común desde abajo, generando discusiones y acuerdos en lo territorial y en lo nacional. En 2013 se realiza el Congreso por la Paz, en medio de los diálogos entre el Gobierno y las FARC-EP, y el ELN; por una paz transformadora y participativa donde se resalta el carácter popular, alegre, festivo, artístico y juvenil de esta expresión organizativa. Se distribuyen por nodos regionales, por comisiones de trabajo y se orientan bajo los 7 Mandatos Populares que han ido construyendo como consensos entre sus integrantes (Congreso de los Pueblos, 2014).

Resaltamos el avance en las discusiones sobre el papel y sentido de lo urbano, la necesidad de ganar fuerza organizativa y agenda urbana, en tanto las ciudades son un anclaje del modelo neoliberal, afectadas por el empobrecimiento, la exclusión y la ausencia de aparatos organizativos. Además, es allí donde se toman las principales decisiones políticas, así el

encuentro en Barrancabermeja, y luego el encuentro nacional urbano de 2015 en Bucaramanga, que buscan articular este eje de trabajo popular (Cumbre Urbana, 2017).

En 2012 nace Marcha Patriótica (MP), que congregó cerca de 2000 organizaciones sociales en distintas regiones del país y que ha realizado grandes movilizaciones desde su fundación. Entre sus reivindicaciones figuran la construcción de un país soberano y de una paz con justicia social; este movimiento ha sufrido, no solo la estigmatización, sino el asesinato de sus líderes. Se resalta como previos a su fundación, la realización del “Encuentro nacional e internacional por el acuerdo humanitario y la paz en Colombia” en Cali (2009), la “Marcha Patriótica y el Cabildo Abierto por la Segunda y Definitiva Independencia” el 19, 20 y 21 de julio (2010), movilización que disputó la conmemoración oficial del bicentenario, actualizando el ideario bolivariano de unión latinoamericana y resaltando que, debido a las imposiciones de los organismos económicos multilaterales y al establecimiento de bases militares norteamericanas en territorio nacional, entre otras cosas, no existía realmente soberanía (Silva y Cruz Rodríguez, 2017). Este movimiento político posibilitó el encuentro entre diversas expresiones de los movimientos sociales y se posibilita gracias a la negociación entre las Farc-EP y el Estado, en tanto se generan condiciones de oportunidad política, como lo plantea McAdam (McCarthy, 1999), quien habla de cuatro variables: el grado de apertura del sistema político, la estabilidad en las coaliciones entre élites, la presencia o ausencia de aliados del movimiento social entre dichas élites y la magnitud de la represión (McAdam, McCarthy, & Zald, 1999).

La revolución de las ruanas

En el 2003 el Coordinador Nacional Agrario (CNA) convocó a diversas organizaciones rurales para trazar una ruta ante la lamentable situación del campo en Colombia, buscando fortalecer la capacidad organizativa y tejer entre campesinos, indígenas, afrocolombianos y empresarios,

una suerte de agenda pluricultural para la defensa del derecho a vivir dignamente y a trabajar en los territorios. Posteriormente, en 2013, en el marco del Congreso por la Paz, se trazaron objetivos comunes entre múltiples organizaciones sociales: allí se reúnen cerca de 40 mil personas en la Cumbre Agraria, asumida por las bases como un movimiento social popular.

A la par, las protestas campesinas fueron ganando el favor popular ante su indigna situación, derivada de esa nefasta aplicación paulatina del neoliberalismo, de la apertura económica, de los tratados de libre comercio y el abandono histórico e intencional del Estado. Así, resaltamos las movilizaciones campesinas de 2013, desarrolladas entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre, que fueron sin duda la protesta agraria más importante de las últimas décadas en Colombia. En la mayor parte del territorio nacional se realizaron bloqueos de vías, mítines, marchas, cacerolazos y otros repertorios de protesta. Según estimaciones de los convocantes, participaron más de 200.000 personas (El Espectador, 2013).

Los actores sociales tienden a explicar esta excepcional acción colectiva por la gravedad de la situación que enfrentan los pequeños y medianos productores agrarios, principalmente los altos precios de los insumos agrícolas, el ingreso al país de productos extranjeros debido a los tratados de libre comercio y al contrabando, las dificultades de acceso al crédito y a la propiedad territorial, entre otras (Duzán, 2014).

Fue un paro que requirió de mucha logística, debido a la dispersión del territorio rural; se realizó en más de 22 departamentos, lo que hacía más complejo mantener los puntos de concentración, ya que la distancia entre los mismos manifestantes influía a la hora de sostenerse en el tiempo. Se generó desabastecimiento que puso el jaque al gobierno, taponando vías principales como Tunja-Bogotá, lo mismo en Cauca y

Nariño, acciones que llamaron la atención del gobierno que respondió con uso excesivo de la fuerza, manipulación mediática, criminalización y negación, además de acusar a los manifestantes de estar atentando contra el sistema productivo del país generando pobreza, para poner a la ciudadanía en contra. Sin embargo, fue el hecho social y político más representativo de la década, logrando unir en solidaridad expresiones urbanas, el movimiento obrero, colectivos que luchan por la salud, maestros, defensores del medio ambiente, entre otras.

Pero a pesar de la diversidad y variedad de acciones, de las grandes demostraciones de valentía de los pequeños productores de papa, leche, café, cebolla, campesinos y, en general, habitantes de la ruralidad (indígenas, afrodescendientes y mestizos) en numerosas regiones de Colombia, es importante anotar que no se afectó el modelo, vale decir que esta expresión de inconformidad no logró cambios en la implementación de éste (Dorado, 2013). En el paro agrario de 2013 no hubo un marco de acción colectiva unificado, puesto que no se consiguió acordar un solo pliego de demandas. No obstante, los tres documentos que se generaron posteriormente permiten aproximarse al sentido que enmarcó la protesta social, el tipo de problemas sociales que la suscitaron y sus responsables. En todos los casos hay una identidad compartida como “campesinos” y el principal adversario es el gobierno, que sistemáticamente incumple los acuerdos con las comunidades, no reconoce al campesino como un actor político legítimo y ha adoptado políticas agrarias contrarias a los intereses de los pequeños y medianos productores y favorables a las grandes empresas del agronegocio. Confluyeron estructuras organizativas sociales que fueron emergiendo como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Mesa Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y las Dignidades Agropecuarias, que colocaron en la agenda pública la lamentable situación del campo en Colombia, disputaron acciones de reivindicación y ganaron apoyo en el sector urbano cuyas raíces están ancladas en la cultura campesina.

Sin embargo, se evidenciaron diferencias notables en relación con los problemas que pretenden resolver. El pliego de las Dignidades Agropecuarias hace énfasis en el cumplimiento de acuerdos de protestas anteriores, la reducción de los precios de los insumos y la protección de la producción nacional frente a las importaciones y la extensión del subsidio cafetero –Protección del Ingreso Cafetero– (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca [NASAACIN], 2013). El pliego de la MIA plantea una agenda de problemas más amplia –aunque comprende los anteriores–, puesto que reclama soluciones –políticas agrarias estructurales, el acceso a la propiedad de la tierra–, la reivindicación de ciertas figuras–como las Zonas de Reserva Campesina– e incluso garantizar los derechos políticos de los campesinos y otros actores sociales y políticos (Agencia Prensa Rural, 2013).

El pliego del CNA hace énfasis en las demandas de los pueblos indígenas y negros, como el reconocimiento de su autonomía y territorio para la construcción de vida digna (Congreso de los Pueblos, 2013). Dignidad Agropecuaria representa intereses de medianos productores agrícolas: su pliego de peticiones se enfoca en regulaciones de precios, importaciones e insumos, sus preocupaciones no están enfocadas en los problemas de la tierra y el territorio, propios de campesinos pobres, víctimas del despojo violento, a menudo dedicados al cultivo de coca y asentados en zonas de reciente colonización. El pliego del CNA o el de MIA no reivindican una reforma agraria, alternativas económicas para la sustitución de cultivos ilícitos, ni el reconocimiento formal de las zonas de reserva campesina. Esos campesinos provienen de zonas de reciente colonización, cuyas urgencias están enfocadas en garantizar la propiedad de la tierra, por eso demandan las zonas de reserva campesina, infraestructura y servicios públicos (Dorado, 2013).

El gobierno ha utilizado la misma receta para enfrentar estos paros. La principal es darle un tratamiento militar, de orden público, bloqueando los desplazamientos y levantando a la fuerza los taponamientos de vías, criminalizando, de paso, dichas acciones; atacar las concentraciones

con uso excesivo de la fuerza y armas de letalidad reducida (Policía-Escuadrón Móvil Antidisturbios [ESMAD]), perdigones, gases, bombas aturdidoras arrojadas directo al cuerpo, destrucción de cambuches y detenciones arbitrarias. A nivel mediático, se trata de tildar a los manifestantes de responsables de los males de la sociedad, generando una opinión pública adversa a sus reclamos, negándose a negociar en medio de las manifestaciones y bloqueos, negar las causas que provocan las movilizaciones y, a la vez, ofrecer algunos proyectos por separado a los sectores que integran el paro para debilitarlos y dividirlos, instalando mesas regionales y locales de negociación para tratar de quitarle legitimidad a las direcciones nacionales del movimiento (Dorado, 2013). Es importante resaltar el papel de las redes en este paro, el apoyo urbano espontáneo, los cacerolazos casi diarios, la visibilidad que se le dio a los abusos de poder en medios alternativos; se posicionó como símbolo la ruana, las canciones y el colorido de las manifestaciones se hizo sentir en las principales ciudades.

Para 2014, fruto del paro agrario (2013) se realizaron en 22 departamentos 24 pre-cumbres con la participación de comunidades campesinas, mineras, indígenas, organizaciones políticas y populares, juntas de acción comunal y gente del común. Se trató de acontecimientos importantes para avanzar en los procesos de articulación desde abajo, en la construcción de una arquitectura social para enfrentar la asfixiante arquitectura global capitalista. En esta cumbre se evidenció la realidad de los territorios: el despojo de la tierra, la exploración y explotación de petróleo, la contaminación ambiental y los monocultivos. Se reconoció que el peligro sobre sus vidas se daba con la militarización de los territorios, la estigmatización y la persecución del tejido social que implicó abordar el papel de lo urbano y tejer entre lo urbano y lo rural. En marzo de 2014 se formaliza como tal la Cumbre Agraria Étnica y Popular como un actor importante conformado por las siguientes organizaciones: Coordinador Nacional Agrario (CNA), FENSUAGRO, Proceso de Comunidades Negras (PCN), ONIC, ANZORC; Coaliciones y

Movimientos Sociales, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, y las mesas de interlocución como MIA y la MUA, representando casi dos mil organizaciones sociales y populares de base.

La Cumbre Agraria Étnica y Popular, es concebida como:

un espacio de convergencia de las organizaciones rurales para construir una propuesta de política de Estado para el campo. La Cumbre consolida un escenario político de autogobierno democrático, identificado por su carácter propositivo, orgánico y anti institucional. Su propuesta se afianza con el pliego: “Mandato agrario para el buen vivir, por la reforma agraria estructural, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social”, que pretende la defensa de un proyecto de país justo, incluyente y equitativo. La Cumbre constituye un hito en la convergencia política de movilizaciones étnicas y campesinas para la interlocución con el Estado colombiano sobre la política rural. Tal acción colectiva implica el encuentro entre culturas en términos de la confrontación sobre ideales de desarrollo y de gobierno, a propósito del sentido de su existencia posible en los contextos rurales del país. Expuesta la falla del sistema democrático, esta reflexión valora cómo los sentidos de la acción política de las organizaciones sociales agrarias que movilizan la Cumbre constituyen una estructura de oportunidad política para la concreción de sus ideales (Vallejo Cruz, 2016).

En 2014, 2015 y 2016 se retomaron las manifestaciones campesinas ante el constante incumplimiento del gobierno (Vía Campesina, 2016), puesto que, luego de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Estado (2016) la Reforma Rural Integral pactada sigue siendo una promesa incumplida. A la par, continúan los paros de maestros, de la salud, el transporte y los camioneros ante el aumento de los peajes, la

exigencia de renovación de la flota y el alto costo de los insumos y la gasolina.

¡El pueblo no se rinde, carajo!

En esta dinámica, resaltamos las manifestaciones territoriales porque van dando muestra de avances en los procesos de aprendizaje popular; un ejemplo de esto se puede ver con los paros cívicos de Buenaventura y Chocó (2017), dos regiones ubicadas en el Pacífico Colombiano, una ciudad portuaria marcada por la extrema pobreza, el abandono estatal y la militarización legal e ilegal. Se han registrado “casas de pique”, lugares destinados a torturar y descuartizar habitantes de esas zonas, una estrategia militar y paramilitar de terror en una región de tránsito de mercancías que aceitan todo el aparato comercial del país. Por su parte, Chocó es un departamento muy rico en recursos naturales, una zona en disputa marcada por un abandono funcional, pues allí avanzan las multinacionales mineras, los proyectos madereros y la palma de aceite (Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, 2019), procesos productivos que ingresaron gracias al paramilitarismo articulado con la fuerza pública, además de la proyección del Puerto de Tribugá que provoca un hondo impacto social y ambiental (Insuasty Rodríguez, 2020).

Durante los paros se observaron manifestaciones alegres, cargadas de expresiones culturales locales, prácticas musicales y el lema “¡el pueblo no se rinde, carajo!”, que se convirtió en el eslogan representativo de estos paros. En ellos se desplegaron expresiones espirituales, identitarias, juveniles, artísticas, con gran capacidad comunicativa en redes, de gran conexión con el sentir de la población, muy organizadas, con capacidad de resistir varios días, lo que implica una logística popular basada en la solidaridad y el fortalecimiento de la vecindad, del barrio, de la comuna. Se aprendió a comunicar, a resistir en los territorios y a negociar; a organizar pliegos, generando presión para obligar a la negociación. Un dato simbólico de enorme trascendencia es que consiguieron que el gobierno fuera al territorio a negociar, mantuvieron la unidad y no se

dejaron dividir y, además, aprendieron que, una vez se logra negociar, la lucha debe continuar para exigir el cumplimiento de dichos acuerdos. Estos paros cívicos recibieron gran cobertura en medios alternativos y en redes sociales, donde se evidenció, no sólo el uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad, sino que la Policía provocó desmanes para acusar a los manifestantes. Este paro logró gran arraigo en el pueblo, especialmente en sectores urbanos y juveniles, y fue un ejemplo contundente de que sí es posible, elevó los ánimos, pasando de una desesperanza aprendida a una esperanza que potencia lo posible (Arroyo Muñoz, 2021).

Cabe resaltar el papel del Proceso de Comunidades Negras, que articula a más de 140 organizaciones de base y consejos comunitarios, que trabajan en la transformación de la realidad de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante la defensa de sus derechos individuales, colectivos y ancestrales. Se consolidó a finales del año 1993, luego de un largo camino y de esfuerzos al interior del movimiento social para influir en la Constituyente de 1991, con la que Colombia adquiere la denominación de nación “pluriétnica y multicultural”. El Artículo Transitorio AT-55 para la reglamentación de la Ley 70 de 1993, considerada la Ley de Comunidades Negras, es uno de los mayores alcances del pueblo negro en materia legislativa (PCN, 2019).

La defensa del medio ambiente

El movimiento de defensa del medio ambiente le ha ganado el pulso al gobierno en diferentes territorios, haciendo uso de las consultas populares y exigiendo las consultas previas, logrando detener la entrada de mineras en Cajamarca, en Tolima, Meta, Casanare, Cundinamarca, Santander y Quindío. La respuesta institucional negó los impactos ambientales de las actividades extractivistas sobre los territorios, y generó rápidamente reformas legislativas y formas de saltar estos obstáculos que —dijo— atentan contra el Plan Nacional de Desarrollo y contra el modelo mismo (Muñoz y Peña Nieto, 2019).

Colombia es el país con mayor número de defensores del medio ambiente asesinados (Vallejo Duque & Insuasty Rodríguez, 2020). La disputa, ahora, es por la aprobación del acuerdo de Escazú, negado por el partido de gobierno y la bancada oficialista aún en medio del Paro Nacional de 2021 (Rodríguez, L, 2021). La protección de los ríos es otra demanda ganada, al generar procesos que han terminado con la declaración de varios ríos como sujetos de derecho (Castañeda Ruiz y Gomez Osorio, 2019).

Paro del 21 de noviembre de 2019 – 21N

El espacio de articulación de organizaciones sindicales, sociales y populares, el Comité Nacional de Paro, convocó, ante la crisis social y económica, el incumplimiento de los acuerdos de paz, los asesinatos de líderes y lideresas sociales y excombatientes de las Farc y decisiones regresivas del gobierno de Iván Duque, a un paro nacional para el 21 de noviembre de 2019.

El paro llenó las calles del país, contó con una fuerza inesperada, con expresiones artísticas y juveniles que articulan nuevos y diversos sectores sociales organizados y no organizados, como las barras de fútbol, trabajadores informales, animalistas, ambientalistas, que se continuaron movilizandando de forma autoconvocada hasta febrero de 2020. El 26 de noviembre de 2019, el gobierno de Iván Duque instaló una mesa de negociación, donde el Comité Nacional de Paro presentó un pliego de peticiones de 13 puntos. Guiado por su lógica de dilatar y no negociar, el gobierno pidió que esos puntos fueran detallados, pero cuando en diciembre se presentó el documento ampliado, respondió diciendo que no lo puede asumir por razones legales y constitucionales (Portafolio, 2019).

Un intenso manejo mediático, destinado a estigmatizar y restarle valor a los reclamos buscó, además, instalar un relato de miedo ubicando a todo joven que protesta como un vándalo. A la par, llamó a negociar para no negociar, una vieja estrategia que no impidió el

crecimiento de la desconformidad expresada a menudo en las calles. Los grandes ausentes fueron los partidos políticos, que ya no tienen cabida, pues se transformaron en empresas electorales y hasta criminales. Se constata un descontento contra toda institucionalidad, emergen nuevos discursos desde el sector popular y se buscan cambios de fondo. Para la contención de las manifestaciones y la protesta legítima del pueblo, el Estado se vale del ESMAD, organismo creado en 1999 bajo el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y, más adelante, formalizado en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), con el presunto objetivo de controlar los disturbios, las multitudes, los bloqueos y hacer acompañamientos a desalojos de espacios públicos o privados, en lugares donde haya una “eventual materialización de hechos terroristas y delincuenciales” y restablecer el orden (CNN en Español, 2021). Sus protocolos están regidos por la Ley 1801 de 2016, el Decreto 003 de 2021 y la Resolución 02903, en la que está el reglamento para “el uso de la fuerza y el empleo de armas”. Se supone que deben recibir cursos de cursos de control de multitudes y disturbios, seminarios de empleo de uso proporcional de la fuerza y formación en derechos humanos de más de 90 horas. En realidad, demuestran que la institución no cumple con el objetivo de formar a agentes de la policía en el respeto por los derechos humanos. Debemos indicar que esta es una dependencia de la Policía Nacional y está adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, lo que llama la atención puesto que, siendo un ente civil, pertenece a la misma estructura del Ejército. Está integrado por alrededor de unos 3.500 policías, distribuidos en 23 escuadrones especializados en antidisturbios, en 17 de los 32 departamentos, en Bogotá, Medellín y sus áreas metropolitanas, y Cúcuta. El presupuesto anual de la Policía Antidisturbios es de 490.000 millones de pesos, casi 1,4 millones de dólares.

Según un trabajo del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), desde la creación del Esmad en 1999, hasta 2019, se han registrado 43 casos de “ejecuciones extrajudiciales” que involucran

al escuadrón. La mayor parte de estos hechos se ha registrado en movilizaciones sociales, pero también han ocurrido en desalojos, concentraciones campesinas y hasta en la salida de un partido de fútbol (CNN en Español, 2021).

Pandemia, hambre y trapos rojos

El 6 de marzo de 2020 se hace público el primer caso de COVID19 en el país, el 12 de marzo se decreta el Estado de Emergencia Sanitaria, se realizan jornadas de aislamiento y ya el 25 de marzo se decreta el aislamiento preventivo obligatorio, por lo que la maquinaria social se detuvo. La pandemia golpea, inicialmente, los centros urbanos, deteniendo el sistema productivo y de comercio, lo que termina evidenciando los males estructurales que ya padecíamos. La pobreza, la falta de empleo, las precarizaciones, se hicieron sentir y notar con mayor fuerza, y a la par se hizo más evidente la inhumanidad de gobiernos neoliberales que han expoliado los recursos del Estado, debilitado la capacidad de respuesta y cuidado de las instituciones a favor de los negocios privados nacionales y extranjeros.

Así, el hambre se hizo notar, pues en medio de la Emergencia Sanitaria decretada por el gobierno se aceleraron, vía decreto, un conjunto de decisiones que benefician al sector financiero privado y la gran empresa privada, mas no fue así con el pequeño y mediano productor, ni con el informal, mucho menos con la población excluida. La pandemia fue utilizada por el gobierno para acrecentar privilegios para los bancos y grandes empresas, disminuyendo lo que podría quedar de democracia, para sobreendeudar al Estado, acrecentando los privilegios de esa tríada crimen-empresa-Estado, y luego de miles de demostraciones de desprecio hacia el pueblo, la gente empezó a retomar lo que había empezado en las calles (Vallejo Duque & Insuasty Rodríguez, 2021).

Durante el primer semestre de 2020, fueron múltiples las manifestaciones populares exigiendo apoyo humanitario, ante la falta de ingresos, el hambre, la miseria, un confinamiento sin soluciones:

se muere del virus o se muere de hambre. Las ciudades se llenaron de trapos rojos, símbolo de hambre (Oquendo, 2020). La deserción escolar aumenta, muchos jóvenes universitarios se ven impedidos para continuar sus estudios, se discute sobre el futuro de colegios y universidades, entre otros hechos.



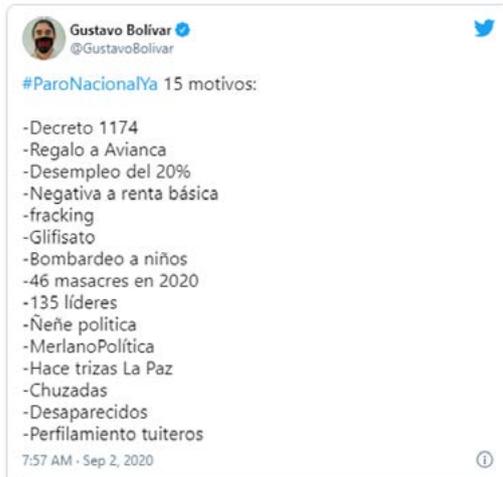
Foto tomada de: Hora 13 Noticias, Medellín, 2020

A pesar de las restricciones de movilidad, fueron estallando diversas expresiones derivadas de la angustia, de esa tragedia humanitaria que se hacía sentir. La gente salió a las calles de manera espontánea, utilizando cacerolazos, tomas de vías y taponamientos, entre otras expresiones, para exigir al Estado medidas reales antes la situación. El Comité Nacional de Paro, luego de múltiples discusiones y propuestas, presentó al gobierno, el 19 de junio de 2020, un Pliego Nacional de Emergencia para hacer frente a esta tragedia humanitaria, tomando fuerza como bandera, desde las organizaciones sociales y populares, la propuesta de renta básica (Escuela Nacional Sindical, 2020), que el gobierno ignoró.

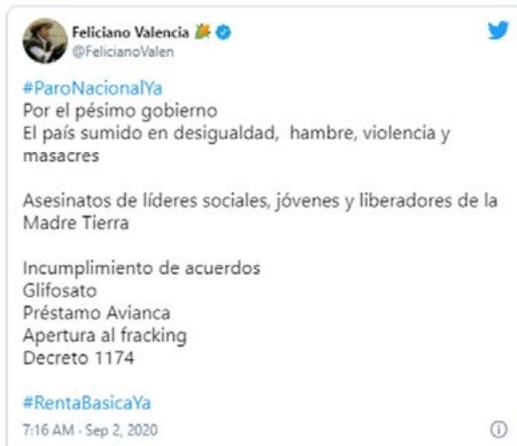
La realidad se hacía insostenible para el grueso de la población; en paralelo, los debates se multiplicaron en las redes sociales, se convirtieron poco a poco en aulas de clase donde se discutían de manera permanente agendas de país, la realidad que develó la pandemia, foros,

debates, conversatorios, ciclos; se activaron redes locales, nacionales e internacionales, tejiendo una red potente de información y formación fuera de lo institucional, lejos de los medios tradicionales y masivos de información, escenarios de interesante y profunda formación de criterio, de formación política, pues la gente, sobre todo la generación más joven, buscaba –y busca– respuestas y espacios de diálogo. Esta fue una ganancia en la que resaltamos un hecho importante que marcó este momento: el abogado e investigador Daniel Mendoza Leal, en un formato corto, en redes, hace pública la serie Matarife (Mendoza Leal, 2020), donde narra los hallazgos periodísticos que relacionarían la vida de Álvaro Uribe Vélez con narcotraficantes, paramilitares y políticos corruptos en Colombia. Tuvo una gran acogida en redes y una gran audiencia, sobre todo entre la población juvenil; un insumo informativo y formativo de impacto, un gran material que incluso impactó los medios internacionales. Se destaca el surgimiento de una red de jóvenes, quienes logran abrir espacios de debate sobre la realidad del país en un lenguaje juvenil, en formatos propios, ágiles, generando reportajes en vivo, en tiempo real, cercanos, que le compiten a los medios comerciales y masivos pro-institucionales. Es un gran espacio de formación y conexión de nuevas expresiones de inconformidad que se va tejiendo, donde poco a poco se irán sumando artistas, académicos comprometidos y redes nacionales e internacionales con un gran impacto.

Ahora bien, ante esta realidad de hambre, exclusión y abuso del poder, desde diferentes sectores se venía presionando el retorno a las movilizaciones que había empezado en noviembre de 2019. Para el mes de septiembre de 2020, el gobierno cambia su lógica, girando hacia un discurso que centra la responsabilidad del contagio en la responsabilidad individual. En este contexto se escuchan cada vez más voces que pedían #ParoNacionalYa. A las razones ya expuestas se suman nuevas, como lo expresó en su momento el senador de oposición Gustavo Bolívar y el senador indígena Feliciano Valencia, entre otras múltiples expresiones llamado a retomar las movilizaciones nacionales.



Captura de pantalla de Twitter de Gustavo Bolívar (2020)



Captura de pantalla de Twitter de Feliciano Valencia (2020)

La tragedia del 9 de septiembre de 2020 - 9S

A esta tensión de voces inconformes, de crisis humanitaria y de un llamado a retomar movilizaciones, se suma el cansancio social ante un irracional y ofensivo abuso de poder de la policía. En la madrugada del 9 de septiembre de 2020, policías asesinaron vilmente al estudiante de derecho Javier Ordóñez, por infringir el toque de queda implementado a raíz de la pandemia. Las grabaciones rápidamente le dieron la vuelta al mundo y generaron una gran manifestación de rabia. Se convocaron movilizaciones que se extendieron del 9 al 21 de septiembre, como respuesta a un episodio doloroso para el país, en el que el abuso y exceso de la fuerza fueron la constante (Murillo, 2021). Hay que recordar que el 25 de noviembre de 2019, Dylan Cruz se había convertido en el símbolo de las luchas, al ser uno de los jóvenes asesinados por la Policía; y, ahora, se sumaba este caso, marcando un momento de máxima crueldad policial. En estas jornadas de protestas hubo 13 personas asesinadas, más de 218 heridos, denuncias de abusos sexuales por parte de la fuerza pública y más de 50 Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía fueron incendiados o averiados (Razón Pública, 2020).

El 21 de septiembre el Comité Nacional del Paro convocó a nuevas movilizaciones contra los abusos ocurridos desde el 9S. Por los cuidados ante la pandemia aún no se convocaba un gran paro nacional, pero se fueron sucediendo cacerolazos, plantones, jornadas virtuales, entre otras expresiones de inconformidad. Ante el silencio del Estado, se avanzó en la presentación de proyectos de Ley como la renta básica, cuyo objetivo era el de llegar a 7,4 millones de familias, que, en promedio, son 30 millones de personas afectadas por la pandemia, propuesta construida por las organizaciones sociales. El proyecto fue presentado el 17 de marzo de 2021, fruto de una gran discusión nacional (Acosta Argote, 2021) y, para este momento—junio de 2021— aún sigue en espera de ser tomada en cuenta.

Mientras todo esto ocurría, el gobierno profundizaba el modelo neoliberal, concentrando poder y haciendo alarde de una infinita

arrogancia; avanzó en la presentación de nuevas reformas que suponen más despojo, más pobreza, más miseria, como la reforma tributaria – llamada Ley de Solidaridad Sostenible–, al igual que una desafortunada reforma a la salud, lesiva para el pueblo, mientras avanzan el sector extractivo, la deforestación, los nombramiento de altos cargos cercanos al gobierno, los excesivos gastos, colmando la paciencia de la sociedad.

3. Un pueblo humillado y excluido se levanta. Paro Nacional del 28 de abril de 2021 – 28A



Las manifestaciones que se vienen presentando con mayor fuerza en el año de 2019 en Colombia, obedecen a un proceso estructural de violencia sistemática sobre la población que primero se dio en áreas rurales y paulatinamente se ha trasladado a las ciudades.

El 28 de abril de 2021, el Comité Nacional de Paro (CNP) integrado por sindicatos y algunas organizaciones sociales, convocaron a un paro nacional, siendo una movilización sin precedentes, masiva, multitudinaria, alegre (Vallejo Duque & Insuasty Rodríguez, 2021). Le siguió una sostenida movilización social, étnica, campesina, obrera, de colectivos artísticos y sobre todo juvenil, entre muchas de las expresiones sociales cambios por vida digna. Se registraron manifestaciones, plantones, ollas comunitarias, conversatorios, asambleas populares, ejercicios diarios que se extendieron por más de tres meses. Un reclamo contundente, desde las expresiones locales, que creció y no se detuvo en el tiempo, en más de 600 ciudades que se fueron sumando a expresiones territoriales que generaron procesos de resistencia, en un proceso de luchas sin precedente en la historia del país.

En cifras, se presenta el rastreo de prensa en el que se evidencian acciones y actividades de paro en 31 capitales de los 32 departamentos. Sumado a ello, encontramos las cifras ofrecidas por el propio Ministerio Nacional de Defensa que planteó la existencia de 2.284 bloqueos en 292 municipios, de los 1.125 que tiene el país, es decir un 26% de los municipios (Redacción Portafolio, 2021).

Tabla 1

Relación de prensa de algunas actividades durante el Paro Nacional

	Ciudad Capital (Departamento)	Titular Medios / Enlace Noticia
1	Leticia (Amazonas)	Sin Dato
2	Medellín (Antioquia)	En vivo: así va el paro nacional del 20 de julio en Cali, Medellín y más ciudades. https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/en-vivo-asi-va-el-paro-nacional-del-20-de-julio-en-cali-medellin-y-mas-ciudades/
3	Arauca (Arauca)	Paro Nacional en Arauca: la fuerza del pueblo. https://www.colombiainforma.info/paro-nacional-en-arauca-la-fuerza-del-pueblo/
4	Barranquilla (Atlántico)	Así fue la jornada de movilizaciones en Medellín, Barranquilla y otras ciudades. https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/asi-fue-la-jornada-de-movilizaciones-en-medellin-barranquilla-y-otras-ciudades/
5	Bogotá (Cundinamarca, Colombia)	Paro nacional 19 de mayo: con enfrentamientos entre el Esmad y los manifestantes en el Portal Américas y en Suba se cierra la jornada. https://www.semana.com/nacion/articulo/en-vivo-paro-nacional-19-de-mayo-asi-avanzan-las-manifestaciones-en-bogota-cali-medellin-y-otras-ciudades/202141/
6	Cartagena (Bolívar)	Paro nacional: conozca las movilizaciones programadas del 1 al 4 de junio en Cartagena. https://www.eluniversal.com.co/cartagena/paro-nacional-conozca-las-movilizaciones-programadas-del-1-al-4-de-junio-en-cartagena-1Y4706208
7	Tunja (Boyacá)	Balance del paro nacional en la capital boyacense. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-nacional-boyaca-balance-de-la-jornada-de-protestas-584552
8	Manizales (Caldas)	Manifestantes en Manizales se toman las carreras 22 y 23, en el centro de la ciudad. https://www.lapatria.com/manizales/manifestantes-en-manizales-se-toman-las-carreras-22-y-23-en-el-centro-de-la-ciudad-477440
9	Florencia (Caquetá)	Campesinos de Caquetá llegaron hasta Florencia para unirse al paro nacional. https://www.radionacional.co/actualidad/campesinos-de-caqueta-llegaron-hasta-florencia-para-unirse-al-paro-nacional
10	Yopal (Casánare)	Yopal: comunidades y organizaciones se movilizaran el #28A. https://trochandosinfronteras.info/yopal-movilizacion/

	Ciudad Capital (Departamento)	Titular Medios / Enlace Noticia
11	Popayán (Cauca)	Paro 14M: se decreta toque de queda en Popayán tras disturbios. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-nacional-14-de-mayo-movilizaciones-bloqueos-y-marchas-para-hoy-588397
12	Valledupar (Cesar)	Vías por las que se movilizará la protesta este 12 de mayo en Valledupar. https://semanariolacalle.com/vias-por-las-que-se-movilizará-la-protesta-este-12-de-mayo-en-valledupar/
13	Quibdó (Chocó)	Comunicado sobre el Paro nacional iniciado el 28 de abril del 2021. https://choco.org/comunicado-sobre-el-paro-nacional-iniciado-el-28-de-abril-del-2021/
14	Montería (Córdoba)	Paro nacional en Montería: la jornada en la capital de Córdoba. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-nacional-en-monteria-promotores-del-paro-lideran-las-marchas-de-hoy-584490
15	Inírida (Guainía)	El Paro Nacional también es indígena y afro Así se protesta en Mitú, Inírida, Quibdó y Buenaventura. https://pacifista.tv/especiales/paro-nacional-en-vaupes-guainia-quistibo-y-buenaventura/
16	San José del Guaviare (Guaviare)	Gobierno Nacional y campesinos de los Llanos iniciarán diálogos. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-nacional-gobierno-y-campesinos-de-meta-y-guaviare-iniciaran-dialogo-592510
17	Neiva (Huila)	Huila y Neiva en alerta por movilizaciones mañana. https://www.lanacion.com.co/huila-y-neiva-en-alerta-por-movilizaciones-manana/
18	Riohacha (Guajira)	Movilización en Riohacha fue pacífica. Se denominó “Gran toma a la capital” y participaron organizaciones sindicales, sociales, políticas y juveniles. https://www.elheraldo.co/la-guajira/movilizacion-en-riohacha-fue-pacifica-822386
19	Santa Marta (Magdalena)	Santa Marta dio ejemplo y marchó en completo orden. https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/515612
20	Villavicencio (Meta)	Así conmemorarán el 28 de mayo en Villavicencio, el Paro Nacional cumple 30 días. https://elcuartomosquetero.com/asi-conmemoraran-el-28-de-mayo-en-villavicencio-el-paro-nacional-cumple-30-dias/

	Ciudad Capital (Departamento)	Titular Medios / Enlace Noticia
21	Pasto (Nariño)	Con disturbios en Pasto y bloqueos en Bogotá avanzó jornada de dos meses de paro. https://www.larepublica.co/economia/con-disturbios-en-pasto-y-bloqueos-en-bogota-avanzo-jornada-de-dos-meses-de-paro-3193094
22	Cúcuta (Norte de Santander)	Así avanza jornada de marchas en Colombia, al cumplirse un mes de paro nacional. https://www.lafm.com.co/colombia/asi-avanza-jornada-de-marchas-en-colombia-al-cumplirse-un-mes-de-paro-nacional
23	Mocoa (Putumayo)	Paro nacional, movilización desde Mocoa, Putumayo. 12 de mayo. https://www.facebook.com/miradordelputumayo/videos/502176684469982
24	Armenia (Quindío)	Multitudinaria movilización se vive en la Avenida Bolívar de Armenia. https://www.elquindiano.com/noticia/26451/multitudinaria-movilizacion-se-vive-en-la-avenida-bolivar-de-armenia
25	Pereira (Risaralda)	Protestas en Colombia: muere Lucas Villa, el joven manifestante herido por civiles en las movilizaciones. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57023117
26	San Andrés (San Andrés y Providencia)	Marcha en apoyo al paro nacional. https://teleislas.com.co/marcha-en-apoyo-al-paro-nacional/
27	Sincelejo (Sucre)	Sincelejo sigue unido al Paro Nacional. Asodes y Ades se volvieron a manifestar con un plantón. https://www.elheraldo.co/sucre/sincelejo-sigue-unido-al-paro-nacional-815101
28	Ibagué (Tolima)	Ibagué: así van a realizarse las movilizaciones este 20 de julio. http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/470880-ibague-asi-van-realizarse-las-movilizaciones-este-20-de-julio
29	Cali (Valle del Cauca)	Desde la Plazoleta Jairo Varela Plantón Sector Cultural. https://www.canal2.co/desde-la-plazoleta-jairo-varela-planton-sector-cultural/
30	Mitú (Vaupés)	Vaupés despierto y en resistencia: así es la protesta en Mitú. https://pacifista.tv/notas/vaupes-despierto-y-en-resistencia-asi-es-la-protesta-en-mitu/
31	Puerto Carreño (Vichada)	#Vichada Puerto Carreño se sumó al Paro Nacional convocado para este 12 de mayo. https://www.facebook.com/PeriodicoElMorichal/videos/3761000820689486

Ciudad Capital (Departamento)	Titular Medios / Enlace Noticia
32 Bogotá	Paro Nacional: Colombia se estremece Un recorrido fotográfico por las protestas recientes en Colombia, que se saldaron con decenas de muertos por la represión policial. https://www.dw.com/es/paro-nacional-colombia-se-estremece/g-57498481
33 Bucaramanga	Primera línea de Bucaramanga se unirá a marcha masiva en Cali https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/primera-linea-de-bucaramanga-se-unira-marcha-masiva-en-cali

Fuente. Elaboración propia, a través de rastreo de medios que dan cuenta de la dimensión de las movilizaciones que iniciaron el 28 de abril de 2021.

Las cifras oficiales que el Estado colombiano —poco confiables para el movimiento social, en tanto dan cuenta de cifras muy por debajo de las reales—, entregó a la misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dio cuenta de la dimensión de las movilizaciones en el país:

El Estado colombiano reportó a la CIDH que, entre el 28 de abril y el 4 de junio, en el marco del paro nacional, se realizaron 12.478 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos, que incluyen: 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. El 89% de las protestas, esto es 11.060, se desarrollaron sin registrar hechos de violencia y contaron con el acompañamiento de las personerías municipales, gestores de convivencia, funcionarios de la defensoría del pueblo y agentes policiales. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2021).

Entre violencia estatal, negacionismo y la clara voluntad de no negociar

Las protestas y movilizaciones como forma de defensa popular de la población, ante la militarización como único argumento del ineficaz gobierno colombiano, son los grandes fenómenos que enmarcan esta histórica movilización popular. Lo que nadie esperaba era que esta convocatoria de abril de 2021 desbordara la capacidad política y de transformación de las centrales obreras, pues el pueblo y su necesidad de cambio rompió todas las expectativas.

Los entes sindicales bajo la figura formal que les congrega, denominada “Comité Nacional del Paro (CNP)”, decidieron darlo por finalizado el 14 de junio y promover otro tipo de estrategias como los diálogos locales, gremiales y focalizados. Para muchos, este Comité había caído en la trampa del chantaje de las políticas clientelistas el gobierno. Aún así, las movilizaciones continuaron con fuerza sin el sector sindical. Las organizaciones de base y las personas del sector informal, con multitudinarias movilizaciones cargadas de un gran activismo, siguieron en las calles, plazas y carreteras del país, pues las políticas de agresión tampoco paraban, encarnadas en la sevicia militar contra los marchantes.

Lo que no es de extrañar es el paso lento del ente gobernante, su desidia para tramitar el descontento social y su dejadez a la hora de dar garantías de no vulneración al derecho a la protesta. Finalizando el primer mes de paro decidieron abrir una mesa de negociación con el CNP, pero por la dilación y la negación de los problemas, dichos acercamientos se rompieron y, a pesar de la fuerza de las comunidades en las calles, no se retomaron. El CNP decidió cambiar la estrategia de acción que no fue bien vista por el grueso de la población movilizada, que siguió de manera independiente tomándose las calles. El gobierno de Iván Duque optó por arreciar y justificar la violencia contra civiles, sin responder a las demandas de la ciudadanía, acuñando narrativas conspirativas, tratando de revivir mediáticamente el relato contrainsurgente del

enemigo interno, usado para justificar el cierre de las rutas democráticas en décadas pasadas, so pretexto de la seguridad nacional.

El pueblo, como sujeto político que desafía el orden establecido, ha provocado reacciones violentas y descalificadoras por parte de las élites, que ven amenazados sus privilegios y tiemblan por causa de ese despertar popular masivo y rebelde. Se desata, así, una hostilidad estigmatizante, acompañada de un duro ataque represivo donde entran en escena las acciones militares encubiertas, la movilizadora violencia paramilitar y las acciones narrativas justificadoras del poder hegemónico de las grandes empresas de comunicación, con el libreto del vandalismo y el saqueo.

Miles de manifestantes se mantuvieron activos en varios puntos, cuando la represión de las fuerzas oficiales, en coordinación con civiles armados, trataron de neutralizarles violentamente. Estos ataques dejaron un centenar de muertos, personas detenidas y alrededor de 400 desaparecidas, cifra que las organizaciones sociales plantean que puede ser más elevada.

El uso desmedido y articulado de las fuerzas legal e ilegal, el señalamiento, la criminalización y la persecución fueron las únicas respuestas del gobierno. Por su parte, el partido de gobierno, el Centro Democrático, lanzó una campaña agresiva en contra de las manifestaciones promoviendo un lenguaje de odio que caló en sectores minoritarios de la sociedad, pero con poder económico (Alvarado Lozada, 2021). La autodenominada “gente de bien” se fue organizando para atacar por vía armada las manifestaciones. Esto quedó evidenciado gracias a múltiples grabaciones en redes sociales que permitieron sustentar lo dicho, exponiéndolo también en procesos judiciales, dando cuenta de esa connivencia entre mafias, políticos, policías: actos propios de una lógica paramilitar (Insuasty Rodríguez, 2017). Todas acciones contaron con la ayuda –por acción u omisión– de la fuerza pública (Pardo, 2021).

Fue la presión de los medios alternativos, al registrar y hacer pública la barbarie, y gracias a ONGs como Temblores, que dichos hechos fueron traducidos en datos fiables, ante la inoperancia y el negacionismo institucional, dando cuenta del uso desmedido de la fuerza, del uso de estrategias paramilitares; documentando las desapariciones de jóvenes manifestantes—algunos de ellos luego aparecerían muertos en quebradas y ríos—, así como las torturas, tratos crueles y violaciones. En algunos casos, las agresiones implicaron pérdida de ojos, entre otras múltiples y preocupantes formas de negar la democracia. La compilación y sistematización de estos casos, fueron insumos que alimentaron diferentes informes nacionales, alternativos y dirigidos a organismos internacionales (Temblores ONG, Indepaz y Paiis, 2021).

Estas denuncias, como la campaña #SOSColombia, generaron una ola de solidaridad internacional, que presionó al gobierno Duque para que el permitiera el ingreso—inicialmente negado— a organismos internacionales para verificar lo que estaba ocurriendo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), finalmente llevó a cabo su visita del 8 al 10 de junio de 2021 y luego hizo público su informe en julio, documento cuyas denuncias y recomendaciones fueron negadas por el gobierno: “No son obligatorias”, fueron las palabras de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, sobre sugerencias de la CIDH (Umaña Mejía & Romoleroux, 2021).

Por su parte, varias misiones en solidaridad lograron entrar al país, y sus informes coincidían con el de la CIDH. Algunos de estos informes fueron:

- #Cali Informe desde los sitios de detención a posibles fosas comunes y casas de pique (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2021)
- Causas, preliminares y actualidad del conflicto social Colombia. Informe de Coyuntura Nacional. (Bonilla, y otros, 2021)
- Informe preliminar: Violación de Derechos Humanos En Colombia En el marco del Paro Nacional 2021. (Misión

Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, 6 de junio de 2021)

- Entregan segundo informe a la CPI. Señalan irrupción de paramilitarismo urbano en Colombia (Red de Organizaciones Sociales, 2021)
- Informe presentado por el Comité Nacional de Paro – CNP a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH (Comité Nacional de Paro [CNP], 2021).
- Informe. Misión de observación internacional por las garantías de la protesta social y contra la impunidad en Colombia. (Misión Internacional, 2021)
- Informe conjunto presentado a la CIDH, sobre violación sistemática de Derechos Humanos en el marco de las protestas en Colombia (Temblores ONG, Indepaz y Pairs, 2021).
- Gravedad de la situación de derechos humanos en Colombia. El caso del paro nacional y sus repercusiones sobre el Sistema Integral para la Paz (28 de abril al 30 de mayo de 2021) (Justicia Especial para la Paz [JEP] - Unidad de Investigación y Acusación, 2021)
- Colombia: Cali: En el epicentro de la represión. (Amnistía Internacional, 2021)

Estos informes dieron cuenta de la brutalidad policial, de la negativa del gobierno a negociar, la negación de la democracia, la libertad y la sistematicidad de la violencia y la vulneración de derechos humanos, que no son hechos aislados ni fruto de las acciones de “manzanas podridas”, ya que –como lo manifiesta la Justicia Especial para la Paz (JEP)–, son acciones que configuran tres graves riesgos:

- i) Riesgos para satisfacer el derecho constitucional a la no repetición; ii) Riesgos para garantizar la participación efectiva de ciertas organizaciones de víctimas y de defensores/as de

derechos humanos en el Sistema Integral para la Paz y iii) Riesgos para realizar actividades en territorios de interés para el Sistema Integral para la Paz debido al deterioro de las condiciones de seguridad y orden público. (Justicia Especial para la Paz [JEP] - Unidad de Investigación y Acusación, 2021).

El fallo del Tribunal Permanente de los Pueblos ratificó los hallazgos y resultados de estos informes. En marzo de 2021, se realizó la versión número 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos, un tribunal ético legado del tribunal Russell I sobre Vietnam (1966-67) y del Tribunal Russell II sobre América Latina (1973-76), un espacio internacional creado ante la negativa de los imperios y algunos Estados poderosos a reconocer la verdad y aplicar justicia, ante sus constantes injerencias y violaciones a los derechos de los pueblos en el mundo. Es la tercera vez que dicho tribunal sesiona en Colombia: la primera vez fue sobre impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina (Bogotá, 22-25 de abril de 1991), y luego, sobre empresas trasnacionales y derechos de los pueblos en Colombia (2006-2008). En esta ocasión, se juzgó al Estado Colombiano por genocidio, crímenes contra la paz e impunidad (Kavilando - Redipaz, 2021).

En julio se hizo la lectura del fallo, luego de la presentación de pruebas y testimonios y de haberse realizado el debido proceso de juzgamiento. El fallo fue contundente y condenó:

A LOS SUCESIVOS GOBIERNOS DE COLOMBIA, DESDE 1946: - Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de un genocidio continuado dirigido a la destrucción parcial del grupo nacional colombiano, que se ha proyectado sobre cualquier intento de construcción de espacios políticos que cuestionaran el modelo político imperante de desigualdad social y sobre cualquier intento articulado de protesta y resistencia contra los efectos del mismo. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2021)

También se condenó a los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos, desde 1946, *“por la exportación de la ideología criminal que avala la consideración de parte de la población como enemigo interno, el paramilitarismo, la represión de la oposición política y social y la tortura en América Latina”* y a las empresas nacionales y transnacionales “que hayan participado en las graves violaciones de derechos humanos descritas en esta sentencia”.

Todo lo ocurrido durante estas movilizaciones ratifica la continuidad de una estructural práctica genocida continuada:

La historia política de Colombia ha estado marcada por un constante ataque a los trabajadores sindicalizados, organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, cooperativas territoriales autónomas, procesos académicos universitarios, docentes, investigadores, comunicadores, organizaciones urbanas, estudiantiles, partidos políticos como la UP, A Luchar, Movimientos Cívicos, defensores y defensoras del medio ambiente, entre otras organizaciones que por sus posturas, su defensa de los derechos, por la búsqueda de mejores condiciones de vida, por oponerse a la imposición de un modelo de desarrollo devorador, sufren la aplicación constante de esa Tecnología del Horror (Vallejo Duque & Insuasty Rodríguez, 2021).

Por su parte, el Comité Nacional de Paro (CNP), en diversos comunicados, expuso la falta de voluntad política del gobierno para negociar. Desde 2019 presentaron que no fue escuchado ni tenido en cuenta (Comité Nacional de Paro, noviembre 21 de 2019). En plena pandemia (2020) presentaron un nuevo Pliego de Emergencia para atender los impactos derivados de la pandemia (Escuela Nacional Sindical, 2020), pero no fue tenida en cuenta tampoco.

Llegado el Paro Nacional, el 28 de abril de 2021, se presentó como punto de negociación dicho Pliego de Emergencia (2019) y una propuesta previa como condición para negociar: desmilitarizar, respetar el derecho

a la protesta, cumplir con lo establecido en la ley, la constitución y los acuerdos internacionales en materia de derecho a la libre expresión y la manifestación, además de generar los mecanismos para negociar con los sectores juveniles territoriales no integrados en el comité (Comité Nacional de Paro [CNP], 2021). El 24 de mayo, el CNP y el gobierno anunciaron un preacuerdo (Gutierrez, 2021), que luego el mismo gobierno desestimó, en una clara estrategia de dilación. Esta condición previa para negociar no solo no fue aceptada por el Estado, sino que emitió un decreto el 28 de mayo que ordena un amplio despliegue militar en el país, llamándole “asistencia militar”, sin contemplar el diálogo (Comité Nacional de Paro, mayo 30 de 2021), ni el respeto por las autoridades locales, un decreto absurdo y abiertamente inconstitucional (Uprimny, 2021). Los esfuerzos por avanzar en las negociaciones por parte del CNP fueron desestimados por el gobierno, hasta el punto de que el CNP decidió suspender dichas negociaciones, trazando una nueva estrategia que fue mal recibida por el grueso de la población, que siguió movilizándose (Comité Nacional de Paro, junio 16 de 2021).

Es claro que se negocia con un Estado cooptado por una élite criminal, empresarial y de clanes políticos, no dispuestos a negociar sus prebendas y privilegios. Cabe señalar que el gobierno de Duque logró concretar el sueño de la derecha, aprovechando la coyuntura de la pandemia: hiper-concentración del poder, controlando el Congreso, la Fiscalía, los órganos de control y vigilancia y sectores de las Cortes (Vallejo Duque & Insuasty Rodríguez, 2021). El asunto es de fondo y estructural: de allí su capacidad para desconocer los problemas y los actores dejando un margen negativo para poder negociar.

Recordemos, además, que Colombia es un país donde las élites han mantenido el control de los poderes públicos durante los más de 200 años de historia republicana, y siempre han temido las movilizaciones sociales, incluso cuando éstas se llevan a cabo de manera pacífica. Eso hace que se restrinja aún más la participación, llevando a un escalamiento de la violencia, que por supuesto incluye el conflicto

interno armado de más de 60 años, que no cesa y del que la población ha llevado la peor parte. El Gobierno actual sigue su tendencia histórica de no reconocimiento ni escucha, pero sigue estigmatizando a las personas que protestan, respondiendo militarmente ante el reclamo social que hace la población.

Del bloqueo social a las convergencias desde las movilizaciones populares

Este activismo logra romper la cultura política de la representación, asumiendo su papel constructivo y participativo con prácticas de hecho, como los paros y las barricadas que, a pesar de que son instrumentos clásicos de movilización de las fuerzas anticapitalistas –tales como la toma de calles, las manifestaciones públicas, concentraciones y discursos que animan las marchas–, son usadas por nuevas generaciones de luchadores bajo un enfoque carnavalesco y de creatividad solidaria y colaborativa, que logra llamar la atención de la opinión pública internacional sobre las condiciones de vulnerabilidad social y el empobrecimiento humano en el que se vive en Colombia.

Este enfoque carnavalesco, exhibido masivamente, da cuenta de nuevos elementos de acción de los nuevos procesos emancipadores con sus creativas consignas, y una simbología propia y trasfronteriza que rebasan los parámetros cerrados de aquellas izquierdas, que renunciaron a los procesos y prácticas del transformar o revolucionar las relaciones de opresión y declinaron en las formas de movilizarse por el cambio, para concentrarse sólo en asuntos puramente reivindicativos, electorales e institucionales, que son los que perpetúan el poder político hegemónico. Después de más de 80 días de posicionar la protesta en calles, plazas, redes y medios alternativos, rechazando cualquier forma de explotación entre los seres humanos, reivindicando la inclusión desde políticas sociales, defendiendo la naturaleza, oponiéndose al extractivismo y la megaminería, el obstáculo siguiente a vencer tiene que ver con afinar los proyectos de cambio, desde agendas comunes con metodologías

desde abajo, donde confluyan pensamientos críticos, libertarios, de los colectivos anti-sistémicos y propuestas e ideas revolucionarias desde las organizaciones sociales y políticas, que resisten y luchan desde sus particulares condiciones obreras, campesinas e indígenas, afro, de mujeres y jóvenes artistas, ecologistas, estudiantes o población del sector informal o en desempleo; en fin, sectores populares, en los marcos de la contradicción entre capital y trabajo, contra toda discriminación racial, de género u opción sexual. Estos recientes acumulados políticos e históricos de los procesos populares de carácter antisistémico y anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal, antimperialista, tienen el gran reto de generar un novedoso proceso de articulación y unidad de acción desde prácticas concretas en la construcción de poder popular, en función de la vida digna y un país en paz con justicia social.

En esa perspectiva estaría la clave del cambio, pues en medio de la curva de fatiga, el énfasis en cómo tejer los diálogos para la construcción de una confluencia de resistencias, luchas y solidaridades locales, territoriales y poblacionales se convierte en el desafío. Lo esperanzador será buscar cómo se pueden cohesionar esos sentires del presente, a partir de entenderse en las afectaciones comunes generadas como problemáticas económicas, ambientales, laborales, pero aún no en términos de reconocimiento de condiciones culturales étnico, populares, rurales y sociales de género y generación.

Generar ambientes de convergencias en el contexto de las movilizaciones, con propuestas y programas en perspectiva de poder popular, está en el horizonte, creando y ampliando mayores niveles de relacionamiento con procesos sociales y políticos desde los sectores y territorios, posicionando el diálogo de las agendas de acción política.

¿Quiénes y cómo se movilizan?

El enfoque de los gobernantes de mantenerse distantes y de no reconocer la vivencia y condiciones de vulnerabilidad de los 21 millones de personas que luchan por sobrevivir en Colombia, fue marcando la

presente brecha en la relación entre quienes administran el Estado y la población que lo padece. La sociedad colombiana movilizada está haciendo lo que políticamente le corresponde: expresar su descontento e indignación ante las injusticias sociales. Las protestas son parte de la respuesta a los altos niveles de desigualdad que la población experimenta y rechaza. Las movilizaciones son el resultado de políticas públicas que han incrementado la vulnerabilidad y han llevado a una pérdida de confianza hacia la clase política y las instituciones.

Los actuales administradores estatales no han sido capaces de responder a las demandas por remediar la creciente inequidad, que además se agrava durante la pandemia. Permanecen distantes y desconectados de las necesidades de la población que debe resolver sus dificultades. Al parecer, su incapacidad no es solo administrativa, se suma a lo anterior el no entender las movilizaciones y sus demandas populares. En tiempos de democracia participativa y de contextos cada vez más fragmentados, las movilizaciones son garantía de participación política. La esencia de las movilizaciones sociales y populares es regular el poder del Estado para que sea cada vez más público, ayudan a regular su accionar de acuerdo con el contrato social establecido como sociedad. La legitimidad de un orden social es relacional y depende de la capacidad del Estado de responder a las demandas de la población. La institucionalidad pierde legitimidad si no respeta y observa los contratos sociales.

El pueblo no entiende abstractos financistas, entiende concretos económicos. Se intuye, en las múltiples formas movilizantes, que se trata de poner fin a un sistema opresor, se busca parar la violencia económica vía decretos de Estado y se necesita exigir respeto a los derechos a la movilización y a la reivindicación de territorios de paz con dignidad y justicia social. Sin tener un programa político preestablecido, los manifestantes en sus reclamos dejan ver que se necesitan verdaderos espacios de construcción política impulsados por la soberanía popular y el deseo de vida en dignidad donde el pueblo tenga un papel activo.

Algo así como una construcción en democracia que vaya más allá de las prácticas electorales y las formas clásicas de representación.

Desde el protagonismo comunitario se pretende, no sólo protestar y plantear el desacuerdo con las políticas neoliberales desarrolladas por los últimos gobiernos, ni tampoco buscar “una política social que permita apalancar las necesidades de colombianos y colombianas” como lo plantean los sindicatos. La fuerza en la calle propone un nuevo momento político de construcción de sociedad, manteniendo como referencia la construcción de un diálogo social de carácter popular permanente.

Las múltiples razones de la movilización tienen que ver con el “ya no tragar entero”, “ni comer cuento”, considerando que, en el régimen establecido de injusticia social, ya no tienen nada que perder: ya el neoliberalismo pre-covid19 le había despojado de las mínimas garantías. Al querer subvertir ese orden, el pueblo en la calle lleva la conflictividad comunitaria en sus espaldas, propone no participar más de la democracia simulada y no ignorar más la opresión real. Hay un profundo deseo de cambio estructural, pero que tenga implicaciones inmediatas. Este levantamiento popular es una consecuencia de la pérdida de legitimidad del poder institucional. No está inspirado propiamente por ideales de izquierda, la gente en la calle busca reapropiarse de su dimensión política, para no dejarla en manos de una oligarquía indigna y desconectada del pueblo. Es así como el accionar del pueblo se rebela y se manifiesta en contra de unas élites secuestradoras de los poderes públicos, concentradoras de riqueza y empeñadas a los designios internacionales. El paro fue protagonizado por una parte del pueblo excluido—diríamos con mayor fuerza, de los “ninguneados”—que deciden la toma de su destino y, con sus propias fuerzas, empiezan a transitar el camino hacia un nuevo comienzo, en clave horizontal, “minga adentro”, de los territorios urbanos y rurales. Como movilización espontánea de base, que no tiene dueños ni asume decretos de arriba, sujetos y colectivos deciden hacerse visibles a partir de tomarse los espacios

públicos y desafiar la manera como las sociedades conservadoras y explotadoras han pretendido, a través de la cultura representativa, naturalizar la dominación. En varios lugares o puntos de resistencia, miles de jóvenes que no se sienten representados por los líderes sindicales, siguen manifestándose contra las relaciones que promueve esta sociedad opresiva. Las fuerzas populares han ido organizándose de acuerdo a sus posibilidades, transformando las barricadas y los objetos de bloqueo de las avenidas, por lugares de negociación y concertación del bien común, espacios donde se desarrollan las asambleas populares, sin importarles las restricciones por el Covid-19, que se ve más como excusa para la desmovilización propuesta por el oficialismo y la gente de bien “preocupada por la salubridad del pueblo”, algo que en los doscientos años del país nunca ha sido foco de preocupación de ningún gobierno.

En cuanto a la composición interna de este proceso, se puede observar que los protagonistas del paro son, en su inmensa mayoría, procedentes de los sectores populares y periféricos, informales, un amplio sector de jóvenes que ni estudian ni trabajan (los NiNi) que según el DANE suman 3,3 millones de jóvenes (Hurtado, 2021) que se manifiestan y actúan como auténticos integrantes del pueblo, una clase popular emergente, sin condición laboral específica y menos perteneciente a una vanguardia política organizada. Estos jóvenes fueron dando vida a un nuevo actor, las llamadas Primeras Líneas. Lo impredecible se convierte en condición, en su fin de zafarse de las cadenas que los atan, no se le reporta nada a nadie, son auténticamente populares y de mente amplia, se convocan como “pueblo berraco que se hace respetar”. La gente en la calle empieza a organizarse de forma auténtica y espontánea, sin preparación previa, generando una organicidad que difunde una energía emancipadora y creativa, de esperanzadora y utópica acción del pueblo.

A partir de un accionar real de fuertes reivindicaciones que se afirman en el calor de la movilización, sin preparación teórica previa, se despliega en gran medida por fuera de consideraciones prejuiciosas. Rompen todas las expectativas de derecha e izquierda, sin delegación ni

filtro ideológico, de lejos superan la movilización del “formato político clásico”. No hay programa político predefinido al cual rendirle ortodoxia. Las personas movilizadas no tienen representación, ni banderas políticas definidas, posiblemente fruto de estas luchas emergerán las propias.

Las movilizaciones populares fueron organizándose de manera colectiva por las bases populares, movimientos estudiantiles y organizaciones sociales. Los miles de personas que han salido a las calles o participan de las jornadas del paro nacional desde las redes, se manifiestan bajo el liderazgo de las primeras líneas, que para cada aspecto a cubrir según las necesidades van apareciendo nuevo grupo de apoyo.

Las personas en movilización se convocan y hacen fluir una programación que se teje, momento a momento, de manera horizontal y circula a través de redes sociales, donde además se visualiza a modo de denuncia la atrocidad de las vulneraciones sobre la integridad del pueblo en las calles, con transmisiones en tiempo real de la movida callejera, por distintos canales y plataformas independientes y alternativas desde la web, y que es interrumpida con cortes a la energía y bloqueos de internet en las grandes ciudades por parte del régimen, de manera que las manifestaciones no puedan ser registradas, ni divulgadas las formas de represión.

Las poblaciones precarizadas y segregadas tienen un rol esencial en la movida presente, relegadas al *status quo* que les predestinó para no ir más allá de la subsistencia y habituados a esa lucha por la supervivencia, usando los espacios públicos como parte de la herramienta con la que históricamente han trabajado para conseguir su sustento. Hoy en el dinámico presente, el espacio de lo público se convierte también en la herramienta con la que se buscará reconfigurar la realidad de dominación naturalizada a la que son confinados como único horizonte.

La izquierda que participa del proceso pero que dirige, es claramente superada por este. Lo hace como acompañante de estas nuevas vanguardias a las que, en solidaridad, se han sumado otros procesos,

como los Profes de la Primera Línea, con eslogan como “ustedes tienen balas, nosotros las palabras”, y Mamás Primera Línea, que tenían escrito en sus elementos de protección “S.O.S”. En varias partes, grupos palenqueros también se han sumado para manifestar su rechazo al racismo contra la juventud afrodescendiente, así como las distintas organizaciones indígenas bajo la figura de mingas locales.

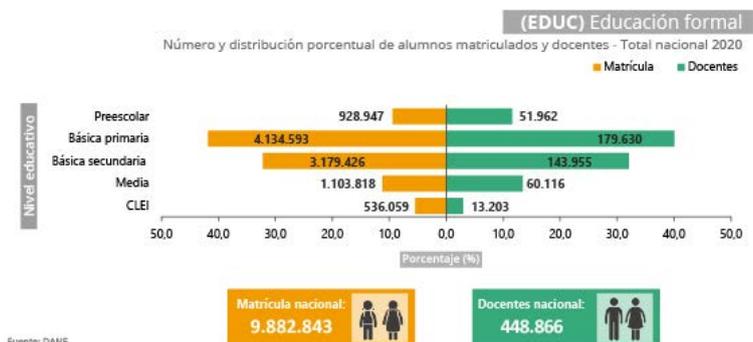
Todos, a su modo, se fueron agrupando según lo permitía la lógica en cada ciudad, en cada territorio. En unos casos tomaron mayor fuerza como en Bogotá, Cali, Pasto, Bucaramanga, Pereira, Putumayo; donde se entrecruzaron con las expresiones organizativas indígenas como espacio de aprendizaje y fuerza popular, en Pasto, Popayán, Ibagué, Neiva, entre otras. Se fueron fortaleciendo gracias a las ollas comunitarias, plantones, jornadas de pintura de murales, en un ejercicio que se tradujo en otro espacio de combate, pues el Ejército, sectores de la sociedad autodenominados “gente de bien” ultraconservadores y reaccionarios, se dieron a la tarea de pintar de gris cada mural colorido que en la ciudad dejaban los jóvenes con denuncias o mensajes de un necesario cambio social, sobre todo en Cali (Cárdenas, 2021).

El pueblo cuida al pueblo: Primeras Líneas - APH - DDHH

Las razones que mueven a los jóvenes a integrarse al Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 (21N) y luego al 28 de abril de 2021 (28ª), generando toda una movilización imparable bajo una estructura emergente, más allá de las organizaciones sindicales, estudiantiles y organizaciones sociales convocantes, más allá de toda estructura orgánica tradicional, son múltiples y de fondo. Fueron los jóvenes quienes provocaron el potente impacto de unas movilizaciones, sobre todo urbanas, sostenidas en el tiempo a nivel nacional: un actor nuevo en escena con una potencia tal, que no fue prevista por la institucionalidad ni por los convocantes iniciales al paro nacional y que dejó no sólo enseñanzas, sino cuestionamientos de fondo al orden hegemónico instituido, al poder dominante, así como a las organizaciones sociales, sindicales y partidos.

Son los jóvenes agrupados, en constante organización desde abajo, venidos de sectores deprimidos, sin futuro, marginados, pero con un deseo imparable de cambio, quienes han puesto en el tapete una serie de problemas legados de malos gobiernos y el sometimiento a un modelo económico capitalista-neoliberal, una serie de fallas del sistema que no se han querido observar, como los siguientes:

21 millones de pobres en Colombia, casi la mitad de la población (las personas pobres siempre han existido en todos los países, independientemente si son ricos, desarrollados o militarmente predominantes, lo que evidencia que jamás el liberalismo económico en todas sus versiones lo ha resuelto), desempleo, Injusticia jurídica, exclusión política (la construcción política se realiza conforme a la creación de partidos dominantes que excluyen de forma directa a los otros partidos por medio de la estigmatización, el nepotismo y la corrupción); partidos políticos antidemocráticos y altamente corruptos, empleos precarios, salario mínimo paupérrimo, estratificación de la sociedad, sectarismo y exclusión de los pueblos, exclusión de los diversos, criminalización de la pobreza, la protesta y el ser joven; exclusión de los jóvenes, donde el DANE habla de 3.3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, con un futuro incierto, falta de acceso a la educación formal; en la medida que se sube en edad, se disminuye el índice de participación de los jóvenes a una tasa del casi 300% de cubrimiento o acceso a la educación a niveles superiores, pasando de 4'134.000 niños estudiando, a 1'103.000 que logran llegar a la educación media.



Fuente: DANE (2020)

Esta exclusión se hace más notoria en la educación superior, ya que el nivel de graduados por año es de un promedio de 482.122 —sumando todos los pregrados y niveles de posgrado—, lo que evidencia claramente que la educación no está al alcance de todos. Diversos jóvenes, en varias ciudades y de manera simultánea, se venían organizando como escudo defensivo de las movilizaciones, ante los permanentes y constantes ataques y saboteos de la policía y el abuso del Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD). Se constituyen como fuerza defensiva, de cuidado y protección en primera instancia, un cuerpo de resistencia que poco a poco va ganando en capacidad organizativa y voz política. Constituida por jóvenes de diversa procedencia, allí se encuentran estudiantes, desempleados, informales, quienes no estudian ni trabajan; jóvenes que les ha tocado sobrevivir —como dicen ellos— “guerreando en las calles”, se han ido ganando el favor popular, posibilitando articular acciones con otras organizaciones barriales, Juntas de Acción Comunal, algunos sindicatos, algunas oenegés, ganando en identidad. Se mantuvieron en las calles, movilizándose y articulando acciones artísticas, ollas comunitarias, asambleas populares locales, barriales, regionales.

En Cali, diversas expresiones de primeras líneas se encontraron en la denominada Unión de Resistencias de Cali (URC), quienes realizaron su primera asamblea para definir su futuro político el 11 de julio de 2021 (Gómez, 2021), al igual en Bogotá; y en Medellín la Primera Línea Valle de Aburrá, por ejemplo. Luego, se inició un proceso de articulación nacional, a la par con la Asamblea Nacional Popular. Unas expresiones más organizadas y estructuradas que otras, ya que no se trató de procesos homogéneos. A nivel nacional, se fueron articulando por medio de las Asambleas Populares Nacionales, una de ellas realizada entre el 17 y 20 de julio de 2021 (Redacción El Tiempo, 2021), en la que participaron expresiones de primeras líneas de varias zonas del país. De esta Asamblea quedaría la base de una agenda común de lucha y una ruta de trabajo regional. Pronto el poder hegemónico dominante las identifica y aplica la misma estrategia de señalar, moralizar,

individualizar, perseguir, desaparecer, para causarles el mayor daño posible, a modo de una perturbadora y constante pedagogía del terror. Aun así, se mantuvieron, resistieron y ganaron un lugar social: los colectivos les fueron identificando como héroes, aliados, defensores del bien y gestores de un futuro que por ahora no se vislumbra. Sus reclamos son básicos: educación, salud, vivienda adecuada, un espacio social para ellos y ellas, trabajo digno, bienestar, equidad, justicia real, entre otras reivindicaciones que el sistema ignora, anula o desestima.

Alrededor de las primeras líneas, se fueron gestando redes de nuevas formas organizativas con el objetivo de garantizar la vida, el cuidado, la defensa de derechos y romper el cerco mediático. Así, otro cuerpo de jóvenes y adultos se fueron articulando para actuar como enfermeros, médicos, rescatistas y paramédicos: la Atención Pre-Hospitalaria (APH), quienes van detrás de las marchas atendiendo los casos de violencia que se presenten, debido a que la fuerza pública no permitía que pasaran las ambulancias y los cuerpos médicos, lo que ha devenido en la creación de la Primera Línea Médica con la promoción del doctor Nickolaz, a la que han comenzado a pertenecer una buena cantidad de miembros (Primera Línea Médica, 2021). Se gestaron también colectivos que dieron vida a estructuras de defensa de derechos humanos, y se articularon medios alternativos que cubrían a modo de reporteros de guerra, en directo, cada movilización y cada enfrentamiento provocado por la policía y el Esmad. También se articuló una red de solidaridad para hacerse de víveres para las ollas comunitarias, donde muchos jóvenes manifestaron por fin estar comiendo bien, insumos médicos para atender a los heridos, salas o espacios improvisados de atención en medio de los enfrentamientos, personas articuladas al sostenimiento de los campamentos donde pernoctaban algunos jóvenes articulados a las primeras líneas y donde muchos se recuperaban a modo de hospitales temporales improvisados, en tanto la persecución de la policía llegaba incluso a las clínicas donde atendía a los heridos y allí eran capturados, amenazados e individualizados.

La solidaridad se hizo sentir, desde la vecina que entregaba papas y plátanos para la alimentación, hasta los anónimos ciudadanos y empresarios que donaron cascos, gafas, insumos para la protección de los jóvenes de primeras líneas. Un senador, gracias al sistema Vaki, logró recoger un importante monto de dinero y, bajo una abierta y transparente administración, donó insumos de protección para los jóvenes, con el fin de garantizarles la integridad y la vida ante la cantidad de heridos y lesionados, muchos con pérdida ocular. Al senador Gustavo Bolívar le siguieron un proceso de pérdida de investidura de su cargo de elección popular por este acto (Redacción Justicia El Tiempo, 2021), y fue objeto de ataques mediáticos por un supuesto apoyo al vandalismo, pero lo que se generó fue una solidaridad en torno a su figura. Esta arquitectura social-popular, también ha permitido que otras primeras líneas se hagan visibles, como la Primera Línea Tecnológica, donde jóvenes ingenieros tratan de mantener al aire todas y cada una de las manifestaciones multimedia o de transmisión de los hechos en vivo (Primera Línea Tecnológica, 2021). Así mismo, se ha creado la Primera Línea de Psicología, formada por profesionales unidos y unidas por la salud mental en el marco del paro, con el fin de atender a los jóvenes frente a su cotidianidad como frente a sus formas de expresión, e indudablemente frente a las secuelas que les dejan las protestas y los traumas que genera la fuerza pública (Primera Línea de Psicología, 2021).

En ese mismo sentido se fundaron la Primera Línea Contable, que apoyó, por medio de asesorías gratis, la conformación de fundaciones, con clases libres de contabilidad y finanzas en barrios, y la conformación de veedurías ciudadanas (Primera Línea Contable, 2021). Las manifestaciones de apoyo han aumentado, y se han creado igualmente la Primera Línea Ambiental en resistencia y oposición frente al mal manejo de nuestro patrimonio ambiental. Como se observa, siguen surgiendo agremiaciones y organizaciones en pro del apoyo al paro; así mismo, aparecieron una gran cantidad de medios de difusión alternativos, populares, sociales, comunales y de resistencia, que vienen

trabajando y cubriendo todos los eventos que se van presentando en medio de las marchas.

Una nueva arquitectura social, tejida desde abajo, que fue brotando, generando las condiciones para la emergencia de nuevos actores y procesos que empujan cambios de fondo en medio de una sociedad devastada y en crisis por la impunidad, los malos gobiernos y la desigualdad.

Mujeres

“Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio, **no somos las otras**, somos parte activa de esta sociedad, las que luchan, razonan y gritan por las injusticias sociales y patriarcales impuestas sobre nuestros cuerpos (...)” (Colectivo Vestigios, 2021)

Reconstruir la posición de las mujeres en la cartografía de la movilización social implicaría, en primera instancia, reconocer que históricamente las mujeres han sido puestas en el lugar de las ‘otras’; lugar que no es habitado de manera homogénea, ya que el sistema de opresión colonial, racista, clasista, lesbofóbico y transfóbico delinea profundas diferencias en todas las experiencias.

Sin embargo, desde este lugar compartido de otredad del que enérgicamente intentan moverse, se observa la displicencia con las que son recibidas las voces de las mujeres y los castigos particulares que les son impuestos en razón de la afrenta que representa la reclamación por derechos y el situar los cuerpos en lo público para reivindicar las causas que se comparten como colombianas y colombianos, pero también de aquellas que están en el punto ciego de los hombres, pues se inscriben a la experiencia como mujeres. En una sociedad atravesada por al menos un triple sistema de opresión (patriarcal, racista y capitalista neoliberal), se hace necesario visibilizar el escenario de violencia estructural, directa y cultural al que han

estado sometidas y que durante la pandemia se recrudeció, pues con las medidas de cuarentena preventiva tuvo lugar un incremento de la violencia hacia nuestros cuerpos, demostrando de manera grotesca que ni en la intimidad de nuestros hogares están seguras.

Es de resaltar que la estructura social colombiana está atravesada por la vulnerabilidad, la opresión y la desprotección, lo que ha conducido en numerosas ocasiones a la toma de las calles para exigir la garantía de los negados derechos, no sin hacerse receptoras de una serie de castigos que van desde el recibimiento de calificativos peyorativos, hasta la violencia física y sexual. En el marco de la movilización del Paro Nacional de 2021, las mujeres salieron a las calles, rechazando medidas que —como la propuesta de reforma tributaria y de reforma de la salud—, representaban una precarización general para la población, pero en particular para las mujeres, sus cuerpos, que sostienen el peso del sistema de explotación capitalista y neoliberal, a través de las múltiples horas que dedican al trabajo, ya sea el que es inequitativa e injustamente remunerado, como el que no es remunerado, ni siquiera reconocido, a saber, el trabajo del cuidado y la reproducción de la vida

Se hace necesario y urgente, además de los reclamos de derechos, lograr una transformación de fondo de una sociedad que, como práctica cultural, apela a la violencia sexual como un guión, como ejercicio cotidiano discriminatorio y que se exagera en contexto de protestas hasta llegar a tratos reconocidos como formas de tortura.

Las mujeres sufren la violencia policial de manera diferenciada. Prácticas como tocamientos sexuales, golpes debido al género, acceso carnal violento, acto sexual abusivo, insultos y tratos crueles y degradantes, son otros de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres que participan y lideran la protesta social, así como la defensa de los derechos humanos. Adicional a esto, según se afirmó, las mujeres y los cuerpos feminizados padecen otras múltiples violaciones de derechos humanos, debido a la identidad de género y de sus prácticas sexuales que, sin embargo, difícilmente son registradas. El informe de la ONG

Temblores, “Bolillo, Dios y Patria” durante los años 2017, 2018 y 2019, señala que Medicina Legal registró 241 hechos de violencia sexual cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública. 139 de ellos fueron cometidos por las Fuerzas Militares y 102 por la Policía Nacional. Según esto, podemos afirmar que cada 10 días ocurre un hecho de violencia sexual en el que el victimario es un miembro de la Policía. Durante el año 2017 siete hombres y 29 mujeres fueron violentados y violentadas sexualmente por la Policía; en el 2018, 28 mujeres y cinco hombres y, en el 2019, 25 mujeres y ocho hombres.

Como lo menciona Rita Segato (2018), “La transgresión de algunos cuerpos (por parte de la fuerza pública, en el marco de protestas, en especial de los cuerpos femeninos y feminizados) ha pasado a ser una política de represión y corrección estatal”. Así, se corrobora que la violación es un acto comunicativo, es un crimen enunciativo, que dice algo a alguien, y es además la perfecta aplicación de la pedagogía del terror. Nos queda seguir ahondando sobre esta pregunta: ¿Cuál es el contenido de las representaciones simbólicas sobre el cuerpo de las mujeres de quienes sostienen esta estrategia?

En estas movilizaciones la lucha por los derechos de las mujeres no se asumió como un tema ajeno, separado, sectorial, lejano para algunos, independiente, sino como un todo en la lucha de los pueblos. Quedan interrogantes por hacernos como movimiento social en torno a los cuestionamiento y aprendizajes derivados de este momento social de lucha importante.

Las nuevas formas de comunicar

No cabe duda de que las redes sociales se han convertido en un canal de expresión libre y masivo, del que particularmente la población juvenil se ha apropiado. Podríamos decir que lo digital hace parte de la identidad generacional de este sector poblacional de la sociedad. En el contexto del paro nacional, podemos identificar acciones políticas generadas desde estos medios digitales, como convocar y movilizar a

diferentes colectivos de la sociedad, visibilizar y resaltar los logros que se van obteniendo, donde se masifican las causas y reivindicaciones de este momento histórico, y para denunciar y señalar a sus adversarios.

El desasosiego, la impotencia y la falta de oportunidades han sido la mezcla de sensaciones y sentimientos que han acompañado estas expresiones, que podríamos categorizarlas dentro de un activismo digital. Los hashtags como #SOSColombia, #NosEstanMatando #ParoNacionalYa o #VivaElParoNacional, han inundado las redes sociales, dando cuenta de ese poder de réplica que los jóvenes han sabido viralizar con el objetivo de hacer conocer su inconformismo con años de abandono y desidia por parte del gobierno. Se han generado símbolos de resistencia como el renombrar los sitios de encuentro de las movilizaciones: Parque de la Resistencia (Medellín), Puerto Resistencia (Cali) pero también con los compañeros caídos durante esta lucha como Lucas Villa. Por medio de las redes sociales, se ha podido denunciar la infiltración de agentes del orden público con el propósito de desprestigiar las marchas, causar vandalismo y agredir a los manifestantes, además de las provocaciones y desmanes del ESMAD y la complicidad de la Policía Nacional permitiendo que población civil armada atente contra nuestros jóvenes.



Captura de pantalla de Twitter de Celso Tete Crespo (2021)

Plataformas como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram, lejos de limitar los discursos de odio y comentarios que inciten a la violencia, no han actuado en tal sentido y, por el contrario, parece ser que filtran los contenidos que apoyan el paro. Ante este tipo de situaciones, los jóvenes han encontrado la manera de etiquetar sus numerales con otros que son tendencia mundial como los de K-Pop, para que estos pueden llegar a visibilizarse.

Se resalta como ejemplo de esa emergencia de nuevos formatos comunicativos y de gran impacto, el papel que jugó el lanzamiento de la serie “Matarife”, que marcó la agenda de 2020, emitida por WhatsApp, Youtube, Facebook, entre otras redes, un formato corto de gran circulación, ya que es seguida por millones de personas, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, en su primera temporada. Es una serie que visibilizó la relación de Álvaro Uribe Vélez, dos veces presidente de Colombia y quién maneja los hilos de poder en el gobierno de Iván Duque, con la alianza criminalidad-empresa-clanes políticos regionales. En la serie queda en evidencia la forma en que las élites criminales del país, en cabeza de una sola persona, se tomaron el Estado y lo convirtieron en su oficina particular, en su caja financiera, en su bastión de poder, conservando sus prebendas y privilegios a sangre y fuego. La serie se convirtió en un ejercicio de justicia moral que no pudo ser censurado, por la manera en que fue emitido y divulgado, e incluso ganó dos premios India Catalina (Redacción Entretenimiento Pulzo, 2021), esto a pesar de los múltiples ataques mediáticos, jurídicos y hasta delictivos, debido a las amenazas que sufrió su productor y creador, Daniel Mendoza Leal, lo que le exige vivir en el exilio. A inicios de julio de 2021 comenzó la segunda temporada, ahora titulada “Matarife, El Señor Masacre”, una serie bien documentada y visible gracias a las redes, pues esta no es proyectada ni comentada por los medios masivos.

Es de resaltar el trabajo de canales regionales como El Tercer Canal, nacionales y alternativos como Noticias Uno, que se emite en redes y, de manera especial, Canal 2 de Cali, en cabeza de su director Luis Alberto

Tejada, referente comunicativo en este paro nacional, al dar cuenta de la realidad que se vivía en las calles, el papel de los jóvenes, de las resistencias, de las primeras líneas y del uso excesivo de la fuerza: el paramilitarismo urbano. Su director se hizo acreedor al Premio Orlando Sierra al coraje periodístico (Redacción Semana, 2021). Todos estos medios compiten por la audiencia, con los medios empresariales y serviles al poder instituido; además, se financian gracias a la solidaridad y aportes de empresarios comprometidos y de la sociedad en general, por medio de sistemas como Vaki, entre otras múltiples formas de solidaridad. Otro gran logro son las transmisiones de los En Vivo, por Facebook u otras plataformas: gracias a ellas, se ha podido ver lo masivo que han sido las marchas, el comportamiento de los manifestantes, los colectivos artísticos y culturales, la población en diferentes facetas que acude a las marchas y plantones; así mismo, la violencia policial contra estas expresiones, todo ocultado o tergiversado por los medios de grandes conglomerados empresariales. Un medio alternativo como Kavilando, por ejemplo, junto al colectivo “Alianza Informativa” que logró articular más de 30 medios, ha transmitido desde el canal de Facebook #ElParoEnVivo, ratificando el papel que los medios alternativos han tenido en la difusión de estos días de lucha y resistencia, así como los espacios formativos como la Cátedra Internacional de Paz, emitida todos los sábados, para que desde los actores estratégicos se discuta sobre la realidad del país. Ejercicios como estos se multiplicaron en las redes, generando un ambiente formativo e informativo que incluso fue desplazando el interés en los medios anclados empresariales. Mantener esta práctica para que no se quede en el hecho del momento, sino que sea una memoria visual y digital que dé cuenta de este despertar, en el que los desaparecidos, los muertos, los que perdieron sus ojos son y serán parte de este movimiento.

La calle grita, otra manifestación que se potenció ante el control mediático totalizante de las grandes empresas, pintó las paredes en todas las ciudades del país, gracias a los colectivos grafiteros urbanos

tramitiendo un mensaje unánime por medio de distintas consignas, como Colombia Antiuribista, SOS-Nos Están Matando, Estado Asesino y Violador, Estado Genocida, Duque Asesino. Las calles convertidas en inmensos mensajes que se podían leer desde los helicópteros que de manera permanente rodeaban las manifestaciones, hostigaban, vigilaban y atacaban.



Fotos: Murales Medellín, Paro Nacional 2021. Tomado de grupos de WhatsApp



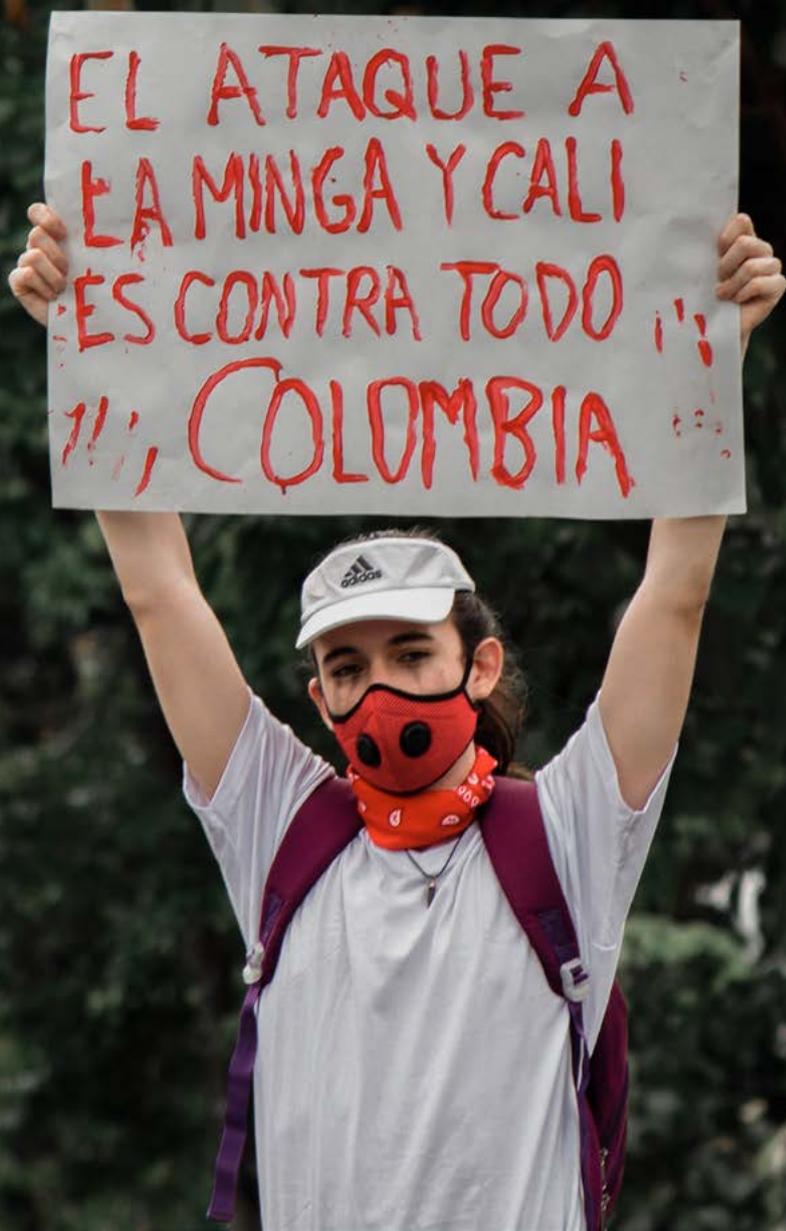
Fotos: diversas pintas realizadas durante el paro Nacional. Bogotá.

Se generó incluso una suerte de guerra por el paredón pintado, ya que militares, policías, funcionarios públicos, hasta la “gente de bien”, se unieron para tapar con gris cada pared pintada, cada mural, pero eso despertó mayor solidaridad y las pintas se multiplicaron en colores y mensajes, como una manera de apropiarse del espacio público aún no privatizado. Fueron pintadas las calles asfaltadas y los buses articulados en una expresión de arte, creatividad y mensaje político de insatisfacción y necesidad de cambio.



Fotos tomadas de grupo de WhatsApp. Fuerza Pública y “gente de bien” pintando de blanco y gris los murales de los jóvenes durante el paro Nacional.

4. El Suroccidente colombiano, ejemplo de resistencia



Si bien en todo el país se gestaron ejemplos de lucha y dignidad, queremos, en este capítulo, relacionar lo ocurrido en el Suroccidente colombiano, a modo de recorte de realidad, con lo que se replicó en todo el país como fenómeno emergente a seguir profundizando como ejercicio de lucha transformadora.

La categoría “estallido social” se popularizó a raíz de las movilizaciones en Chile, que se extendieron rápidamente desde la capital a otras ciudades entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Regularmente, hace alusión a la emergencia y continuidad de manifestaciones sociales en contra del gobierno, al que se acusa como responsable de la inequidad, la desigualdad social, el empobrecimiento y la violencia estructural. Cabe mencionar que

tanto en Colombia como en Chile las movilizaciones sociales de 2021 y 2019 se caracterizan por su magnitud e intensidad, y por el hecho de que las elites políticas dan repetidas muestras de incapacidad para comprender las causas de la presión popular (Guzmán-Concha & Díaz Pabón, 2021).

En Colombia, aspectos como las demandas colectivas de equidad y justicia social, las necesidades de escucha y la búsqueda de participación social de comunidades históricamente excluidas, derivó en una respuesta estatal violenta, de la cual emergieron enfrentamientos y, a menudo, vandalismo y graves disturbios en el orden público. La génesis de las protestas actuales puede encontrarse en la reedición inacabada de un sentimiento de descontento social y colectivo, que desbordó la capacidad de tolerancia -aguante- y pasividad normativa del pueblo, mismo que ejerció su derecho a la protesta como vía expedita de legitimidad de sus reclamos históricos.

En el suroccidente colombiano dicho estallido asumió particularidades que vale la pena retratar:

Como en todos los procesos de gran movilización social, se han producido hechos vandálicos, explicables en parte por las gravísimas condiciones de pobreza y hambre que viven numerosos sectores de la población. Sin embargo, la inmensa mayoría de las manifestaciones populares ha sido completamente pacífica (Centros Miembros de CLACSO [Colombia], 2021).

El 28 de abril, en horas de la madrugada, representantes del pueblo indígena misak –también distinguidos como pueblo guambiano– derrumbaron de su púlpito la estatua de Sebastián de Belalcázar que –de acuerdo con el pensamiento anticolonialista que caracteriza a varios pueblos indígena– se erigía en el parque que lleva su mismo nombre, a modo de representante del genocidio de múltiples pueblos indígenas. Conviene señalar, además, que a este derribamiento le siguió en Popayán el desplome de la estatua de Francisco de Paula Santander, la de Francisco Fernández de Contreras en Ocaña, y la de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá.

Así las cosas, para múltiples sectores sociales, la idea de que se elogiase un conquistador español alineado con la muerte y el pillaje de los pueblos, resultaba contradictoria y ofensiva, de tal forma que, en gran medida, su desplome actuó a modo de polvorín apuntador del descontento y la rabia colectivas, mismo que pasó de la reflexión a la acción contestataria, el reclamo reivindicatorio y la desobediencia en las semanas posteriores. Aunque este no es el único hecho que desata la movilización en el suroccidente colombiano, sí es posible considerarlo como uno de los que simbólicamente y socialmente da pie al sentimiento colectivo de disconformidad sociopolítica y que, fomenta a la vez, el impulso requerido por la minga indígena para unirse al paro nacional tras el asesinato de una de sus lideresas y el incumplimiento reiterado de las promesas del gobierno. En este tenor,

En el contexto del paro nacional, la llegada de la minga a Cali estuvo antecedida, por un lado, del asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Paz, acaecido en el departamento del Cauca; por otro, del derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar, el conquistador de los territorios del sur de Colombia y fundador de Cali. Dice la leyenda que sus huestes, dirigidas por los tenientes Juan de Ampudia y Pedro de Añasco, se enfrentaron en las goteras de Cali con diez mil indígenas dirigidos por el cacique Jamundí. En una batalla épica donde las flechas y las cerbatanas se enfrentaron al caballo y la espada, supuestamente, murieron dos mil jamundíes (Castellanos, citado por Arboleda, 1956, p. 20; Castillo, 2012, p. 378). Estos posibles y legendarios acontecimientos se transmiten a través de la historia oral indígena y, posiblemente, ayudan a comprender el porqué de la destrucción de la estatua del conquistador (Castillo Gómez, 2021).

Muchas personas, colectivos, comunidades, instituciones y jóvenes de distintas ciudades han participado en las protestas. Empero, en el suroccidente el descontento es mayor; es plausible considerar que las demandas puestas en escena a través de las protestas responden al disgusto social acumulado tras décadas de represión, corrupción, violencia, injusticia, desigualdad-inequidad social y pobreza, lo que suele impactar de forma directa a personas, grupos y comunidades, pero que afecta especialmente la calidad, expectativa y proyecto de vida de las nuevas generaciones.

Resalta el hecho de que dicho nivel de insatisfacción galopa el estallido social, que se afianza acorde a las condiciones sociopolíticas que caracterizan al país, como la corrupción, donde se ubica en el puesto 92 entre 180 naciones, mientras que, en indicadores de pobreza ocupa el puesto 41 situándose por debajo de Panamá, India y Honduras; además, es el segundo Estado menos pacífico de la región —superado por Venezuela— y el 140 más violento a nivel mundial entre 163 (Redacción La República, 2021; 2021; 2021)

Hay que agregar, además, el desconcierto social con el asesinato de líderes ya que, de acuerdo con cifras de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que lleva el año 2021 han sido asesinados 74 líderes sociales y 26 excombatientes firmantes del acuerdo de paz desaparecieron o fueron ejecutados (Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz, 2021).

A este panorama desalentador en el que se enmarcan las protestas, se suman los graves problemas en materia de derechos humanos que persisten de forma lineal, que perturban gravemente la percepción y vivencia de seguridad a todo nivel, y cuya concentración suele ser mayor en el suroccidente colombiano. En este contexto, se circunscriben también la impunidad en relación a las arbitrariedades del pasado por parte de los gobiernos de turno; el incremento de impedimentos y trabas a la restitución de tierras y las dificultades en las garantías de no repetición de los hechos victimizantes en las víctimas de conflicto armado; limitaciones a los derechos reproductivos, miseria, olvido estatal y aislamiento sufridos por las comunidades indígenas (Gutiérrez & Barbosa, 2021; Human Rights Watch [HRW], 2020).

Es importante indicar, que las inconformidades de la población valluna crecieron aún más bajo la administración del presidente Duque —señalado de títere o marioneta política del expresidente Uribe— de tal forma que, como fiel representante de la ideología de derecha uribista, personifica todo aquello que la sociedad colombiana rechaza (Calderón, 2021). Dichos aspectos, de amplia repercusión y repudio en los jóvenes del país y—por qué no—de la mayoría de colombianos, atizaron también la chispa de la rebeldía y desobediencia, de allí que, a la exigencia de retirar la nefasta reforma tributaria que afecta el derecho a vivir dignamente, fue planteada por el gobierno como única salida a la crisis socioeconómica, ambiental y política del país, se sumaron el repudio masivo hacia tres frentes: el proyecto de reforma a la salud; la idea de una nueva reforma pensional; el uso desmedido de los aparatos de fuerza (policía y ejército) antes, durante y después de las manifestaciones,

aspecto que fue confirmado por diversas instituciones y colectivos nacionales, así como organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Organización de la Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arciniegas, 2021).

En el suroccidente, al igual que en muchas regiones de Colombia, se perciben diversidad de resistencias, de manera que las personas confeccionan múltiples formas de resistir y de construir paz y aprendizajes. Dicho sea de paso, los jóvenes y colectividades admiten que en el paro no hay un centro regulador único de las acciones y entienden esto en dos vías: una, como defensa e independencia de orientaciones clientelistas que los utilicen como bastión de sus intereses políticos; y otra, como posibilidad de hallarse en apertura a la elaboración de propuestas propias que los representen, lo que implica dar continuidad al paro, a la vez que deconstruirlo o resignificarlo a partir de nuevas propuestas de participación social, como el uso del arte y la educación política en tanto dispositivos de resistencia derivados de las luchas sociales. De lo anterior se extrae que una gran parte de los jóvenes, colectivos y personas que resisten no se sienten representados por el denominado Comité Nacional del Paro (CNP) y por sus propuestas (Ortiz Cortés, 2021; Alguero, 2021). En consecuencia, el mantenimiento y reproducción de las manifestaciones tiene como objetivo desmontar esa lógica de concentración del poder que puede, en gran medida, linealizar la resistencia y ponerla a gravitar a favor del régimen.

Así las cosas, el paro nacional se caracteriza por policentrismos resistentes, en cuyo haber las protestas se lideran desde diferentes territorios y a partir de la pluralidad de identidades, andamiajes ideológicos y experiencias políticas que los diversos actores sociales imprimen a sus demandas, escenario en que los jóvenes juegan un papel de suma importancia. Las protestas también surgen como catalizador de la frustración colectiva, derivada de los extensos encierros y políticas económicas a los que fueron sometidos los vallecaucanos y que, en el entorno de una pandemia que aún no acaba, limita cada vez más las posibilidades de reconstitución de la economía.

Esta situación afecta especialmente las economías solidarias, microempresas y toda alternativa productiva derivada de pequeños emprendimientos. Tanto la crisis sanitaria como las medidas económicas del gobierno dieron un golpe mortal a la economía informal, de la que –por lo menos– 14 millones de colombianos subsistían antes de la pandemia (Bustamante, 2020). En otros términos, la juventud del suroccidente salió a marchar en medio de la intranquilidad derivada de la crisis económica y de salud (pandemia), y, a la vez, con el temor asociado a la persecución, señalamiento y vulneración de los derechos (Ortiz Cortés, 2021), escenario donde la violencia de Estado respondió en múltiples ocasiones con vehemencia, abuso de poder y exacerbación de la fuerza (Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica, 2021; Instituto de estudios para el desarrollo y la paz [Indepaz], 2021).

Según lo expuesto, la población fue víctima de la muerte por Covid-19, a la vez que la falta de estímulos al trabajo y el incremento e insatisfacción de las necesidades básicas de subsistencia provocó la emergencia de una crisis sociofamiliar e institucional intensa, que aumentó la exposición de las personas a la explotación laboral, el hambre y la miseria. Lo anterior fragiliza el lazo social y la poca credibilidad del gobierno y sus instituciones, a la vez que se empeoraron las condiciones de vida de las mayorías, lo que produjo en las comunidades y familias el paso de la vivencia a la supervivencia.

El gobierno de Duque, en el imaginario social y cultural de los jóvenes, no sólo representa la continuidad de la parapolítica asociada a Uribe, también constituye un proyecto neoliberal nocivo y recesivo que otorga “privilegios para los dueños de las finanzas y grandes empresarios y pretende que los trabajadores y trabajadoras y la población en general paguen por la crisis económica, agudizada por la pandemia, pero que venía de antes” (Centros Miembros de CLACSO [Colombia], 2021).

La juventud, a través del estallido social, reaccionó masivamente ante las adversas políticas de gobierno decretadas en la pandemia que, en vez de amparar el derecho a la salud, el trabajo y la libertad de expresión,

tendieron a someter al empobrecimiento a amplios sectores sociales (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, 2021):

(...) la movilización ha ido más allá del rechazo al proyecto de reforma tributaria. Se ha producido también un repudio masivo a las masacres y al asesinato permanente de líderes y lideresas sociales y de excombatientes de las antiguas FARC, que se producen a diario, sin que el gobierno tome medidas para frenarlos (...) El descontento se ha expresado también contra el manejo irresponsable y cínico de la pandemia por parte del gobierno nacional (Centros Miembros de CLACSO [Colombia], 2021).

En el Suroccidente y otras ciudades de Colombia, estas medidas motivaron el volcamiento a las calles, con el fin de frenar los embates de las políticas del empobrecimiento social, que “recaen sobre los más humildes ya de por sí muy castigados por la crisis económica agudizada por la pandemia del Covid-19 (Comité Directivo de CLACSO, 2021). Correlativamente, el 21 de abril las organizaciones sociales del Cauca, agrupadas en la Mesa Territorial de Garantías, denunciaron la grave y permanente y sostenida crisis humanitaria de la región, que a la fecha sigue provocando desplazamientos forzados, asesinatos, masacres, persecuciones, despojos, y el terror y confinamiento de comunidades enteras.

El reclamo contra del gobierno nacional por parte de las comunidades lideradas por el movimiento indígena, tiene que ver con la falta de reconocimiento, desinterés e irresponsabilidad en el abordaje de la guerra y el exterminio que el conflicto armado acarrea en sus territorios, lo cual se traduce en persecuciones y muerte de líderes y lideresas, al tiempo que, en “más masacres, más amenazas, esto se agudizó a consecuencia de la crisis mundial de salubridad, en medio de la cual se acentuó la creciente violencia territorial” (Consejo Regional Indígena del Cauca [CRIC], 2017).

En gran medida, la cercanía ideológica entre las comunidades rurales y urbanas vallecaucanas y la historia de apoyo y movilización de las comunidades indígenas impulsaron, en el Valle del Cauca, la adherencia de más comunidades a la minga indígena que ya avanzaba hacia Cali. Vale mencionar que la minga indígena se ensambla a las manifestaciones colectivas en apoyo al paro nacional, constituyendo un escenario propicio para hipostasiar en el marco del paro la realidad sociopolítica, cultural y antropológica de las comunidades que representa, así,

(...) entre las principales exigencias de la minga indígena se encuentra el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz de 2016, especialmente respecto a las garantías de seguridad para cesar los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC. También rechazan las políticas de militarización y mantienen su postura contra el fracking y las fumigaciones con glifosato, que el gobierno busca reanudar (Arciniegas, 2021).

Gobierno y “gente de bien” en contra de la Minga indígena

El 9 de mayo, civiles armados dispararon en contra de 12 integrantes de la Minga Indígena, que llegó a la ciudad de Cali con el fin de apoyar el Paro Nacional y acompañar a los jóvenes en resistencia, agrupados en las llamadas primeras líneas. La Minga fue atacada por personas civiles autodenominadas como “gente de bien”, quienes la acusan de bloqueos al sur de la ciudad y de desmanes en contra de sus negocios, vehículos y urbanizaciones.

Los autoproclamados “gente de bien” entienden que quienes no siguen sus reglas son “gente del mal”. Conviene señalar, además, que “quienes se llaman así se piensan más que los demás por tener más dinero, vivir en un sector privilegiado en nuestras segregadoras ciudades, poseer algo de poder o influencias” (Velásquez Gómez, 2021), y se dicen

a sí mismos respetuosos extremos de la ley y el orden, poniendo en escena el poder económico, bélico y político para distinguirse como implacables, invulnerables y en legitimidad de defender sus dominios a sangre y fuego, lo que consideran su sacrosanto derecho.

El enfrentamiento que según “la gente de bien” se dio a razón de lo escaso de la gasolina, la falta de alimentos y las deficiencias de movilidad a causa de los bloqueos, sucedió en Ciudad Jardín, uno de los barrios más acaudalados de Cali, y dejó ocho indígenas heridos a causa de los disparos de ciudadanos armados desde camionetas -con placas cubiertas-, aun que algunos abandonaron sus vehículos y dispararon a pie. Todo sucedió cuando los indígenas regresaban a sus resguardos, mismos que aseveran que “fueron atacados por personas presuntamente respaldadas por la Policía, aunque las autoridades acusan a miembros de la Minga de disparar en zonas residenciales y de irrumpir en algunas casas” (Arciniegas, 2021). A medida que el enfrentamiento se focalizó en contra de la Minga, los diversos actores sociales escalaron la violencia, al tiempo que habitantes, usando sus vehículos, bloquearon algunas de las vías de Ciudad Jardín, a fin de imposibilitar el paso de la Minga indígena.

Es importante mencionar que la representación de la Minga, en el imaginario político, guarda relación con un movimiento de protesta enfocado en la reivindicación de los derechos históricos de sus comunidades, políticamente segregadas por los gobiernos de turno y por los ataques de los actores armados en sus territorios. En realidad, la Minga indígena se creó en el sur de Colombia a finales del siglo pasado, con la finalidad de defender y demandar el cumplimiento de sus derechos, por la demanda de soluciones reales ante los problemas económicos, de salud, educación y de seguridad –orden público– en cuyo caso luchan por construir colectivamente un país más democrático, descentrado del poder federalista, en el que la paz tenga sentido, al igual que la equidad y las oportunidades de desarrollo.

De allí la consonancia con las protestas en Cali y en todo el país. En este sentido, la defensa adquiere tres vías consonantes con las protestas

de los movimientos del suroccidente colombiano: defender la vida y los derechos humanos, defender el territorio y la paz, protestar y derribar el modelo económico y las políticas que empobrecen la vida y eliminan a las comunidades. En este último aspecto, demandan que la violencia encarnada a través de los actores armados se ha extendido a sus territorios ante la mirada cómplice del gobierno, de tal forma que son víctimas del genocidio, así como de la pobreza.

Aun cuando son tildados por el gobierno y varios sectores de aliados de la insurgencia e infiltrados de la subversión y el narcotráfico, la Minga estuvo y sigue en pie de lucha apuntalando el paro nacional, aun cuando entre y a través de éste se instalan y promueven tres miedos: el contagio y muerte por coronavirus; la violencia por efecto de la represión policial; y la muerte o la desaparición a causa del terrorismo de Estado.

Entre las ciudades donde mayor ejercicio de resistencia territorial se presentó fueron Cali, Buga, Jamundí y Tuluá. Es por ello por lo que dedicaremos un apartado especial en este libro sobre lo ocurrido en Cali como recorte de realidad, pues en muchas regiones del país se presentaron importantes procesos de movilización sostenida, una ira acumulada ante tantos malos gobiernos.

Cali, “sucursal del cielo”

La ciudad de Cali es una de las más importantes del suroccidente de Colombia, y fue en sus calles donde se consolidó el epicentro o principal referente del levantamiento popular en el país. Posiblemente, esto se dio ante las dramáticas situaciones de empobrecimiento generalizado, producto de múltiples factores, entre los que se encuentran la desindustrialización y el copamiento de dinámicas ligadas al narcotráfico en la ciudad.

Según las cifras del censo de población de 2018, la ciudad cuenta con 2.228.000 habitantes y producto de su historia como centro de recepción de población migrante de otras regiones del país –Nariño, Cauca, Costa Pacífica, entre otros–, se ha convertido en una de las ciudades con la

mayor tasa de concentración de población negra de América Latina (Castillo Gómez, 2021), quienes muchas veces padece la discriminación y exclusión racista en la ciudad.

Las cifras de desempleo en Cali y su Área Metropolitana (Palmira, Yumbo, Jamundí, Candelaria) para enero de 2021 alcanzaban el 17,3% (Castillo Gómez, 2021), con un agravante; a febrero del 2021, los jóvenes desempleados llegaron a representar el 25,8% de la población y las mujeres jóvenes desempleadas alcanzaron una tasa de 31,9%, de igual manera la pobreza monetaria aumentó de 21,4% a 36,6% entre 2019 y 2020 (Ortiz Quevedo, 2021).

Estas cifras responden—más allá de la crisis desatada por el Covid-19— a un proceso histórico de desindustrialización de la ciudad, anclado al proceso de inserción del país al modelo neoliberal con la apertura económica de los años 90, que reorientó la economía nacional hacia actividades especulativas financieras y productivas dependientes del extractivismo de petróleo, carbón y gas —profundizado durante la bonanza minero-energética de 2007 a 2014—, como también a la agroindustria y monocultivos que transforman el uso del suelo a prácticas de cultivo de un solo uso —como el de la palma africana en la región del Darién o la caña de azúcar en el Valle del Cauca—; así mismo, se pueden ver los monocultivos de coca para el narcotráfico en regiones como el norte del Cauca o Nariño.

El proceso desindustrializador en Cali llevó a la reconversión económica de la ciudad, la cual pasó de ser una urbe con vocación industrial a una con vocación de servicios y turismo, como también de negocios inmobiliarios (Arias & Mondragón, 2021). Este proceso llevó a la destrucción de miles de empleos, ejemplo de esto fue lo ocurrido con el cierre de la empresa multinacional Cadbury-Chiclets Adams en el 2015 que llevó a una fuerte lucha sindical por el derecho a mantener sus trabajos ante la masacre laboral que finalmente dejó en la calle a más de 700 empleados (Gutiérrez, 2015).

Sumado a lo anterior, es necesario decir que la ciudad desde los años 50 del siglo pasado ha sido uno de los principales centros del narcotráfico del país, consolidado con fuerza en los años 80 producto del denominado cartel de Cali, que, aunque desmantelado, en la actualidad se presentan múltiples estructuras descentralizadas que controlan el tráfico de drogas y armas (Castillo Gómez, 2021), pues al estar geográficamente conectada con el sur del Valle, norte del Cauca, y ruta hacia el Pacífico colombiano, es una ciudad integrada en la dinámica de la violencia de este corredor estratégico, convirtiéndose muchas veces en centro de lavado de dinero y generando en muchos de sus habitantes la denominada “cultura traqueta” (Arias & Mondragón, 2021).

. En el presente levantamiento mostró sus dientes de paramilitarismo urbano disfrazado de “gente de bien”, como lo ocurrido en Ciudad Jardín, uno de los barrios de clase alta de la ciudad, tras el accionar de varios habitantes del sector, que con fusil en mano salieron a las calles a disparar contra los manifestantes y especialmente contra la Minga indígena, siendo así rebautizado por la ciudadanía como Ciudad Bacrim, indicando así el peso que tiene la economía ilegal en las dinámicas de acumulación de capital (Sanabria Duque, 2021).

Juventud precarizada

Con el transcurso de los días, en la calle se abriría paso un nuevo actor político y social popular, por fuera de los movimientos y organizaciones sociales y políticas tradicionales, que tomaría la cabeza del levantamiento en las calles, con la juventud como principal protagonista. Una juventud que padece la misma realidad de millones en el mundo, en donde el no futuro reina y se impone como norma, mientras que la pobreza, miseria y exclusión es el diario vivir. Así lo evidenció en 2020 el estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las tendencias mundiales de empleo para jóvenes, en donde se estima que la población juvenil a nivel mundial es de 1.273 millones, y que siguiendo a Sanabria Duque (2021):

(...) 429 millones son trabajadores y trabajadoras (33,7% del total de la población), mientras que 68 millones son desempleados y desempleadas, es decir, que están buscando empleo activamente, y 41 millones son potencial fuerza de trabajo, por estar transitando de la etapa de entrenamiento hacía su primera solicitud de empleo, lo que significa que el 42 por ciento de jóvenes están directamente relacionados con el mercado laboral. De los 735 millones restantes, 509 millones (40%) son estudiantes, mientras que 226 millones (17,8%) pertenecen al grupo denominado ni-ni, ni estudian ni trabajan, cifra en sí misma escandalosa. Pero, lo más grave es que de los pertenecientes al mundo laboral, el 77% (330 millones) están en la informalidad, es decir, que al menos la mitad de la población juvenil está precarizada.

En Colombia, la situación no es diferente, pues según el Dane, los jóvenes entre 14 y 26 años suman 11 millones, y para 2019 la población estudiantil e incluida en el mercado laboral sumaban, cada una, el 39 por ciento, mientras que el 22 por ciento correspondía a los que ni estudian ni trabajan, con el agravante que en el segundo trimestre de 2020 esta población ascendió hasta el 33 por ciento (Sanabria Duque, 2021). Y como se señaló en párrafos anteriores, en Cali la situación de los jóvenes es grave: 25,8 por ciento es la tasa de jóvenes desempleados y 31,9 por ciento la de mujeres jóvenes desempleadas.

Corazones latiendo de imaginación y resistencia

Fueron estos jóvenes a quienes les robaron el futuro, que padecen en carne propia la precariedad, pobreza, miseria y exclusión, quienes con imaginación y corazón posibilitaron y construyeron un escenario de resistencia popular sin precedentes en la ciudad de Cali—y posiblemente en Colombia—, donde surgieron espacios autónomos de dialogo desde la igualdad y la horizontalidad, que lograron tejer comunidad y buscar caminos para enfrentar las dramáticas situaciones que viven (Zibechi,

2021). Una experiencia asombrosa que se mantuvo por dos meses y que al final se transformó en un nuevo ejercicio denominado “barrio adentro”, del que hablaremos más adelante.

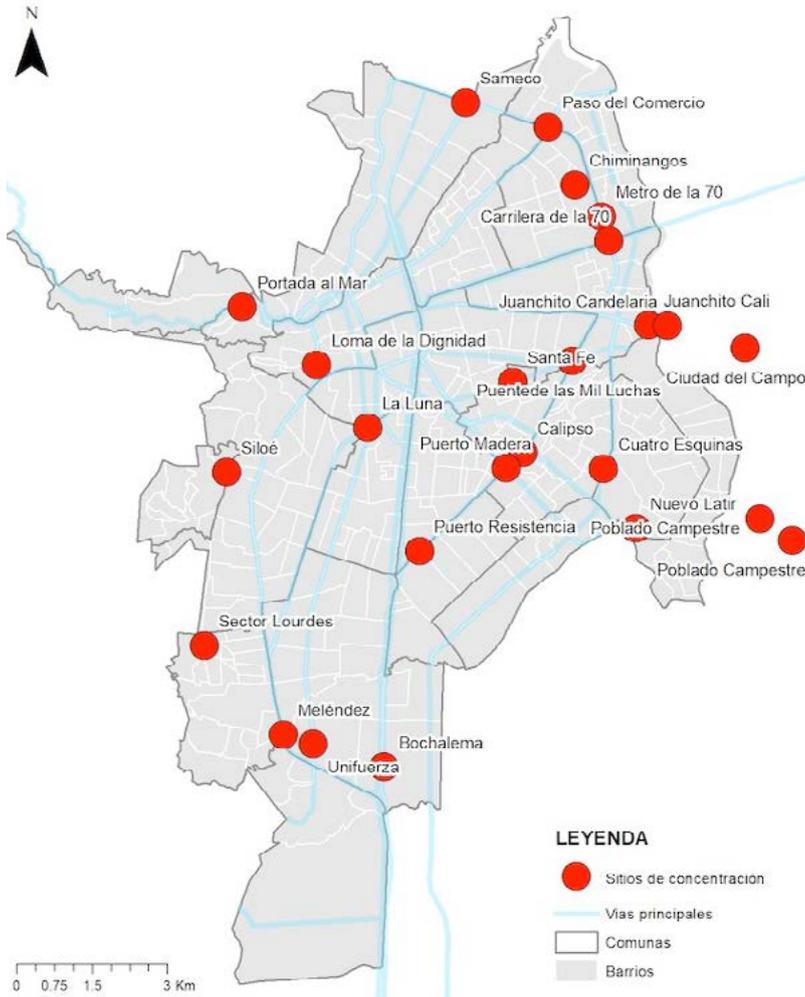
En mayo, tuvimos la oportunidad de realizar un primer viaje a Cali para conocer en carne propia lo que estaba sucediendo en las calles. Habían pasado dos semanas del inicio del levantamiento. Desde que nos bajamos del avión sentimos la tensa situación en la que estaba la ciudad, no había buses de servicio público, por lo que la única alternativa para salir del aeropuerto era tomar un taxi que cobraba no menos de 60 mil pesos.

Transitando la carretera pudimos ver los vestigios de lo que anteriormente fueron barricadas, conformadas de postes de luz, partes de árboles, y cualquier elemento que sirviera para taponar la vía. El asfalto estaba lleno de piedras de todos los tamaños, vidrios rotos, y rastros de lo que habían sido hogueras, dejando claro que estas avenidas habían sido escenario de una fuerte confrontación. La ciudad se encontraba completamente bloqueada en sus vías principales.

Instalados en Cali, logramos recorrer 10 de los 25 puntos de resistencia que se conformaron a partir del 28 de abril, principalmente en los sectores más populares y empobrecidos de la ciudad (Ver mapa). Cada punto tenía su propia dinámica y forma de organización arraigada al barrio o sector donde se encontraba; en ellos confluía una diversidad de jóvenes habitantes de las barriadas populares que podrían considerarse a grandes rasgos como: desclasados, desempleados, en rebusque permanente, integrantes en no pocas ocasiones de las llamadas pandillas, los siempre tachados como “ñeros”, “viciosos” o “ladrones”, integrantes de barras futboleras, como también, estudiantes universitarios, trabajadores informales, profesionales sin oportunidades laborales, artistas, deportistas, activistas sociales y comunitarios, entre otros (Martínez, 2021).

Mapa: Puntos de resistencia, barricadas y bloqueos, Cali mayo 13 de 2021

PUNTOS DE RESISTENCIA, BARRICADAS Y BLOQUEOS CALI, MAYO 13 DE 2021



Fuente: Castillo Gómez (2021)

Lo que pudimos ver y conocer a través del diálogo informal y las entrevistas, es que para mantener estos puntos durante dos meses, lo que sucedió en las barriadas fue que la diversidad de jóvenes se vinculó

directamente con vecinos y vecinas, y así nació un sólido tejido social que significó el surgimiento de ollas comunitarias para la alimentación de todas las personas de manera gratuita, huertas urbanas, agendas de programación de eventos culturales como presentaciones musicales, obras de teatro, circo, clubes de lectura, clases de danza, cineclubes, campeonatos de fútbol y otros deportes barriales. Así mismo, la comunidad construyó centros de salud populares, en donde personas que tenían conocimientos básicos de atención médica (sin ser del campo de la salud necesariamente), comenzaron a atender heridos en medio de las manifestaciones y ataques represivos por parte de la fuerza pública; destacando, por otro lado, el papel fundamental que jugaron las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación alternativos como Canal 2, para visibilizar lo que sucedía en el día a día.

Toda esta experiencia comunitaria llevó a que en los barrios comenzaran a gestarse escenarios asamblearios de discusión de la sociedad, en donde se organizaban las exigencias que se tenían en medio de la coyuntura, como también se coordinaban las tareas y acciones por realizar en los puntos de resistencia, así mismo se planteaban las diferencias y dificultades que existían entre las personas y se tomaban decisiones colectivamente. Sin duda, un ejercicio que debe sistematizarse de manera rigurosa y que no es posible ahondar en el presente texto.

La coyuntura marcó un nuevo ejercicio de habitar y reapropiar la ciudad desde otro lugar, esto llevó a una resignificación de nombres y espacios en Cali, por tanto, lugares como el antiguo Paso del Comercio se transformó en el Paso del Aguante, Puerto Rellena se volvió Puerto Resistencia, el Puente de los mil días ahora es Puente de las mil luchas, la tradicional Loma de la Cruz se rebautizó como Loma de la Dignidad. Diversos Comandos de Atención Inmediata –CAI– de la Policía fueron convertidos en centros culturales o bibliotecas populares, en donde el acceso al arte y otros saberes era completamente gratuito, como también fueron surgiendo experiencias de economías solidarias basadas en el

trueque. Algunos de los casos más emblemáticos son el de la biblioteca Nicolás Guerrero y la biblioteca de Puerto Resistencia.

También es necesario mencionar que, en medio del levantamiento, cayeron símbolos coloniales como la estatua de Sebastián de Belalcázar, y se erigieron nuevos de carácter popular como el (anti)monumento puño “Resiste”, creado de manera comunitaria y con un altísimo nivel simbólico y de memoria colectiva (Periódico Desde Abajo, 2021; 2021), como también el monumento a la olla comunitaria, ambos ubicados en Puerto Resistencia. La ciudad se transformó y las paredes de avenidas y barrios fueron pintadas de muchos colores, con murales y grafitis de gran calidad, en donde se denunciaban las constantes violaciones de derechos humanos, como también se expresaban los anhelos y sueños de la sociedad movilizada. Estos murales fueron borrados por personas “de bien”, y algunas supuestamente pagas, lo que llevó a que días después del intento de apagar los colores, se volviera a convocar una jornada de “pintatón” para volver a pintar las calles, abriéndose así una constante disputa por el espacio público en la ciudad.

La reacción del establecimiento para contener el levantamiento popular en Cali y en el resto del país, fue el tratamiento de guerra a la protesta social, vista como parte del repertorio del “enemigo interno”, lo que implicó un tratamiento contrainsurgente por parte del Ejército y la Policía (Cruz Rodríguez, 2021). Violaciones sexuales, mutilaciones oculares, desapariciones forzadas, asesinatos, centros de tortura, descuartizamiento de cuerpos, allanamientos, militarización de las calles y despliegue de múltiples fuerzas especiales contraguerrilla y paramilitares, fue parte de lo que tuvieron que vivir los habitantes de los barrios populares de Cali durante casi dos meses.

Lo que probablemente no tenían previsto desde el establecimiento, es que muchos de quienes salieron enfurecidos en medio de las barricadas y explotaron de indignación, cargaban en sus cuerpos y vidas la rabia constante de la violencia estructural que padecen los marginados, excluidos y empobrecidos, que nunca han tenido oportunidades para

una vida en dignidad, y que en este escenario muchos no tenían nada más que perder, salvo la vida. Así mismo quienes saltaron a defenderse del actuar desmedido de la fuerza pública, eran jóvenes que en algún momento de su vida fueron obligados a prestar el servicio militar obligatorio y que al salir de allí tenían conocimientos para organizarse en medio de una confrontación, por tanto, no era extraño que incontables jóvenes perdieran el miedo absoluto a enfrentarse con Policía, militares y paramilitares. Adicional a esto, en lo que pudimos conversar con quienes estaban en la primera línea, es que todo el tiempo han tenido que escuchar disparos (“taztazeo” en sus palabras), pues en los barrios populares es el diario vivir con la brutalidad policial, la presencia de pandillas y “oficinas” que manejan las dinámicas delincuenciales.

Primeras Líneas

Uno de los principales actores que surgió en medio de la coyuntura fue la denominada primera línea, una expresión generalmente juvenil popular que confrontaba con piedras y escudos artesanales a la fuerza pública y a los paramilitares que atacaban constantemente a la sociedad movilizada, generando así una finalidad de cuidado de la población y sus ejercicios comunitarios desarrollados en diversos puntos de resistencia.

Este ejercicio organizativo no debe verse como algo homogéneo ni en Cali, ni en el resto del país, pues nace de manera diversa en cada barrio y quienes la integran deciden autónomamente participar en ella; así mismo, surge por fuera de los movimientos sociales tradicionales de izquierda, como de escenarios políticos articulados al paro nacional como el CNP. Sin embargo, podrían verse como formas organizativas urbanas de autoprotección que con el paso de los días fueron conociendo las experiencias de las guardias indígenas, campesinas y cimarronas. Adicional a esto, es una experiencia organizativa que cuenta con un tejido social territorial que ayuda a mantenerlo a lo largo de los días, por tanto, detrás de la primera línea hay múltiples líneas de apoyo (salud, comunicación, alimentación, entre otros), que mantienen a quienes

están al frente de la confrontación, del mismo modo es un ejercicio que surge con aprendizajes de lo que ven en redes sociales y en la web, allí aprendieron estrategias de defensa, siguiendo las luchas internacionales de Chile, Hong Kong o Francia.

Aunque no existe aún un escenario consolidado que aglutine a todas las expresiones de primeras líneas a nivel nacional, ya se van tejiendo mecanismos de comunicación (Grupo Kavilando, 2021) y coordinación a nivel local: un ejemplo claro de esto es la Unión de Resistencias Cali-Primera Línea Somos Todas y Todos, que el 10 de julio de 2021 realizó su primera asamblea que definió conformarse como un nuevo movimiento social en la ciudad.

Puerto Resistencia, escenario de libertad



Foto: Univalle Unida (2021).

Sin duda, el lugar que más nos sorprendió en nuestro recorrido fue Puerto Resistencia (PR), uno de los puntos más consolidados por su organización y potencia, un ícono que se convirtió en referente a nivel nacional con visibilidad internacional. El antiguo “Puerto Rellena” es un sector popular fundado en la década de 1960 por personas empobrecidas, muchas provenientes de las zonas rurales del Cauca y Valle del Cauca,

en su huida de la violencia bipartidista desatada en el país posterior al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, y que en su urgencia de techo decidieron tomarse los terrenos para construir sus viviendas. Uno de los barrios insignia de esta lucha fue el bautizado como Mariano Ramos (Gómez, 2021).

Este icónico punto se ubica dentro del distrito de Aguablanca, en un paso estratégico del oriente de la ciudad donde confluyen varias vías principales que conectan múltiples barrios, incluida la Avenida Simón Bolívar que enlaza el norte y sur de Cali (Hernández Lara, 2021). En el sector habitan diversos actores sociales de la ciudad popular, por tanto, hoy no es extraño ver la presencia de “pandillas”, “barras bravas”, consumidores de sustancias psicoactivas, “oficinas de cobro”, vendedores informales, como también presencia de organizaciones comunales, sociales, eclesiales y comunitarias (Martínez, 2021).

Lo sucedido a partir del 28 de abril en PR no fue espontáneo, sino que es producto de varios años de articulación de organizaciones sociales nuevas y de vieja trayectoria en el sector, así como la vinculación de los habitantes de estos barrios —trabajadores independientes, obreros, estudiantes, madres de familia, entre otros— a un proceso comunitario, que el 21 de noviembre de 2019 manifestaron su inconformismo, erigiéndose como uno de los escenarios de organización juvenil popular más importante de la ciudad y en referente para el encuentro social, constituyéndose así como el punto de concentración más grande de Cali, superando cualquiera de las plazas públicas que tradicionalmente sirvieron como escenario de encuentro de las movilizaciones sociales (Hernández Lara, 2021).

Puerto Resistencia, a partir del 28 de abril, materializó un nuevo tipo de ejercicio organizativo en las ciudades, pues logró consolidar una dinámica que articuló la realidad de los barrios con todos sus matices sociales y económicos, para crear un escenario de resistencia popular basado en la horizontalidad, en donde todas las personas tenían claro que nadie estaba por encima de nadie y nadie mandaba a nadie; un

ejercicio comunitario que llegó al nivel de no tener líderes individuales visibles, sino que se fundamentó en vocerías colectivas que iban siendo rotativas.

La resistencia popular de PR consolidó un escenario de autonomía, en donde la libertad y autocontrol comunitario generaron que centenares de jóvenes diversos y con múltiples experiencias de vida, convivieran día y noche durante dos meses, llegando así a una distribución de tareas para el día a día y generando acuerdos o “normas” de convivencia colectiva. Por tanto, jóvenes que podrían haber sido vistos como un riesgo de inseguridad, en el espacio de libertad se comportaban de otra manera y eran quienes brindaban seguridad a los vecinos y vecinas (Periódico Desde Abajo, 2021). De igual manera no se presentaban peleas o golpes entre las diversidades allí reunidas, no estaba permitido el hurto—aunque entendían que más allá de PR los robos no dejaban de ocurrir porque el pueblo está hambriento— (Martínez, 2021); los unos cuidaban de los otros, llegando al punto que personas de barras futboleras o pandillas opuestas, convivieron en una misma barricada permanentemente.

El control de los barrios de PR era absoluto de los jóvenes, había múltiples barricadas con integrantes de la primera línea vigilando cada entrada y cada calle del sector, eran estos jóvenes (hombres y mujeres), quienes sabían quién entraba a sus calles, pues tenían comunicación interna permanente a través de radios y celulares. La comunidad del sector muchas veces abrió las puertas de sus casas para que los jóvenes entraran a bañarse, prestaron sus cocinas para preparar los alimentos, ayudaron en las ollas comunitarias, avisaron cuando venía la fuerza pública y salieron a respaldar a los jóvenes en las noches de terror, cuando los gases lacrimógenos invadían las casas y los disparos de bala no dejaban de crujir contra la sociedad movilizada.

Fue tal la organización que lograron en Puerto Resistencia, que llegaron a tener la capacidad para formar a muchos jóvenes en primeros auxilios y respaldar a los otros puntos de resistencia de la ciudad, enviando primeras líneas, insumos y personal médico, alimentación,

entre otro tipo de apoyos. Muchas personas con las que pudimos conversar nos decían que se alimentaban mejor en PR que en sus casas, que habían encontrado un techo y una familia con quien compartir las alegrías y penas.

Esta comunidad construyó nuevos referentes de vida que rompen con la idea del individualismo, y en su trajinar moldearon la cultura de la cual son producto, dándole base a nuevas simbologías y referencias para la ciudad y el país, como quedó plasmado en “Resiste”, el (anti) monumento con el que celebraron para no olvidar las semanas de lucha, con sus muertos, con sus referentes de resistencia, con sus significantes de futuro. Sin duda, lo ocurrido en Puerto Resistencia fue una experiencia fugaz de otro mundo posible, que demostró la posibilidad de gestar una democracia directa, participativa y asamblearia.

“Barrio adentro”

Después de dos meses de permanentes bloqueos y puntos de resistencia en la ciudad, los jóvenes y comunidad en general comenzaron a sentir el desgaste de la confrontación con la fuerza pública. Los muertos se contaban por decenas y la impunidad reinaba; el apoyo conseguido por la ciudadanía comenzaba a decaer; los puntos de resistencia se iban debilitando; los ataques del establecimiento cada vez eran más violentos, llegando a implementar operativos de hasta mil hombres fuertemente armados para desalojar las vías. Toda esta situación llevó a un replanteamiento de estrategia de los jóvenes y las comunidades aún vinculadas a los puntos de resistencia, por tanto, de manera colectiva y autónoma en cada espacio, fueron tomando la decisión de pasar de los bloqueos y las barricadas a un ejercicio en los barrios para construir y fortalecer el tejido comunitario, denominándolo como “barrio adentro”.

A finales de junio, pudimos presenciar algunos ejercicios de cierre de puntos de resistencia y entrega a la comunidad, como el de Calipso –Apocalipso– y el de la Virgen de la Resistencia en el barrio Andrés Sanín. También pudimos conocer el avance del ejercicio de “barrio adentro” en

Siloé. Los cierres de los puntos eran eventos cargados de sentimientos cruzados, había alegría, tristeza, desesperanza, esperanza y mucha incertidumbre por el futuro cercano. En el cierre del punto de “Apocalipso” participaron diferentes delegaciones de otros puntos de resistencia de la ciudad, hubo presentaciones musicales y presencia de voceros y voceras de Uniresistencia, Metro Resistencia, Meléndez, Portada Resiste, Loma de la Dignidad, Puerto Resistencia, entre otros. Jefferson, vocero de Portada Resiste, dio un mensaje en medio del evento a todo el barrio, en el que quedó plasmada la ilusión de futuro y la potencia de lo que esperan que venga en el corto plazo:

“Estos enfrentamientos callejeros que se han dado, no han sido más que el despertar de una generación que se ha visto toda su vida gobernada por el mismo sistema político, y el día de hoy estamos construyendo un nuevo poder, un poder popular fundamentado en las asambleas populares y ojalá se proyecten como un cabildo abierto, para que desde allí empecemos a concretar los planes, nuestras ideas y empecemos a elevarla a organización popular. Porque lo que pasó el 28 fue de manera espontánea, imagínense ustedes la capacidad que tendría un ataque de esos de manera organizada, imagínense ustedes la capacidad de movilización que tenemos si unificamos la fuerza en base a propuestas concretas de país. Eso de los vándalos que destruimos la ciudad no es cierto, revisen que atacaron: los CAI donde torturan y violan gente; los centros comerciales; los bancos que embargan a los pobres; la Dian que mal invierte nuestros impuestos; en general todo lo que representa la institucionalidad y todo lo que representa un Estado que durante décadas no ha respondido a las necesidades de la gente, es por eso que la invitación hoy es a que sigamos asistiendo a los espacios asamblearios, a que no dejemos morir la movilización que se ha construido a partir de los bloqueos, porque lo que está pasando hoy es un simple repliegue,

más no es un apagón y esperamos que en el futuro nos volvamos a ver en las calles enfrentando de nuevo la política de terror que nos han intentado instaurar estos dos meses”.

Por su parte, el evento de cierre del punto de la Virgen de la Resistencia fue un escenario que aglutinó principalmente a la comunidad del barrio, quienes se encontraron en medio de la olla comunitaria, campeonatos deportivos y actividades para niños y niñas. Allí, Emer, una joven de Primera Línea nos contó las razones para entrar al ejercicio de “barrio adentro”:

“Ellos quieren ganar todo con guerra, nosotros no queremos ganar con guerra, queremos llegar a acuerdos, pero para eso necesitamos que nos escuchen; si no nos dejan hablar y nos atacan siempre, ¿cómo vamos a poder expresar nuestras inconformidades? Nos tildan de vagos y no nos dan la oportunidad de estudiar o trabajar. Nosotros no queremos nada regalado. Con “barrio adentro” la primera línea sigue, no se va, persiste porque queremos un cambio radical, un cambio que se note. Ahorita nuestra lucha será a partir del diálogo, para que nos escuchen desde el gobierno y tengamos garantías a los acuerdos a los que lleguemos”.

El ejercicio de “barrio adentro” en Siloé, llegó después de 43 días de permanecer día y noche en el punto de bloqueo y recibir violentos ataques de la Policía, Sijin, Goes y Esmad. De manera autónoma, la comunidad y los jóvenes decidieron desbloquear las vías e irse a construir el ejercicio comunitario por fuera de la confrontación, fue así como en el barrio Brisas de Mayo muchos jóvenes decidieron tomarse el centro comunitario del sector para recuperarlo y transformarlo en un espacio apto para la realización de eventos culturales. Cuando conocimos este ejercicio, la comunidad estaba pintando el espacio con sus propios

recursos y proyectaban un cronograma de actividades por realizar en el mediano plazo.

Lo cierto es que, el levantamiento que presenciamos quedará marcado dentro de la memoria de los pueblos y de esta generación que en el corto tiempo tendrá que enfrentarse al desafío del futuro y a la urgente construcción de otra sociedad, de otro mundo posible.

5. Reflexiones finales, a modo de conclusiones abiertas



Algunas características que marcan este momento histórico de 2021

Se cuestionó el orden establecido. Estas movilizaciones de manera contundente cuestionaron los referentes simbólicos colectivos sobre los que —se supone— se ha construido esta sociedad, este sistema. Se pidió replantear la libertad, la equidad, el respeto, la democracia, entre otros valores que se predicaban como sustento del Estado, las instituciones y la sociedad como tal, pero que en lo concreto no existen o son violentados constantemente, un profundo cuestionamiento al estado de cosas tal como hoy existen, un profundo cuestionamiento de orden ético.

Se evidenció un sistema de muerte y un gobierno criminal. Antes de llegar la pandemia, los niveles de pobreza crecían, así como la desigualdad, y el conflicto armado, aún después de haberse firmado un Acuerdo de Paz en 2016, el despojo de las tierras continuaba, la pandemia evidenció y profundizó estos males, así como una mayor desigualdad, hambre y exclusión; un futuro incierto para la gran mayoría de jóvenes que ven cerrarse las posibilidades de un futuro digno, fue quedando en evidencia que el mal proviene de un sistema económico, político y social de muerte, inequitativo, desigual. A la par, gracias a múltiples informes sobre la manera como el Estado trató estas protestas, haciendo uso desmedido de la fuerza, articulándose con población civil para atacar y asesinar manifestantes, quedó en evidencia esa alianza entre criminalidad, clanes políticos y sectores empresariales anclados al poder como la garantía de su estatus quo, ese contubernio que no está dispuesto a ceder el control, no negocia y por el contrario profundiza el mal (Vallejo Duque & Insuasty Rodríguez, 2021).

Se cuestionó al mismo movimiento social y sindical. Estos jóvenes movilizadas, no solo cuestionaron el orden establecido institucional, sino también al movimiento social, popular sindical, exigiendo coherencia, apertura mental, escucha, comprensión de las nuevas

realidades, de los nuevos sujetos de lucha. Exigiendo capacidad de articulación, de adaptación a los llamados y reivindicaciones sociales, no limitar sus reclamos a grupos reducidos de la sociedad, sino movimiento, cambios de fondo, de sentido, de formas de liderazgo, dejar de lado la lógica sectorial que rompe con la unidad de los procesos de lucha y cambio; e hizo un fuerte llamado a la determinación en la lucha por cambios reales y de fondo, promoviendo un llamado a despertar a ese sindicalismo domado por la guerra sucia que asesinó sistemáticamente a un movimiento obrero y sus representantes, que sostuvo desde principios del siglo ~~xx~~ luchas unitarias y con perspectiva de un proyecto de país desde abajo (Torres Giraldo, 1974; Vega Cantor & Jáuregui González, 2013).

Estas manifestaciones prolongadas, fueron sobre todo urbanas. Jornadas marcadas por una secuencia de plantones, conversas, pintas de murales, ollas comunitarias, encuentros artísticos populares, toma de espacios públicos para la resistencia, se renombraron sitios o puntos de encuentro y resistencia en las principales ciudades del país, se adaptaron lugares para bibliotecas populares, en las redes sociales virtuales se dio cuenta de múltiples espacios de debate, información y divulgación. Se resalta ese amplio número de eventos en redes sociales virtuales, en-vivo que han transmitido en tiempo real lo que ocurre en las movilizaciones y plantones, así como innumerables espacios formativos y deliberativos.

Se resalta la característica territorial de una manifestación nacional. A nivel territorial se resalta que, en Bogotá y el suroccidente colombiano, fue creciendo una expresión organizativa comunal, allí se decidieron taponamientos temporales de vías e intercambios viales, en tanto el gobierno insistió en no escuchar el clamor de este pueblo en movimiento, negando toda la problemática sentida en los territorios, criminalizando estas acción, dándoles trato de guerra, de orden público y por el contrario, avanzando en sus maneras de hacer política para unos pocos privilegiados.

Expresiones populares inorgánicas. Es gracias a estas formas plurales organizativas autónomas no orgánicas, es decir, no dependientes de gremios sindicales, ni de ONGs, mucho menos de partidos políticos, formas propias que fueron dándose su ruta organizativa emergente, según se vio la necesidad. Así nacen las asambleas locales barriales, que luego se elevaron en asambleas populares nacionales donde se fue fortaleciendo la articulación popular y la conciencia de la necesidad, no de unas peticiones y reclamos puntuales, sino de un cambio de fondo de la sociedad. Fue dándose un debate nacional en la tensión territorio-nación, fueron gestándose formas de la unidad popular desde abajo, cada vez más fuerte, unidad que se fue dando su propio camino. Fue gracias a estas expresiones autónomas, no orgánicas, que se tuvo noticia real y cierta, desde los diversos territorios de lo que ha venido ocurriendo, tanto de la belleza, alegría y masividad de cada movilización, como también del brutal abuso de las fuerzas armadas estatales, amenazando la democracia y negando toda posibilidad de libertad, afectando la vida y la integridad de los marchantes, hechos de los que fueron cómplices los grandes medios de comunicación, a través de una matriz mediática de estigmatización y justificación, cómo puede evidenciarse en la forma de titular de los grandes medios frente a los medios locales y alternativos.

Primeras Líneas como actor emergente. Esta gran movilización que se detonó en el marco del paro nacional, tuvo la presencia de un actor emergente, denominado Primeras Líneas, agrupando jóvenes – sobre todo excluidos del sistema–, que se sumaron inicialmente para defender las manifestaciones de la brutalidad policial, pero que fueron tomando fuerza regional, territorial y nacional, ganando en apoyo, credibilidad, generando gran presión a gobiernos locales y al gobierno nacional (Grupo Kavilando, 2021). Un nuevo actor que poco a poco se fue convirtiendo, en el relato institucional, en el nuevo “enemigo” con el apelativo de vándalos. En este giro descriptivo, se garantizará la aplicación de la constante y calcada estrategia de represión, persecución, estigmatización y criminalización.

La experiencia del levantamiento popular en Cali deja múltiples aprendizajes para el conjunto de la sociedad, que deberán ser procesados y sistematizados con el paso del tiempo. Sin duda, el ejercicio que está en curso a partir de “barrio adentro”, mostrará la potencia de estos jóvenes populares y el arraigo territorial que alcanzaron a tejer. Sin embargo, seguramente las organizaciones de jóvenes deberán enfrentarse con múltiples retos y desafíos que no son nuevos, sino que han tenido que vivirlos históricamente las organizaciones comunitarias en Colombia desde la década de 1970, pues mantener escenarios comunitarios en la ciudad es una tarea difícil y que tiene límites. Posiblemente estos jóvenes encontrarán problemas álgidos que significarán un “castigo” a lo que hicieron en estos dos meses, por lo que probablemente comenzaran a verse persecuciones y judicializaciones por parte del Estado, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, cooptación de liderazgos y procesos fuertes por parte de la institucionalidad, entre muchos otros.

Estos jóvenes inorgánicos, con sus propias maneras de tejer, con dinámicas propias territoriales, generaron un gran cuestionamiento ético: por un lado al gobierno, al Estado, a las instituciones en su conjunto y también a las formas organizativas sindicales, cuestionando sus maneras de negociar, de ceder ante prebendas, el no querer jugársela por un cambio estructural de fondo, cuestionando toda institución por su clara incoherencia, mezquindad y ausencia de real compromiso por lograr cambios de fondo (Valencia Grajales, Marín Galeano, & Insuasty Rodríguez, 2021).

Re-escribir la historia. Por su parte, las comunidades indígenas, de forma territorial, se han venido manifestando a la par y sin parar en su lucha, igual que las comunidades negras, campesinas, transportadores, entre otras. Resaltar la fuerza de la Minga Indígena y el valeroso proceso de re-escritura de la historia del pueblo misak, quienes han venido derribando –como un gran ejercicio de justicia– las estatuas de los colonizadores, pues no es posible seguir celebrando un genocidio continuado contra los pueblos. Se trata de un hecho simbólico de gran

importancia que ha recibido todo el apoyo popular, pero que, por parte de la institucionalidad, ha significado el despliegue de la fuerza bruta policial y de un cubrimiento de los medios masivos pro institucionales y pro empresariales, a través de señalamientos, de rechazo y estigmatización.



Foto: Periódico El Comercio (2021)



Foto Kien y Ke (2021)

La re-significación política del pueblo como protagonista versus la represión simbólica estatal. Desde la creación del Estado-nación como una necesidad de legitimación de las nuevas esferas del poder napoleónicas y revolucionarias que iban en contravía del modelo feudal, de lealtades comunitario-locales juramentadas en favor del rey, monarca o emperador, se han construido categorías e instituciones aparentemente inamovibles como la democracia representativa –aunque se ha intentado hacer creer que deviene de la democracia por sorteo ateniense, pero nunca lo ha sido–, el Estado (soberanía) como ente indispensable para definir fronteras, gobierno, población, leyes, legitimidad y legalidad. Además del capitalismo como modelo económico indiscutible, la división de poderes, el monopolio de la fuerza y finalmente el pueblo como detentador principal del poder desde lo simbólico, aunque desde lo real jamás haya detentado tal potestad. Pero las anteriores construcciones simbólicas de la sociedad moderna, que pretendió a través de la aparente democracia dar respuesta a los cambios que plantearon el iluminismo, la enciclopedia, la burguesía, el mercado y la ciencia, se quedaron cortas para los nuevos desafíos de la sociedad o simplemente nunca fueron una respuesta para las antiguas y nuevas generaciones. Lo anterior se pudo apreciar cuando se plantearon con figuras como las mayorías, los partidos políticos, la burocracia, la tecnocracia, e incluso la meritocracia, debido a que todas ellas tienden a permitir la cooptación, por medio de la corrupción, el nepotismo y la contratación sin requisitos. Es por ello por lo que el principal error de la democracia moderna es que nunca estuvo realmente dirigida a todos, por lo que la justicia es excluyente, en tanto sólo está al servicio de los más ricos –porque son los únicos que pueden pagar un buen abogado, expertos, investigadores, árbitros y conciliadores–. La participación es limitada sólo para el voto –donde la decisión de las comunidades, localidades o minorías no es tenida en cuenta, y su participación es sólo simbólica–, los partidos tradicionales y los que han surgido de ellos no representan a nadie, y ni siquiera tienen fines ideológicos –son lo que imaginaron los federalistas, grupos de

facciones o elites que solo se representan a sí mismos—. La burocracia sólo está constituida para proveer empleos a quienes hacen parte de las elites o son leales a ella; la tecnocracia sólo permite emplearse a quienes son útiles al sistema; la meritocracia es otro elemento que es manoseado porque los perfiles se pueden adecuar a las características de sus amigos o familiares, más que a las necesidades del cargo. Las leyes al estar en cabeza de las elites permiten controlar la legalidad y legitimidad de las elites moldeándola según sus necesidades y no las de la sociedad.

La necesaria unidad. Los procesos organizativos populares, sindicales, sociales, vieron nacer un nuevo actor y se les hizo muy difícil articulase entre sí, ganar fuerza, reaccionar de manera pronta. Es importante escucharse para avanzar, gestando espacios de reconocimiento, mayor horizontalidad, reconocer contextos, leer la realidad, serán acciones vitales para evitar reproducir el sistema operante de exclusión, invisibilización, negación en nuestros procesos desde abajo; dejar nacer, escuchar, formar, acompañar sobre la lógica del cuidado, para ganar fuerza y proyectar el futuro a mediano y largo plazo, ganar en agendas comunes, aprender a ganar en tejido social, en esa arquitectura social desde abajo, que se requiere para empujar los cambios (Zibechi, 2014).

El lugar de lo electoral. Se hace urgente comprender que no todo debe girar hacia lo electoral. Si se cuenta con una arquitectura social tejida desde abajo, se tendrá una agenda propia, porque si se da un lugar central a lo electoral, la institucionalidad terminará tragándose toda la potencia, domesticando y asimilando los procesos, evitando cambios de fondo. Es necesario darle un lugar, pero no puede ser el lugar más importante. Lo electoral es un proceso táctico. Los Consejos Municipales de Juventud (CMJ), los Consejos Territoriales de Paz, entre otros, deben ser espacios que sean articulados a esta potente energía de transformación como megáfonos o tribunas de la experiencia juvenil generacional ganada durante el paro y las movilizaciones. No pueden continuarse cediendo espacios de representación estatal ganados con luchas históricas, a la instrumentalización de un régimen que institucionaliza para cooptar.

La construcción de agenda desde abajo. La agenda desde abajo que marca la vida, los tiempos, encauza esfuerzos colectivos es lo central, cómo tejlarla, con cuál metodología, serán los retos de un proceso en maduración:

Es necesario que los movimientos sociales transiten de una dispersión de propuestas que emergen como acciones ante coyunturas de crisis, hacia una agenda pública común, de mediano y largo plazo, tejida entre organizaciones territoriales y con capacidad de poner condiciones en la definición del modelo de ciudad, territorio, región, país; que impacten en el diseño institucional y la destinación real de sus recursos, y de fondo, transitando hacia otro modelo de sociedad, de economía, de escala de valores y hasta de cosmovisión compartida (Arango & Insuasty Rodríguez, 2020)

La emergencia de nuevos mundos posibles, que ya laten en la sociedad. El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, corrió un telón que hoy los enemigos de la paz intentan tender nuevamente sobre la realidad colombiana. La histórica lucha del pueblo colombiano por la paz ha puesto de plano la necesidad de tramitar los conflictos urbanos y construir formas de la paz territorial urbana (Zuluaga Cometa & Arias Mejía, 2020), por ello, la importancia de la concentración de los movimientos juveniles y la permanencia de estos en las grandes capitales, no sin desconocer experiencias y formas rurales del estallido y la resistencia. Ganar la calle, reconstruir lo público y renombrarlo, rehacer el territorio, son formas de la memoria popular y de resistencia que perviven. No es gratuito que, para el caso de Medellín, uno de los puntos de apoyo al movimiento sea el barrio Moravia, llamado antes Fidel Castro, siguiendo hilos de esas ciudades invisibles de las que hablaba Italo Calvino (2012). Una memoria de resistencia instalada en el territorio de las luchas urbanas

liderada por campesinos desplazados por ciclos de violencia impuestos que luego de fundar barrios y organizaciones como la Central Nacional Pro Vivienda (CENAPROV) fueron sistemáticamente exterminados y hoy son reconocidos como víctimas de crímenes de estado para ser sujetos de reparación colectiva.

La crisis es sistémica, los cambios deben ser de fondo. Egipto, Chile y Colombia, en su justa medida, comparten el camino de un sistema económico que cada vez da más muestras innegables de su crisis, a la que los pueblos han dado respuesta con movilización y capacidad organizativa. Egipto logró derrocar varios gobiernos y aprender de ello. Chile, después de 48 años de dictadura neoliberal, abrió el camino de la transformación con una constituyente nacional presidida por la indígena mapuche Elisa Loncón. Colombia, desde 2019, abrió un camino y una afluyente social y popular que fue pospuesta por la pandemia. Puerto Resistencia, Parque de la Resistencia y Avenida Misak son hoy iconos de la resignificación de esas ciudades que fueron construidas para el gran capital (Harvey, 1992), pero que hacen parte de esa misma contradicción que las habita y configuran las ciudades rebeldes (Harvey, 2013), las ciudades y territorios de la segunda independencia.

Referencias bibliográficas



- 360Radio. (18 de septiembre de 2020). *Colombia tiene un 33% de jóvenes que no estudian ni trabajan*. Obtenido de sitio web de 360Radio: <https://360radio.com.co/colombia-tiene-33-jovenes-no-estudian-trabajan/>
- Acosta Argote, C. (17 de marzo de 2021). Radicaron proyecto de ley para renta básica universal para familias vulnerables. Obtenido de Asuntos Legales: <https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/radicaron-proyecto-de-ley-para-renta-basica-universal-para-familias-vulnerables-3140331>
- Acosta Fonseca, V. (24 de febrero de 2021). En medio de la pandemia por covid-19, cerraron 509.370 micronegocios en Colombia. *La República*. Obtenido de <https://www.larepublica.co/economia/en-medio-de-la-pandemia-por-covid-19-cerraron-509370-micronegocios-en-colombia-3130382>
- Acosta, J. (2004). *Compendio histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada*. Bogotá. Obtenido de <https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/2395/>
- Agencia Prensa Rural. (1 de octubre de 2013). *Pliogo de peticiones del paro nacional agrario y popular*. Obtenido de sitio web de Agencia Prensa Rural: <https://prensarural.org/spip/spip.php?article11620>
- Alguero, M. O. (16 de junio de 2021). Suspensión de las movilizaciones divide al Comité Nacional del Paro. *La Patria*, págs. <https://www.lapatria.com/economia/suspension-de-las-movilizaciones-divide-al-comite-nacional-del-paro-476418>.
- Alvarado, M. (15 de mayo de 2007). La Parapolítica: la infiltración paramilitar en la clase política colombiana. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. doi:<https://doi.org/10.4000/nuevomundo.4636>
- Alvarado Lozada, M. (30 de abril de 2021). Usuarios le piden a Twitter suspender la cuenta de Uribe. *El Espectador*. Obtenido de <https://www.elespectador.com/politica/usuarios-le-piden-a-twitter-suspender-la-cuenta-de-uribe-article/>
- Amnistía Internacional. (30 de julio de 2021). *Colombia: Cali: en el epicentro de la represión*. Obtenido de sitio web de Amnistía Internacional: <https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/4405/2021/es/>

- Arango, L. I., & Insuasty Rodríguez, A. (enero-junio de 2020). La articulación de Agendas desde abajo: Una mirada a la crisis. *Revista Kavilando*, 12(1), 1-14. Obtenido de <https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/393>
- Archila, M. (5 de diciembre de 2008). *Sangre en la plantación*. Obtenido de sitio web de Platohedro: <http://platohedro.blogspot.com/2008/12/sangre-en-la-plantacin.html>
- Arciniegas, Y. (10 de mayo de 2021). *Protestas en Colombia: varios indígenas fueron heridos luego de que civiles les dispararon en Cali*. Obtenido de sitio web de France 24: <https://www.france24.com/es/américa-latina/20210510-protestas-colombia-civiles-disparan-indigenas-cric-cali>
- Arias, W., & Mondragón, A. (26 de junio de 2021). *Estallido social en Cali: la juventud dice ¡Basta!* Obtenido de sitio web de Desde Abajo: <https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/42753-estallido-social-en-cali-la-juventud-dice-basta.html>
- Arroyo Muñoz, L. (12 de mayo de 2021). ¿Cómo sostener un paro durante varias semanas sin que pierda efecto? Obtenido de Pacifista: https://www.youtube.com/watch?v=7fhlmcmQJME&list=PLuL_f_JCxxi5yjJXgBTOZij3PcKh_ZxD1&index=135&t=28s
- Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas [ACIS]. (17 de marzo de 2019). *En Colombia las MiPymes representan el 80% del empleo*. Obtenido de sitio web de Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas [ACIS]: <https://acis.org.co/portal/content/noticiasdeinteres/en-colombia-las-mipymes-representan-el-80-del-empleo-del-país-y-el-90-del-sector-productivo#:~:text=Afiliese%20aquí-,En%20Colombia%20las%20MiPymes%20representan%20el%2080%25%20del%20empleo%20del,9>
- Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca [NASAACIN]. (1 de agosto de 2013). *El 19 de agosto todos a la movilización nacional cafetera y agropecuaria*. Obtenido de sitio web de Polo Democrático Alternativo: <https://www.polodemocratico.net/el-19-de-agosto-todos-a-la-movilizacion-nacional-cafetera-y-agropecuaria/>

- Asociación Nacional de Usuarios Campesinos [ANUC]. (1 de abril de 2017). *Quiénes somos*. Obtenido de sitio web de Asociación Nacional de Usuarios Campesinos [ANUC]
- Beltran, P. (2020). Radio Kavilando: Obstáculos para una Paz Transformadora. Colombia. Obtenido de Radio Kavilando: <https://soundcloud.com/kavilando/radio-kavilando-obstaculos-para-una-paz-transformadora-colombia>
- Berron, G. (1 de enero de 2007). De la lucha contra el ALCA a la “integración de los pueblos”: movimientos sociales y procesos de integración. Obtenido de TNI: <https://www.tni.org/my/node/11638>
- Bolívar, G. [@GustavoBolivar]. (2 de septiembre de 2020). #ParoNacionalYa 15 motivos: -Decreto 1174 -Regalo a Avianca -Desempleo del 20% -Negativa a renta básica -fracking -Glifisato -Bombardeo a niños. Twitter. <https://twitter.com/GustavoBolivar/status/1301142178648010756>
- Bonilla, L., Insuasty Rodríguez, A., Martha, A., Jimenez, C., Munevar, C., Ortega, N., & Forero, J. (2021). Causas preliminares y actualidad del conflicto social en Colombia. doi:DOI: 10.13140/RG.2.2.11577.49769
- Bustamante, C. (24 de julio de 2020). ¿Aumentará la informalidad laboral en Colombia por el Covid-19? Obtenido de sitio web de Radio Nacional de Colombia - RTVC: <https://www.radionacional.co/actualidad/economia/aumentara-la-informalidad-laboral-en-colombia-por-el-covid-19>
- Calderón, D. (5 de mayo de 2021). Las últimas horas del uribismo. *El País (Cali)*. Obtenido de <https://elpais.com/opinion/2021-05-05/las-ultimas-horas-del-uribismo.html>
- Calvino, I. (2012). *Las Ciudades Invisibles*. Siruela.
- Canal Institucional. (2020). *Manuela Beltrán por Magda Egas – 200 años de Mujeres Pioneras*. Obtenido de sitio web de Canal Institucional: <https://www.canalinstitucional.tv/bicentenario-colombia/manuela-beltran-por-magda-egas-200-anos-de-mujeres-pioneras>
- Canal Institucional. (2020). *Policarpa Salavarrieta “La Pola”*. Obtenido de sitio web de Canal Institucional: <https://www.canalinstitucional.tv/bicentenario-colombia/policarpa-salavarrieta-la-pola>

- Cárdenas, L. (4 de julio de 2021). *Polémica por 'pintatón' para borrar murales hechos por manifestantes en el Paro Nacional en Cali*. Obtenido de sitio web de RCN Radio: <https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/polemica-por-pintaton-para-borrar-murales-hechos-por-manifestantes-en-el-paro>
- Castañeda Ruiz, H. N., & Gomez Osorio, A. (2019). La declaratoria del Río Atrato como entidad sujeto de derechos: una oportunidad para la construcción de un proyecto presente-futuro de territorio sustentable. *Kavilando*, 11(1), 417-433. Obtenido de <https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/358>
- Castillo Gómez, L. C. (2021). Arde Cali, sucursal del cielo y capital mundial de la salsa. En *Pensar la resistencia: mayo del 2021 en Cali y Colombia* (págs. 95-127). Cali: Universidad del Valle. Obtenido de <https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/06/Libro-Cidse-La-Resistencia.pdf>
- Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. (2019). Mega-proyectos en el departamento del Chocó. Obtenido de Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna: <https://pacificocolombia.org/wp-content/uploads/2016/05/0227036001348396444.pdf>
- Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica. (2021). *Pensar la resistencia: mayo del 2021 en Cali y Colombia*. (C. d. Socioeconó, Ed.) Cali: Universidad del Valle. Obtenido de <https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/06/Libro-Cidse-La-Resistencia.pdf>
- Centros Miembros de CLACSO [Colombia]. (3 de mayo de 2021). *No a la política neoliberal de Iván Duque*. Obtenido de sitio web de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales [CLACSO]: <https://www.clacso.org/no-a-la-politica-neoliberal-de-ivan-duque/>
- CEPAL. (septiembre de 1998). Acerca de la CEPAL. Obtenido de CEPAL: <https://www.cepal.org/es/acerca>
- CNN en Español. (5 de mayo de 2021). *¿Qué es el Esmad, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia, y por qué es tan polémico?* Obtenido de sitio web de CNN en Español: <https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/05/esmad-escuadron-movil-antidisturbios-de-colombia-y-por-que-es-tan-polemico-orix/>

Colectivo vestigios (09 de junio de 2021) La lucha feminista ha sido mi elección o filtro para ver y entender el mundo, cada compañera que es violentada habita en mi en digna rabia, es cierto que altos son los dolores cuando matan y violan [Imagen de Instagram] Recuperado de https://www.instagram.com/p/CP6Lz65L6PP/?utm_source=ig_web_copy_link Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (7 de julio de 2021).

Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021. Obtenido de sitio web de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8582-observaciones-y-recomendaciones-de-la-visita-de-trabajo-de-la-cidh-a-colombia-realizada-del-8-al-10-de-junio-de-2021>

Comité Directivo de CLACSO. (6 de mayo de 2021). *Condena mundial a la brutal represión en Colombia.* Obtenido de sitio web de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales [CLACSO]: <https://www.clacso.org/condena-mundial-a-la-brutal-represion-en-colombia/>

Comité Nacional de Paro. (30 de mayo de 2021). Con militarización y violencia el Gobierno Nacional Bloquea la Negociación. Comité Nacional de Paro. Obtenido de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/8494-con-militarizacion-y-violencia-el-gobierno-nacional-bloquea-la-negociacion-comite-nacional-de-paro>

Comité Nacional de Paro [CNP]. (1 de junio de 2021). *Informe presentado por el Comité Nacional de Paro – CNP a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH.* Obtenido de sitio web de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8527-informe-presentado-por-el-comite-nacional-de-paro-cnp-a-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos-cidh>

Comité Nacional de Paro. (16 de junio de 2021). Declaración política de organizaciones y procesos sociales del Comité Nacional de Paro CNP. Obtenido de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/8539-declaracion-politica-de-organizaciones-y-procesos-sociales-del-comite-nacional-de-paro-cnp>

- Comision Intereclesial de Justicia y Paz. (25 de mayo de 2021). #Cali Informe desde los sitios de detención a posible fosas comunes y casas de pique. Obtenido de Kavilando: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
- Congreso de los Pueblos. (2014). Congreso de los Pueblos. Historia. Obtenido de Congreso de Los Pueblos: <https://www.congresodelospueblos.org/nuestra-historia/>
- Congreso de los Pueblos. (26 de agosto de 2013). *Pliego agrario y minero-energético para avanzar hacia un país con paz y vida digna*. Obtenido de sitio web de Justicia y Paz Colombia: <https://www.justiciaypazcolombia.com/pliego-agrario-y-minero-energetico-para-avanzar-hacia-un-pais-con-paz-y-vida-digna/>
- Consejo Regional Indígena del Cauca [CRIC]. (29 de diciembre de 2017). *Comunicado de las organizaciones sociales del Cauca agrupadas en la mesa territorial de garantías*. Obtenido de sitio web del Consejo Regional Indígena del Cauca [CRIC]: <https://www.cric-colombia.org/portal/comunicado-las-organizaciones-sociales-del-cauca-agrupadas-la-mesa-territorial-garantias/>
- Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. (29 de abril de 2021). *S.O.S CALI EN MANOS DE LA FUERZA PÚBLICA PARO NACIONAL 29A*. Obtenido de sitio web de Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos: <https://coeuropa.org.co/s-o-s-cali-en-manos-de-la-fuerza-publica-paro-nacional-29a/>
- Cruz Rodríguez, E. (6 de julio de 2021). *Lucha de clases, insurrección popular y masacre*. Obtenido de sitio web de Desde Abajo: <https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/42832-lucha-de-clases-insurreccion-popular-y-masacre.html>
- Cruz, L. E. (2010). La constitucion Política de 1991 y la apertura económica. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 18(1), 269-280. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-68052010000100016
- Cumbre Urbana. (17 de junio de 2017). Encuentro Nacional por la Vida Digna Territorios Urbanos y Populares por la Paz. Obtenido de Kavilando: <https://kavilando.org/images/stories/documentos/Memorias-Encuentro-Bucaramanga-Territorios-Urbanos-para-la-Paz.pdf>

- DANE. (2020). *Educación formal (EDUC)*. Obtenido de sitio web de DANE: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/poblacion-escolarizada/educacion-formal>
- DANE. (2021). *Pobreza en América Latina y estimaciones locales*. Obtenido de sitio web de DANE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Presentacion-pobreza-monetaria_2020.pdf
- Delgado Ruiz, S. T., & Acero Jimenez, L. E. (2015). Análisis de la dependencia fiscal de los municipios de sexta categoría del departamento de Boyacá, durante el período 1996-2012. *Apuntes del CENES*, 34(60), 215-246. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/4795/479547212008.pdf>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (29 de abril de 2021). *Pobreza monetaria en Colombia*. Obtenido de sitio web de DANE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Presentacion-pobreza-monetaria_2020.pdf
- Dorado, F. (18 de agosto de 2013). *Las complejidades del Paro Nacional Agrario*. Obtenido de sitio web de Rebelión: <https://rebellion.org/las-complejidades-del-paro-nacional-agrario/>
- Duzán, M. J. (2014). *Emputados. El libro de los indignados colombianos*. Bogotá: Planeta.
- DW. (14 de marzo de 2021). Más de 900 líderes sociales asesinados en Colombia desde 2016. Obtenido de DW: <https://www.dw.com/es/m%C3%A1s-de-900-l%C3%ADderes-sociales-asesinados-en-colombia-desde-2016/a-57257906>
- El Heraldo. (21 de julio de 2016). Colombia importa 30% de los alimentos que consume. Obtenido de El Heraldo: <http://www.cenired.org.co/index.php/publicaciones/item/137-colombia-importa-30-de-los-alimentos-que-consume>
- El Espectador. (19 de agosto de 2013). Habrá diálogo, pero sin bloqueos. Obtenido de El Espectador: <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/habra-dialogo-sin-bloqueos-articulo-440988>
- El Tiempo. (2 de octubre de 1994). El legado del Presidente Carlos Lleras Restrepo. Obtenido de El Tiempo: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-219518>

- Elías Caro, J. E. (enero-junio de 2011). La masacre obrera de 1928 en la zona bananera del Magdalena-Colombia. Una historia inconclusa. *Andes*, 22. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12719967004>
- Escuela Nacional Sindical. (25 de junio de 2020). *Comité Nacional de Paro presentó al Gobierno "pliego de peticiones de emergencia"*. Obtenido de sitio web de Agencia de Información Laboral – AIL: <https://ail.ens.org.co/noticias/comite-nacional-de-paro-presento-al-gobierno-pliego-de-peticiones-de-emergencia/>
- Fao. (octubre de 2009). La agricultura mundial en la perspectiva del año 2050. Obtenido de Fao: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/Issues_papers_SP/La_agricultura_mundial.pdf
- Flórez, M. (7 de julio de 2015). *La revolución sin armas que reconoció el Gobierno*. Obtenido de sitio web de Pacifista: <https://pacifista.tv/notas/la-revolucion-sin-armas-que-reconocio-el-gobierno/>
- FOR Presente por la Paz - FORPP, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas - SOA Watch. (7 de octubre de 2020). *Desde el inicio hasta el final. Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano*. Obtenido de sitio web de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8049-desde-el-inicio-hasta-el-final-estados-unidos-en-el-conflicto-armado-colombiano>
- Gómez, A. d. (11 de junio de 2021). Puerto Resistencia: punto de referencia para la resistencia en Cali. *La Palabra - Periódico Cultural de la Universidad del Valle*. Obtenido de <http://lapalabra.univalle.edu.co/cronica-puerto-resistencia-punto-de-referencia-para-la-resistencia-en-cali/>
- Gonzales Temprano, A., & Torres Villanueva, E. (1993). El Estado de bienestar en los países de la OCDE hasta los años 90. Cuadernos de relaciones laborales(3), 129-132. Obtenido de file:///C:/Users/Alfonso%20Insuasty%20R/Downloads/33816-Texto%20del%20art%C3%ADculo-33832-1-10-20110610.PDF

- Grupo Kavilando. (25 de mayo de 2021). "Golpe al uribismo: cae en Providencia avión N722HR con 440 kilos de cocaína". Gonzalo Guillén. Obtenido de sitio web de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8486-golpe-al-uribismo-cae-en-providencia-avion-n722hr-con-440-kilos-de-cocaina-gonzalo-guillen>
- Grupo Kavilando. (26 de junio de 2021). *Primeras Líneas, una generación que construye cambios Cátedra Internacional de Paz 2021* [Transmisión en vivo guardada]. Facebook. <https://www.facebook.com/grupo.kavilando/videos/1435410293506343/>
- Gutierrez , A. (24 de mayo de 2021). El Comité del Paro y Gobierno Nacional llegaron el lunes en la noche a un preacuerdo. Obtenido de La República: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8483-el-comite-del-paro-y-gobierno-nacional-llegaron-el-lunes-en-la-noche-a-un-preacuerdo>
- Gutiérrez, J. A. (1 de agosto de 2015). «Masacre laboral» contra los obreros de Chiclets Adams/Cadbury en Cali. Obtenido de sitio web de Rebelión: <https://rebelion.org/masacre-laboral-contra-los-obreros-de-chiclets-adams-cadbury-en-cali/>
- Gutiérrez, J., & Barbosa, F. (16 de febrero de 2021). *Desplazamiento Forzado en Colombia ¿Qué pasó en 2020?* Obtenido de sitio web de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [CODHES]: <https://codhes.wordpress.com/2021/02/16/desplazamiento-forzado-en-colombia-que-paso-en-2020/>
- Guzmán-Concha, C., & Díaz Pabón, F. A. (14 de junio de 2021). *El grito de los que sobran en Chile y Colombia*. Obtenido de sitio web de Desde Abajo: <https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/42662-el-grito-de-los-que-sobran-en-chile-y-colombia.html>
- Harvey, D. (1992). *Urbanismo y desigualdad social*. Siglo XXI, España.
- Havey, D. (2013). *Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana*. Madrid: Akal.

- Hernández Lara, J. (2021). De la marcha hacia el centro al bloqueo en los barrios: las luchas por reconocimiento y oportunidades en Cali durante el paro nacional de abril-mayo de 2021. En *Pensar la resistencia: mayo del 2021 en Cali y Colombia* (págs. 127-150). Cali: Universidad del Valle. Obtenido de <https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/06/Libro-Cidse-La-Resistencia.pdf>
- Hernández Rodríguez, Laura. (2021). Acuerdo de Escazú, ante inminente hundimiento en el Congreso. Obtenido de sitio web La FM: <https://www.lafm.com.co/politica/acuerdo-de-escazu-en-el-congreso-ante-inminente-hundimiento-en-el-congreso>
- Hora 13 Noticias. (13 de abril de 2020). *En barrios periféricos de Medellín sacan trapos rojos para pedir ayudas*. Obtenido de sitio web de Hora 13 Noticias: <https://h13n.com/en-barrios-perifericos-de-medellin-sacan-trapos-rojos-para-pedir-ayudas/>
- Human Rights Watch [HRW]. (2020). *Colombia. Eventos de 2020*. Obtenido de sitio web de : <https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377396>
- Hurtado, L. (31 de mayo de 2021). *3.3 millones de jóvenes en Colombia ni estudian ni trabajan: DANE*. Obtenido de sitio web de Caracol Radio: https://caracol.com.co/radio/2021/05/31/economia/1622483193_440693.html#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20joven%20en%20Colombia,que%20ni%20estudian%20ni%20trabajan.
- Gómez Charris, L., & Martínez Rodríguez, L. A. (20 de noviembre de 2020). Senado debatió incumplimiento del Acuerdo de Paz y asesinatos de líderes sociales. Obtenido de Senado Colombia: <http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/noticias/2085-senado-debate-incumplimiento-del-acuerdo-de-paz-y-asesinatos-de-lideres-sociales>
- Grisales Gonzalez, D., & Insuasty Rodríguez, A. (2017). *Minería, conflictos territoriales y derechos de las víctimas*. Colombia. Medellín: Kavilando. Obtenido de <http://web.usbmed.edu.co/usbmed/CIDEH/GIDPAD/Libro-Mineria-Conflictos-y-Derechos-de-las-Victimas-en-Colombia.pdf>

- Igac. (2021). Colombia, un país con una diversidad de suelos ignorada y desperdiciada. Obtenido de <https://igac.gov.co/es/noticias/colombia-un-pais-con-una-diversidad-de-suelos-ignorada-y-desperdiciada>
- Infobae. (15 de octubre de 2020). *2,7 millones de colombianos sufren de hambre crónica*. Obtenido de sitio web de Infobae: <https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/15/27-millones-de-colombianos-sufren-de-hambre-cronica/>
- Instituto de estudios para el desarrollo y la paz [Indepaz]. (10 de junio de 2021). *VÍCTIMAS DE VIOLENCIA HOMICIDA EN EL MARCO DE LAS MANIFESTACIONES EN COLOMBIA 2021*. Obtenido de sitio web de Google Maps: <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1MOOgQgkvYoMZdZiMEUfH7eByHcidXsEL&hl=es-419&ll=6.2850709218520455%2C-75.58914699509745&z=12>
- Insuasty Rodríguez, A. (2017). ¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo? *El Ágora USB*, 17(2), 338-367. <https://doi.org/10.21500/16578031.3278>
- Insuasty Rodríguez, A. (4 de abril de 2020). *Ciudades, capitalismo y COVID19*. Obtenido de sitio web de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7596-ciudades-capitalismo-y-covid19>
- Insuasty Rodríguez, A. (5 de enero de 2020). *El Pacífico entre fuegos*. Obtenido de sitio web de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7379-el-pacifico-entre-fuegos>
- Insuasty Rodríguez, A., Valencia Grajales, J. F., & Agudelo Galeano, J. J. (2016). *Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia: historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (II)*. Medellín: Grupo de Investigación y Editorial Kavilando. Obtenido de http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/3707/3/Elementos_Genealogia_Paramilitarismo_Insuasty_2016.pdf
- Insuasty Rodríguez, A., Valencia Grajales, J. F., & Restrepo Marín, J. D. (2016). *Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia: historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)*. Medellín: Editorial Kavilando. Obtenido de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20170210032121/o.pdf>

- Jimenez Bermejo, D. (31 de mayo de 2016). Acuerdos de Bretton Woods. Obtenido de Economipedia: <https://economipedia.com/definiciones/acuerdos-de-bretton-woods.html>
- Jimenez Grande, E., & Echeverri González, C. (2013). Movimientos sociales: lugares de lucha y construcción de sujeto. *El Agora USB*, 13(1), 329-348. Obtenido de <https://doi.org/10.21500/16578031.95>
- Justicia Especial para la Paz [JEP] - Unidad de Investigación y Acusación. (27 de julio de 2021). *Gravedad de la situación de derechos humanos en Colombia. El caso del paro nacional y sus repercusiones sobre el Sistema Integral para la Paz (28 de abril al 30 de mayo de 2021)*. Obtenido de sitio web de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8628-gravedad-de-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-el-caso-del-paro-nacional-y-sus-repercusiones-sobre-el-sistema-integral-para-la-paz-28-de-abril-al-30-de-mayo-de-2021>
- Kalmanovitz, S. (1977). Aspectos generales del ciclo del capitalismo colombiano. En *Ensayos sobre el desarrollo del capitalismo dependiente*. Bogotá: Editorial Presencia.
- Kavilando - Redipaz. (26 de enero de 2021). *Tribunal Permanente de los Pueblos: historia y sus fallos en Colombia*. Obtenido de sitio web de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/8265-tribunal-permanente-de-los-pueblos-historia-y-sus-fallos-en-colombia>
- Kien y Ke. (7 de mayo de 2021). *Indígenas Misak derriban estatua del fundador de Bogotá*. Obtenido de sitio web de Kien y Ke: <https://www.kienyke.com/bogota/indigenas-misak-derriban-estatua-gonzalo-jimenez-de-quesada>
- Klein, N. (2007). *La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre*. Montreal: Random House.
- León Palacios, P. C. (2002). La industrialización colombiana: una visión heterodoxa. *Innovar*, 1(20), 83-100. Obtenido de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/24281>

- Libreros Caicedo, D., Borja Bedoya, E., & Insuasty Rodríguez, A. (julio-diciembre de 2016). La Paz, el posconflicto y ¿La gran feria internacional de negocios? *Revista Kavilando*, 8(2), 196-213. Obtenido de <https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/180>
- López Rivera, E. (2018). Reseña. La economía colombiana del siglo *xx*: Un recorrido por la historia y sus protagonistas. Carlos Caballero. Penguin Random House, 2016. *Tiempo y economía*, 5(2), 227-231. <https://doi.org/10.21789/24222704.1361>
- Mantilla, A. (16 de septiembre de 2013). *La tragedia y la farsa: del Pacto de Chicoral al Pacto de Compensar*. Obtenido de Palabras Al Margen: <http://palabrasalmargen.com/edicion-18/la-tragedia-y-la-farsa-del-pacto-de-chicoral-al-pacto-de-compensar/>
- Martínez, F. (26 de junio de 2021). *Viviendo en la primera línea*. Obtenido de sitio web de Desde Abajo: <https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42747-viviendo-en-la-primera-linea.html?fbclid=IwAR3GpZsAVBfSBhInGMWmV99OB4etDWRyJmn1mmKMWJEVv-zWrwXQ3lKLP1>
- Martínez, F. (29 de junio de 2021). *Puerto resistencia epicentro del levantamiento popular*. Obtenido de sitio web de Desde Abajo: <https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42766-puerto-resistencia-epicentro-del-levantamiento-popular.html>
- McAdam, D., McCarthy, J., & Zald, M. (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid: Istmo.
- McCarthy, D. (1999). Adoptar, adaptar e inventar límites y oportunidades. En D. McAdam, J. McCarthy, & M. Zald (Edits.), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales* (págs. 205-220). Madrid: Istmo.
- Mendoza Leal, D. (mayo de 2020). Matarife. Obtenido de Matarife: https://www.youtube.com/channel/UckcR6LmTzCs93pmZ76bEy_g

- Misión Internacional. (13 de julio de 2021). Informe. Misión de observación internacional por las garantías de la protesta social y contra la impunidad en Colombia. Obtenido de Misión Internacional: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8599-informe-mision-de-observacion-internacional-por-las-garantias-de-la-protستا-social-y-contra-la-impunidad-en-colombia>
- Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos. (6 de junio de 2021). Informe preliminar: Violación de Derechos Humanos En Colombia En el marco del Paro Nacional 2021. Obtenido de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8516-informe-preliminar-violacion-de-derechos-humanos-en-colombia-en-el-marco-del-paro-nacional-2021>
- Morales, J. (12 de junio de 2021). Patrón de reproducción regional 1930-1973 - análisis materialista histórico de Nuestra América. Obtenido de Canal Youtube Kavilando - Escuela Reinaldo Carcanholo SEPLA: <https://youtu.be/tRW3lRgQCqA>
- Mugarik Gabe. (3 de noviembre de 2008). El Gobierno colombiano reprime la Minga Nacional de resistencia indígena. Obtenido de Mugarik Gabe: <https://www.mugarikgabe.org/es/2008/11/03/el-gobierno-colombiano-reprime-la-minga-nacional-de-resistencia-indigena/>
- Muñoz, M. T., & Peña Nieto, J. (2019). Auge y decadencia de las consultas populares como mecanismo participación y refrendación de la voz ciudadana en el sector extractivo en Colombia. Bogotá: Foro Nacional por Colombia. Obtenido de <https://foro.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Casos-Consultas-Populares.pdf>
- Murillo, O. (16 de marzo de 2021). Javier Ordóñez, el asesinato que sumió a Bogotá en un caos. Obtenido de El Tiempo: <https://www.eltiempo.com/bogota/javier-ordonez-historia-del-asesinato-bogota-537555>
- NoticiasUno. (23 de mayo de 2021). El Mapa del Hambre ONU. Obtenido de NoticiasUno: <https://www.noticiasuno.com/economia/el-mapa-del-hambre-de-la-onu-muestra-alertas-en-tiempo-real/>

- Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz. (28 de agosto de 2021). *Líderes sociales, defensores de DD.HH y firmantes de acuerdo asesinados en 2021*. Obtenido de Instituto de estudios para el desarrollo y la paz [Indepaz]: <http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/>
- Quendo, C. (17 de abril de 2020). El hambre como bandera. *El País (España)*. Obtenido de <https://elpais.com/sociedad/2020-04-17/el-hambre-como-bandera.html>
- Orozco Bedoya, J. F. (2020). La implementación del modelo neoliberal en Colombia: racionalización del estado. Obtenido de Biblioteca Digital UdeA: <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/16394/4/Anexo%202.pdf>
- Ortiz Cortés, H. (13 de junio de 2021). Cuatro apuestas para que Cali se levante y supere la crisis. *El País (Cali)*. Obtenido de <https://www.elpais.com.co/cali/cuatro-apuestas-para-que-se-levante-y-supere-la-tesis.html>
- Ortiz Quevedo, C. H. (2021). Otra vuelta de tuerca: La codicia de las élites en la pandemia. En *Pensar la resistencia: mayo del 2021 en Cali y Colombia* (págs. 41-52). Cali: Universidad del Valle. Obtenido de <https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/06/Libro-Cidse-La-Resistencia.pdf>
- Pardo, D. (1 de junio de 2021). *Paro nacional en Colombia: los grupos de civiles que disparan al lado de la policía durante las protestas*. Obtenido de sitio web de BBC Mundo: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57311752>
- Paro nacional en Colombia: indígenas derriban estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali. (28 de abril de 2021). *El Comercio*. Obtenido de <https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/paro-nacional-en-colombia-indigenas-derriban-estatua-de-sebastian-de-belalcazar-en-cali-ivan-duque-en-directo-noticia/>
- PCN. (2019). ¡Somos Proceso de Comunidades Negras en Colombia! Obtenido de PCN: <https://renacientes.net/quienes-somos/>
- Periódico Desde Abajo. [Periódico desdeabajo] (19 de junio de 2021). *La dosis N°67: En Cali la potencia de un antimonumento* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=n13Qo1MeZDM>

- Periódico Desde Abajo. [Periódico desdeabajo] (22 de julio de 2021). *Cali, Resiste. El antimonumento de Puerto Resistencia* [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=oxSrGbwA_kg
- Periódico Desde Abajo. [Periódico desdeabajo] (4 de julio de 2021). *Luces de la revuelta juvenil y popular en Cali* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=ilpfVrSLqA>
- Portafolio. (17 de diciembre de 2019). Pliego de comité de paro pasó de 13 a 104 puntos. Obtenido de Portafolio: <https://www.portafolio.co/economia/gobierno/pliego-de-comite-de-paro-paso-de-13-a-104-puntos-536644>
- Primera Línea Contable [@1LineaContable]. (s.f.). Tweets [Perfil de Twitter]. <https://twitter.com/1LineaContable>
- Primera Línea de Psicología [@P_LPsicologia]. (s.f.). Tweets [Perfil de Twitter]. https://twitter.com/P_LPsicologia
- Primera Línea Médica [@1lineamedica]. (s.f.). Tweets [Perfil de Twitter]. <https://twitter.com/1lineamedica>
- Primera Línea Tecnológica [@1lineatecno]. (s.f.). Tweets [Perfil de Twitter]. <https://twitter.com/1lineatecno>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. (2011). *Colombia rural. Razones para la esperanza*. Bogotá. Obtenido de https://www.google.com/O7e5OjyAhVzTTABHRjdCAcQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fcontent%2Fdam%2Fcolombia%2Fdocs%2FDesarrolloHumano%2Fundp-co-ic_indh2011-parte1-2011.pdf&usg=AOvWaw2anOfIMVOobd
- Razón Pública. (7 de diciembre de 2020). *Así se pierden miles de millones de dólares en impuestos en Colombia y el mundo*. Obtenido de sitio web de Razón Pública: <https://razonpublica.com/asi-se-pierden-miles-millones-dolares-impuestos-colombia-mundo/>
- Red de Organizaciones Sociales. (6 de junio de 2021). Entregan segundo informe a la CPI. Señalan irrupción de paramilitarismo urbano en Colombia. Obtenido de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8518-entregan-segundo-informe-a-la-cpi-senalan-irrupcion-de-paramilitarismo-urbano-en-colombia>

- Redacción El Tiempo. (12 de junio de 2021). En Siloé cambiarán los bloqueos por los diálogos. *El Tiempo*. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/cali-en-siloe-cambiaran-los-bloqueos-por-los-dialogos-595505>
- Redacción Entretenimiento Pulzo. (27 de marzo de 2021). "Matarife", la serie documental contra Álvaro Uribe, se ganó dos India Catalina. Obtenido de sitio web de Pulzo: <https://www.pulzo.com/entretenimiento/premios-india-catalina-matarife-serie-contra-alvaro-uribe-gano-premio-PP1040586>
- Redacción Justicia El Tiempo. (19 de julio de 2021). Demandan investidura de Gustavo Bolívar por apoyo a 'primera línea'. *El Tiempo*. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/demandan-investidura-de-gustavo-bolivar-por-apoyo-a-primera-linea-604460>
- Redacción La República. (2 de julio de 2021). Colombia se ubicó en el puesto 140 dentro del Índice Global de Paz de este año. *La República*. Obtenido de <https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-se-ubico-en-el-puesto-140-dentro-del-indice-global-de-paz-de-este-ano-3025496>.
- Redacción La República. (24 de abril de 2021). Colombia ocupó el puesto 41 en el Índice Anual de Miseria que se hace a nivel global. *La República*. Obtenido de <https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-ocupo-el-puesto-41-del-indice-mundial-de-miseria-2020-que-realiza-hanke-3159122#:~:text=Colombia%20ocupó%20el%20puesto%2041,se%20hace%20a%20nivel%20global>
- Redacción La República. (28 de enero de 2021). Colombia es 92 entre países con mayor corrupción según Transparencia Internacional. *La República*. Obtenido de <https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-es-92-entre-paises-con-mayor-corrupcion-segun-transparencia-internacional-3117309>
- Redacción Portafolio. (24 de mayo de 2021). Toma de capitales el 26 de mayo: la agenda del paro para esta semana. *Portafolio*. Obtenido de www.portafolio.co: <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/comite-paro-nacional-en-colombia-concentraciones-para-la-semana-del-24-al-30-de-mayo-del-2021-552223>

- Redacción Portafolio. (25 de agosto de 2018). Lo que nos roba la corrupción. *Portafolio*. Obtenido de <https://www.portafolio.co/economia/lo-que-nos-roba-la-corrupcion-en-colombia-520437>
- Redacción Semana. (25 de julio de 2021). *El comunicador José Alberto Tejada recibe el Premio Orlando Sierra al coraje periodístico*. Obtenido de Revista Semana: <https://www.semana.com/nacion/articulo/el-comunicador-jose-alberto-tejada-recibe-el-premio-orlando-sierra-al-coraje-periodistico/202100/>
- Robledo, J. E. (2007). La globalización neoliberal niega la democracia. En G. Hoyos Vasquez, *Filosofía y Teorías políticas entre la crítica y la Utopía* (págs. 69-82). Buenos Aires: CLACSO.
- Rojas Bolaños, O. E., Insuasty Rodríguez, A., Mesa Duque, N., Valencia Grajales, J. F., & Zuluaga Cometa, H. A. (2020). *Teoría social del falso positivo. Manipulación y Guerra*. Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana. Obtenido de <https://www.kavilando.org/images/stories/libros/TEORIA-SOCIAL-FALSO-POSITIVO.pdf>
- Román, M. H., Valencia Grajales, J. F., Zuluaga Cometa, H. A., & Insuasty Rodríguez, A. (2020). Proyecto Hidroituango. La Historia de una Tragedia. Medellín: Kavilando. Obtenido de <https://kavilando.org/editorial>
- Sader, E., & Gentili, P. (2010). La trama del neoliberalismo Mercado, crisis y exclusión social. Obtenido de Biblioteca Clacso: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20100609030645/latrama.pdf>
- San Basilio de Palenque, primer pueblo de africanos libre en América*. (s.f.). Obtenido de sitio web de Colombia.co: <https://www.colombia.co/cultura-colombiana/san-basilio-de-palenque-primer-pueblo-de-africanos-libre-de-america/>
- Sanabria Duque, Á. (3 de julio de 2021). *¿Primavera de la juventud?* Obtenido de sitio web de Desde Abajo: <https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42800-primavera-de-la-juventud.html>
- Segato, R.L. (2018). *Contra-pedagogías de la crueldad*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros
- Silva, S. T., & Cruz Rodríguez, E. (2017). El movimiento político y social Marcha Patriótica: génesis, estructura y proyecto. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 8(1), 189-225. doi:10.21501/22161201.1927

- Simón, P. (1981). *Noticias históricas de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales*. Bogotá.
- Temblores ONG, Indepazy Pais. (10 de junio de 2021). *Informe conjunto presentado a la CIDH, sobre violación sistemática de Derechos Humanos en el marco de las protestas en Colombia*. Obtenido de sitio web de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8528-informe-conjunto-presentado-a-la-cidh-sobre-violacion-sistematica-de-derechos-humanos-en-el-marco-de-las-protestas-en-colombia>
- Temblores. (25 de mayo de 2021). *Comunicado a la opinión pública y a la comunidad internacional por los hechos de violencia policial durante el primer mes de movilizaciones en el marco del Paro Nacional*. Obtenido de sitio web de Temblores: <https://www.temblores.org/comunicados>
- Tete Crespo, C. [@elsemblante]. *Lo que ha pasado en estos 2 horrendos meses de atropellos y violaciones de todo tipo de DDHH en COL*. Twitter. <https://twitter.com/elsemblante/status/1404481761610960897>
- Torres Giraldo, I. (1974). *Los Inconformes. Historia de la rebeldía de las masas*. Bogotá: Margen Izquierdo.
- Tribunal Permanente de los Pueblos. (20 de junio de 2021). *Sentencia Condenatoria del TPP contra Colombia por Genocidio, Crímenes contra la Paz e Impunidad. Texto Completo*. Obtenido de sitio web de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8549-sentencia-condenatoria-del-tpp-contra-colombia-por-genocidio-crimenes-contra-la-paz-e-impunidad-texto-completo>
- Tribunal Permanente de los Pueblos. (2008). *Tribunal Permanente de los Pueblos historia y sus fallos en Colombia*. Obtenido de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/8265-tribunal-permanente-de-los-pueblos-historia-y-sus-fallos-en-colombia>
- Umaña Mejía, F., & Romoleroux, M. (13 de junio de 2021). *Bloqueos en el Suroccidente: quedan pocos, pero persisten en Cali*. *El Tiempo*. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/paro-el-suroccidente-del-pais-se-sacude-de-los-bloqueos-595686>

- Unidad de Víctimas. (2014). *Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia* (ANUC). Obtenido de sitio web de Unidad de Víctimas: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/asociacion-nacional-de-usuarios-campesinos-de-colombia-anuc/14153>
- Univalle Unida. [@UnivalleU]. (13 de junio de 2021). *Hoy miles de personas en #CALI nos congregamos en Puerto Resistencia para la inauguración del #Monumento a la Resistencia. Cali. #ParoNacional*. Twitter. <https://twitter.com/UnivalleU/status/1404250260101271558>
- Uprimny, R. (2 de junio de 2021). *El decreto de "asistencia militar" de Duque es inconstitucional*. Obtenido de sitio web de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8501-el-decreto-de-asistencia-militar-de-duque-es-inconstitucional>
- Valencia Grajales, J. F. (21 de mayo de 2021). *a cooptación final del ejecutivo de todos los poderes desde los órganos de control hasta la rama judicial. El quiebre final del "check and balance" en Colombia*. Obtenido de sitio web de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8473-la-cooptacion-final-del-ejecutivo-de-todos-los-poderes-desde-los-organos-de-control-hasta-la-rama-judicial-el-quiebre-final-del-check-and-balance-en-colombia>
- Valencia Grajales, J. F., Marín Galeano, M. S., & Insuasty Rodríguez, A. (16 de julio de 2021). *Primera Línea como actor emergente. Significado y concepto. Reflexiones*. Obtenido de sitio web de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/8602-primera-linea-como-actor-emergente-significado-y-concepto-reflexiones>
- Valencia, F. [@FelicianoValen] (2 de septiembre de 2020). *#ParoNacionalYa Por el pésimo gobierno El país sumido en desigualdad, hambre, violencia y masacres Asesinatos de líderes sociales, jóvenes y*. Twitter. <https://twitter.com/FelicianoValen/status/1301131861981384705>
- Vallejo Cruz, L. F. (2016). *La propuesta de política de la Cumbre Agraria Étnica y Popular. Humanidades digitales, diálogo de saberes y prácticas colaborativas en red*. Obtenido de https://www.javeriana.edu.co/unesco/humanidadesDigitales/ponencias/pdf/IV_83.pdf

- Vallejo Duque, Y., & Insuasty Rodríguez, A. (20 de abril de 2020). *Deuda Pública, salida fallida para la Crisis Mundial*. Obtenido de sitio web de Desinformémonos: <https://desinformemonos.org/deuda-publica-salida-fallida-para-la-crisis-mundial/>
- Vallejo Duque, Y., & Insuasty Rodríguez, A. (25 de junio de 2021). *La clase política colombiana, un mal para no repetir*. Obtenido de sitio web de Desinformémonos: <https://desinformemonos.org/la-clase-politica-colombiana-un-mal-para-no-repetir/>
- Vallejo Duque, Y., & Insuasty Rodríguez, A. (25 de septiembre de 2020). *Las luchas de los pueblos por la vida: de América Latina para la Humanidad*. Obtenido de sitio web de Desinformémonos: <https://desinformemonos.org/las-luchas-de-los-pueblos-por-la-vida-de-america-latina-para-la-humanidad/>
- Vallejo Duque, Y., & Insuasty Rodríguez, A. (26 de febrero de 2021). *Juicio histórico contra el Estado colombiano: genocidio político, crímenes contra la paz y la impunidad*. Obtenido de sitio web de Desinformémonos: <https://desinformemonos.org/juicio-historico-contra-el-estado-colombiano-genocidio-politico-crimenes-contra-la-paz-y-la-impunidad/>
- Vallejo Duque, Y., & Insuasty Rodríguez, A. (26 de julio de 2021). *El Estado colombiano nunca negociará sus líneas rojas, garantía del statu quo*. Obtenido de sitio web de Kavilando: <https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/8623-el-estado-colombiano-nunca-negociara-sus-lineas-rojas-garantia-del-statu-quo>
- Vallejo Duque, Y., & Insuasty Rodríguez, A. (4 de mayo de 2021). *Colombia vive un nuevo pico de la lucha social*. Obtenido de sitio web de Desinformémonos: <https://desinformemonos.org/colombia-vive-un-nuevo-pico-de-la-lucha-social/>
- Vallejo Duque, Y., & Insuasty Rodríguez, A. (4 de mayo de 2021). *Colombia vive un nuevo pico de la lucha social*. Obtenido de sitio web de Desinformémonos: <https://desinformemonos.org/colombia-vive-un-nuevo-pico-de-la-lucha-social/>

- Valora Analitik. (2021) Pobreza en Latinoamérica llegará a su máximo por el Covid-19: Cepal. Obtenido de: <https://www.valoraanalitik.com/2021/03/04/pobreza-en-latinoamerica-llegara-a-su-maximo-por-el-covid-19-cepal/>
- Vega Cantor, R., & Jáuregui González, A. (2013). *Sangres y Cemento. Hulega y masacre de trabajadores en Santa Bárbara (1963)*. SUTIMAC.
- Velásquez Gómez, R. (21 de mayo de 2021). La gente de bien. *El Colombiano*. Obtenido de <https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/la-gente-de-bien-GB15058619>
- Vía Campesina. (16 de junio de 2016). *Colombia: La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular avanza como propuesta de país*. Obtenido de sitio web de La Vía Campesina: <https://viacampesina.org/es/colombia-la-cumbre-agraria-campesina-etnica-y-popular-avanza-como-propuesta-de-pais/>
- Zibechi, R. (12 de julio de 2021). *Las semillas de la emancipación están intactas*. Obtenido de sitio web de Desinformémonos: <https://desinformemonos.org/las-semillas-de-la-emancipacion-estan-intactas/>
- Zibechi, R. (enero-junio de 2014). Liberar el mundo nuevo que late en el corazón de los movimientos. *Revista Kavilando*, 6(1), 7-14. Obtenido de <https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/71>
- Zuluaga Cometa, A., & Arias Mejía, J. C. (2020). Visiones de paz del Consejo Municipal de Paz. Caso Medellín (2016-2019). *El Ágora USB*, 20(2), 57-72. <https://doi.org/10.21500/16578031.4617>
- Zuluaga Cometa, H. A., & Insuasty Rodríguez, A. (2018). Antioquia: laboratorio expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en Colombia. *Revista Copala*, Año 3(5), 139-159. Obtenido de <https://app.box.com/s/oh2a8m3en1m8fcemqk2av4nhlfsufmaf>

ISBN: 978-958-56924-9-7

Editorial *Kavilando - Redipaz - Desde Abajo*